

Tiempos de rebelión: "Que se vayan todos" : calles y plazas en la Argentina 2001-2002	Titulo
Mariotti, Daniela - Autor/a; Comelli, María - Autor/a; Petz, María Inés - Autor/a; Wahren, Juan - Autor/a; Giarracca, Norma - Autor/a; Teubal, Miguel - Autor/a; Zibechi, Raúl - Otra;	Autor(es)
Buenos Aires	Lugar
Antropofagia	Editorial/Editor
2007	Fecha
Universalismo Pequeño, Experiencias de Investigación no. 2	Colección
Crisis política; Rebelión popular; Argentina;	Temas
Libro	Tipo de documento
* http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/igg-uba/20161104012802/Tiempos.pdf	URL
Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual CC BY-NC-SA http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)
Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
 Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
 Latin American Council of Social Sciences



Universalismo pequeño
Experiencias de investigación N° 2

**Tiempos de rebelión:
“Que se vayan todos”**
Calles y plazas
en la Argentina:
2001-2002

Daniela Mariotti
María Comelli
María Inés Petz
Juan Wahren
Norma Giarracca
Miguel Teubal

Presentación
Raúl Zibechi



Las fotos de los artículos son de Luis María Herr, Luciana García Guerreiro, Federico Bareiro y Miguel Teubal

Universalismo Pequeño
Experiencias de investigación
Coordinación: Norma Giarracca

Nº1: Cuando el Territorio es la vida: la experiencia de los Sin Tierra en Brasil.

Nº2: Tiempos de rebelión: "Que se vayan todos". Calles y plazas en la Argentina: 2001-2002.

Nº3: Los nuevos significados de la lucha por la tierra y el territorio en América Latina (abril 2008)

Tiempos de rebelión: "Que se vayan todos". Calles y plazas en la Argentina: 2001-2002.

Editorial Antropofagia.

www.eantropofagia.com.ar

ISBN: 978-987-1238-34-7

Giarracca, Norma

Tiempos de rebelión : que se vayan todos : calles y plazas en la Argentina 2001-2002 / Norma Giarracca ; Daniela Mariotti ; María Comelli. - 1a ed. - Buenos Aires : Antropofagia, 2007. 168 p. ; 23x16 cm.

ISBN 978-987-1238-34-7

1. Sociología. I. Mariotti, Daniela II. Comelli, María III. Título
CDD 301

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723. No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su almacenamiento ni transmisión por cualquier medio sin la autorización de los editores.

Índice

Prólogo	7
Presentación	13
<i>Por Raúl Zibechi</i>	
<i>Por Raúl Zibechi</i>	
La Trama de una rebelión. Diciembre de 2001 a enero de 2002: las provincias	17
<i>Daniela Mariotti, María Comelli,</i>	
<i>María Inés Petz y Juan Wahren</i>	
La rebelión de 2001	113
<i>Norma Giarracca y Miguel Teubal</i>	
La trama: una propuesta metodológica	139
<i>Daniela Mariotti</i>	
Anexo I. Metodológico	147
Anexo II. Cuadros	149
Anexo III. Los asesinados en estas rebeliones	155

Prólogo

América Latina presenta desde la última década del siglo pasado no sólo una resistencia tenaz y continua a la imposición de políticas de corte neoliberal, emanadas de los organismos de crédito internacionales, sino una visión emergente acerca de otros mundos re-creados. Es decir, desde distintos Movimientos Sociales ofrece una cosmovisión que incluye muchos “otros”: tipo de organización, lazos sociales, relaciones con la naturaleza, relación de ellos con los estados nacionales, nuevas concepciones sobre los estados y naciones (pluriétnicos) y nuevas articulaciones con el mundo.

Si bien durante todo el siglo XX “Nuestra América” –en el decir de José Martí– resistió las diversas dominaciones económicas, sociales, culturales y étnicas por medio de acciones civiles, estatales, culturales, etc., en esta nueva etapa resurgen vibraciones que remiten a las raíces más profundas de estos territorios. En efecto, las movilizaciones indígenas ecuatorianas de los noventa, Chiapas al promediar la década, Bolivia al final, así como la reaparición de las luchas afro-colombianas, brasileñas, etc. inundaron estos tiempos de novedosas formas de intervención política que se resisten a ser comprendidas con los viejos conceptos del pensamiento social y político moderno. Nuestra América expresa, de pronto, el “universalismo pequeño” (nuevamente Martí) donde las ideas de “nación” europea y moderna, la ciudadanía y derechos liberales quedan estrechos y desfasados de época. Y esto porque las épocas, los tiempos, espacios y lugares en estos territorios difieren de los sentidos que se les otorgaba en aquellos otros allende el mar, donde las ideas liberales emergieron.

Es de este modo que en el devenir cotidiano de los movimientos emergentes pero también en sus momentos de irrupción muchos intelectuales latinoamericanos y de otras latitudes, nos encontramos en lugares comunes que incluyen espacios públicos como las calles, plazas, rutas, universidades y teatros. Pero también nos encontramos en la re-creación de nuevos mundos como las territorialidades campesinas del Movimiento Sin Tierra; la “recuperación de estado” de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, Salta; los caracoles zapatistas de Chiapas y las comunas autónomas oaxaqueñas en México o en el Ayllu boliviano. Desde nuestro lugar, como intelectuales, convivimos en interacciones cargadas de intersubjetividad, emociones y de pensamientos-sentimientos.

Cuando nos proponemos dar cuenta de los nuevos mundos, dar a conocer las nuevas experiencias, producimos conocimientos que toman como base aquel que nos guió en el siglo XX pero que, a la vez, lo atraviesan diagonalmente para generar un excedente que es propio de nuestra época. Cambiar el modo de conocer supone un nuevo conocimiento. Tomar en cuenta los

cambios en las ciencias, en las humanidades, en el arte del siglo XX es la base para pensar en momentos de pasajes, de transiciones, de no-certezas y sanas incertidumbres.

El modo en que los latinoamericanos nos acercamos a los nuevos movimientos desafía las viejas dicotomías de investigador-investigado; sujeto-objeto; estructura-acción. Supone un trabajo hermenéutico en el que estamos implicados no sólo como investigadores sino como sujetos interesados en superar el modelo de sociedad que se gesta en las últimas décadas. En estos tiempos es frecuente oír hablar de “investigador militante” o “investigador comprometido” o estar en contacto con revistas como “Chiapas” o con la producción de materiales basados en las entrevistas de referentes como la que Bernardo Manzano Fernández le hizo a Joao Pedro Stédile del Movimiento Sin Tierra o Daniel Mato a Luís Macas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Con estos nuevos estilos intelectuales afianzamos aún más las reglas del trabajo intelectual y la responsabilidad política-académica del investigador pero también explicitamos que estamos implicados en la situación de estudio de variados modos, no lo negamos produciendo una falsa “objetividad y neutralidad”. Se trata de distinguir entre “objetividad y neutralidad” de la manera que nos enseña Boaventura de Sousa Santos. Objetividad porque tenemos metodologías propias de las ciencias sociales para tener un conocimiento que sea riguroso y que nos defienda de dogmatismos y al mismo tiempo vivimos en sociedades muy injustas en relación con las cuales no podemos, ni queremos, ser neutrales.

El Grupo de Estudio de los Movimientos Sociales de América latina (GEM-SAL) fue creado con la finalidad de incluir en nuestro horizonte de conocimientos a toda América Latina. Lo hacemos “desde abajo y por abajo”, desde las poblaciones en resistencia que poco a poco están transformando los viejos escenarios de los noventa del pasado siglo. De entrada lo propusimos como un lugar de innovación y de creatividad en los modos de conocer. Un lugar marcado por nuestras historias como investigadores de las Ciencias Sociales pero que se abre a otras propuestas que nos brindan el arte y las humanidades. Reconoce como antecedentes el Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO donde confluimos equipos de distintos países de América Latina formados por académicos comprometidos con los movimientos campesinos y el Coloquio Internacional: “De la exclusión al vínculo” que se llevó a cabo del 14 al 16 de junio de 2005 en el Instituto Goethe de Buenos Aires. En este último evento coexistíamos con los acontecimientos conocidos como “La guerra del gas” en Bolivia. Esta contemporaneidad de acciones colectivas, preñadas de esperanzas y ese espacio de pensamiento donde confluyeron intelectuales y actores sociales fue decisiva para pensar otros dispositivos con el fin de seguir estos temas del mismo modo comunitario en que los acontecimientos se dan. Pensar en colectivo; generar una comunidad de pensamiento; articular

intelectuales que estamos trabajando en el mismo registro y con sujetos que también están articulados desde distintas regiones.

Como investigadores de la Universidad de Buenos Aires generamos el GEMSAL dentro del Área de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani. La finalidad es estimular la generación y difusión de conocimientos sobre estos fenómenos de nuestro siglo. Participamos en un proyecto de un ATLAS de movimientos socioterritoriales con universidades latinoamericanas y el Instituto Goethe de Buenos Aires; continuamos con el Seminario de Investigación sobre Protesta y Movimientos Sociales en América Latina para alumnos avanzados de la Carrera de Sociología y publicamos estas **Experiencias de Investigación**. Con este nombre deseamos dejar claro el carácter innovador de nuestros trabajos: relatorías de campo; “tramas” de situaciones de protestas; entrevistas a dirigentes que inviten a la reflexión y la crítica, etc. Siempre acompañados por las fotografías que, como dice el excelente fotógrafo y académico brasileño Douglas Mansur, “informan, forman y desarrollan conciencia”. La importancia de la imagen en nuestros días no necesita justificación pero el modo en que Douglas piensa la fotografía tiene la suficiente originalidad para ameritar conocerlo. Podemos pensar la cámara, nos dice, como nuestros ojos, el revelado como nuestra interpretación y las ampliaciones como nuestra propia expansión emocional. Es decir, agregamos nosotros, como un dispositivo de conocimiento, expansión de nuestra sensibilidad y conciencia de pertenencia a un mundo cósmico que compartimos no sólo con los otros seres humanos sino con otros seres y con la naturaleza en general.

Oswaldo de Andrade exclamaba “La alegría resiste contra todo” y Boaventura de Sousa Santos –quien lo cita– agrega que la utopía es la exploración mediante la imaginación de nuevas formas de oportunidad y voluntad humana; cotejar lo que existe para acceder a un escenario radicalmente mejor, por el cual vale la pena luchar y del que toda la humanidad tiene el derecho a formar parte. La fuerte creencia de que estas alegrías y posibilidades hoy residen en los Movimientos Sociales que son los únicos capaces de generar nuevos significados y valores, articular saberes y generar pensamientos para el bien común, nos desafía en estos acompañamientos desde nuestros lugares universitarios.

Lo que venimos a presentar en este libro

En este libro presentamos nuestros avances de investigación acerca de uno de los acontecimientos que más impactaron en los últimos tiempos a nuestro propio país: las rebeliones argentinas de 2001-2002. Lo hacemos dando a conocer, en primer lugar, una de las metodologías de investigación que utilizamos para indagar cómo se generan los procesos, qué actores se involucran y

el “por qué” de sus acciones (demandas). Se analizan momentos de la historia que aparecen como si se dieran en un “puro presente”, en fuertes irrupciones que con los días se despliegan y resignifican la etapa anterior. Las densidades políticas de estos acontecimientos pueden variar por muchas razones –escalas geográficas, tipo de actores, demandas, a quién se enfrentan, etc.– pero siempre marcan un hito, un antes y un después de ese acontecimiento. Las rebeliones del 2001-2002 mostraron densidad política por muchas razones y una de ellas fue por la escala del acontecimiento: si bien el cacerolazo del 19 comenzó en la Ciudad de Buenos Aires, todo el territorio argentino estuvo involucrado y atravesado por él. No deseamos decir (como algunos colegas) que la “pueblada” porteña del 19 de diciembre y la resistencia del 20 se dieron en todo el territorio por igual sino que las provincias intervinieron con acciones semejantes o diferentes pero que a la luz de lo que aconteció en el nivel nacional todo cobró otros sentidos. Precisamente en la primera parte de este libro indagamos acerca de lo que sucedió en las provincias: buceamos esos otros sentidos generados en territorios diferentes a la gran metrópolis con el fin de comprenderlos e intentar lograr la construcción de una “ecología de escalas” (imbricar lo local, provincial, regional y nacional).

Los modos de bucear lo que ocurrió en las provincias –sobre todo en aquellas que habían sido escenarios de las protestas de la década anterior (que el equipo de trabajo había registrado y analizado)– fueron a través de las cronologías (listar lo que pasa día a día) extraídas de los diarios provinciales y nacionales. Este trabajo dio lugar a dos resultados:

- un banco de datos donde se abstraen los detalles de los hechos con el fin de cuantificarlos (véase el anexo estadístico) y;
- la construcción de la trama de la rebelión nacional (la de Buenos Aires), imbricada con las rebeliones particulares de cada provincia.

Con este método se intenta “narrar”, construir discursivamente cada uno de estos procesos provinciales con el fin de articularlos a uno general, en escala nacional pero donde la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires son sólo el trasfondo, el telón de fondo¹. Adelante, están los acontecimientos en que nos centramos: los de las provincias seleccionadas.

Por eso el lector encontrará en este libro un primer capítulo, firmado por Mariotti, Comelli, Petz y Wahren, con esta narrativa, con la trama de las rebeliones provinciales en las que brotan diariamente significativos hechos que como borbotones llenaban unos tiempos apresurados y densos. El lector argentino sabe que estaba sucediendo en el país por aquellos momentos,

¹ Véase Schuster, F. *et. al* (2002) *La trama de la crisis. Modos y formas de protesta social a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001*, Informe de Coyuntura N° 3, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA.

sólo se lo recordamos, pero recomendamos para aquellos que no lo tienen presente o que sean extranjeros y no conozcan estas rebeliones sureñas, que comiencen por el artículo de Giarracca y Teubal que tiene como finalidad poner en contexto la trama. En síntesis, la primera parte presenta una gran y articulada crónica periodística de los hechos fundamentales. Están los registros, no hay interpretaciones de los investigadores; no obstante tiene un importante trabajo invertido y un significativo excedente a la simple crónica. Las noticias se buscaron, se organizaron con determinados ejes temáticos y sobre todo se articularon discursivamente, se “entramaron” hasta lograr nuevos sentidos que habilitan una mejor comprensión en el nivel nacional.

Luego está el artículo de Giarracca y Teubal que permite poner en contexto “la trama”. Este recurso metodológico fue utilizado como insumo del trabajo junto con información proveniente de una base de datos de conflictos provinciales del período generada por el equipo, una segunda base de otro colega para el nivel nacional (Alejandro Gonda) y la propia mirada de los investigadores, experimentados en cuestiones de crisis económicas, procesos sociales, protestas, etc., pero también ciudadanos que participaron activamente en los acontecimientos de la ciudad. Ellos fueron testigos y participantes de aquello que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, en las Asambleas barriales (desde la Asamblea de Coghlan) y toda esta experiencia fue un insumo de primer nivel a la hora de pensar sobre lo acontecido. No obstante el trabajo no es una simple “crónica o diario” de ellos como participantes sino el resultado de un estudio (con todas las reglas del trabajo intelectual) donde intentan indagar, comprender, densificar e interpretar los acontecimientos.

Todos estos capítulos están precedidos por una presentación que hace Raúl Zibechi desde su propia reflexión de todo lo que él también vivió. Raúl Zibechi es un intelectual privilegiado en sus reflexiones sobre la Argentina, se ubica allí, en los bordes, en la frontera (pero ya no metafóricamente) entre el “ser de adentro y de afuera”. Es un intelectual uruguayo que piensa América Latina en su conjunto, incluso cuando nos piensa (tarea que a nosotros nos cuesta tanto) y cada vez que nos devuelve su mirada, comprendemos más y mejor. El GEMSAL agradece su contribución.

Por último, presentamos unas reflexiones metodológicas acerca de la construcción de la trama –a cargo de Daniela Mariotti– que tiene una finalidad específica: mostrar cómo investigamos. El apartado pretende aportar una herramienta docente, ya que todos nosotros lo somos. Los mejores metodólogos son los que reflexionan sobre su propia práctica, nuestros seminarios donde transmitimos el oficio nos desafía a estar constantemente llevando a cabo esta tarea. Terminamos con un anexo estadístico con información de nuestra propia base de datos y otro donde recopilamos los nombres de quienes perdieron la vida en estos días aciagos. Lo hacemos para recordarlos,

homenajearlos y tenerlos presentes pero también para apelar al Estado argentino a que termine con esta ominosa costumbre de matar (en abril de 2007 se volvió a asesinar en la provincia de Neuquén a un maestro en huelga). Por últimos agradecemos a los fotógrafos, Federico Bareiro, Luciana García Guerreiro, Luis María Herr y Miguel Teubal que nos acompañan en esta travesía y a Gabriela Massuh quien comparte con el GEMSAL espacios y compromisos.

Como lo hizo alguna vez Julio Cortázar, proponemos al lector que construya su propio modo de lectura de este libro.

GEMSAL – Instituto Gino Germani
Universidad de Buenos Aires
Mayo, 2007

Presentación

Por Raúl Zibechi²

La unidad del abajo y del más abajo

Qué hermoso período reflejan las páginas de este libro. No cabe duda que la rebelión es la fiesta de las y los oprimidos; que las semanas en torno al 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron una suerte de inversión del mundo gris de la opresión y el silencio cotidianos. Por estas páginas desfilan esas mujeres y esos jóvenes que tomaron la palabra para afirmar, con acciones y reflexiones, la potencia que anida entre los oprimidos de este continente. Y lo hicieron a su manera, sin tomar prestadas voces y ademanes sino representando en el espacio público los gestos que han ido ensayando en la oscuridad de la resistencia que es su vida corriente, como nos recuerda James Scott³.

Y qué hermosa lección nos han dado al realizar su potencia sin dar vida a instituciones formales y separadas de sus existencias, sino sobre la base de esas organizaciones informales que forman parte inseparable de su cotidianidad. A lo largo de las páginas de este libro desfilan los de abajo y los del más abajo: obreros y pequeños campesinos, desocupados, sin techo y sin tierra, desatando sus furias. Vale la pena detenernos en esos momentos, fugaces ciertamente, pero reveladores de lo que vendrá, de lo que puede ser, que no es sino lo que ya existe en gestación en el seno de los sectores populares.

Las semanas que cubre el trabajo, que van de la expresión de “la cólera” al “que se vayan todos”, son el tiempo apretado y apurado de la rebelión. Pero son además esa “concertación de las voces” que confluyen de modo natural en la protesta. Ese tiempo denso, potente, es un verdadero relámpago que ilumina el tiempo lento, gris, opaco de la vida diaria de los oprimidos. Detenernos en esa fugacidad es vital para quienes, como los autores de este trabajo, creen –creemos– en la emancipación, o sea en la capacidad de los seres humanos de liberarnos de las ataduras ancestrales sin tutorías del Estado, de los partidos y las iglesias. Emanciparnos es hacerlo por nosotros mismos. Y eso es parte de lo que reflejan esas vigorosas semanas.

En este tiempo, los pobres no aparecen sujetos a su condición heredada sino que la subvierten, la invierten, poniendo en primer lugar su capacidad

2 Raúl Zibechi es uruguayo, colaborador del semanario Brecha y autor de “Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento”, Nordan, Montevideo, 2003.

3 James Scott, *Los dominados y el arte de la resistencia*, ERA, México, 2000.

de desnudar la opresión, deslizándose de su situación anterior. El momento en que se rompe la rutina y se va más allá de la opresión es lo que a menudo deja de lado la sociología establecida, más atenta a retratar sujetos con identidades prefijadas, inmóviles, que preocupada por mostrar sus capacidades, ésas que sólo se realizan en la fugacidad de la revuelta. Ahí está, precisamente, uno de los aciertos de este libro. Apostar por los momentos de rebelión es hacerlo por la posibilidad, siempre incierta, de dejar de ser, de mover-nos del lugar asignado por el Estado y el capital –pero también por la academia– para colocar el acento en la posibilidad, en la aventura si se quiere, de dar el paso hacia lo indefinido. De alguna manera, este trabajo retrata la posibilidad de los oprimidos de romper las amarras de sus identidades y se lancen al vuelo en busca de una nueva relación con el entorno y con ellos mismos. Paso que no puede darse ni dentro de las instituciones ni en el espacio-tiempo de una cotidianeidad que debe ser rasgada, hendida, para abrir otras posibilidades.

Focalizar el análisis en los momentos de la revuelta es cuestión de compromiso, mucho más que de capacidades teórico-técnicas. Las segundas son discutibles. La primera es, o no es. Y sabemos que el compromiso militante del intelectual o del estudioso no es un dato de la realidad sino una *rara avis* que sobrevuela apenas como posibilidad latente, nunca apegada a los asépticos salones de la Universidad sino a las procelosas aguas del conflicto social. Una establecida epistemología del saber se enfrenta a la epistemología de la pregunta, lanzada hacia el infinito *preguntando caminamos* que no se conforma con el pensamiento instituido. Y, sobre todo, que apuesta al conocimiento como creación colectiva.

Jacques Rancière polemiza con Pierre Bourdieu. Lo acusa de haber convertido a los pobres en objetos de una sociología formal que los fuerza a desempeñar el papel de “pobre entrevistado por sociólogo”. Pero existen otras posibilidades, asegura, si dejamos de considerarlos como objetos pasivos. “El primer remedio para la *miseria del mundo* consiste en mostrar la riqueza de la cual es portadora”⁴, señala en alusión al grueso volumen del sociólogo. La polémica está en el centro de dos formas de ver el mundo de los de abajo: como subordinación ineludible o como potencia emancipatoria. Suele decirse que quienes defienden la segunda mirada a menudo desestiman los límites y problemas que presenta. Es cierto. Pero no es menos cierto que anclarnos en la mirada estructural centrada en la opresión, es el camino que pavimenta la inacción. O la representación.

En segundo lugar, quisiera detenerme en la unidad entre los de abajo y los del más abajo, por utilizar conceptos zapatistas. A mi modo de ver, es el

4 Jacques Rancière, *Le philosophe et ses pauvres*, Flammarion, 2007, citado por Alma Bolón, *Brecha*, 13 de abril de 2007.

segundo gran acierto de este trabajo. Por las páginas que siguen desfilan dos modos diferentes de protesta, que las más de las veces marchan por caminos separados. En las jornadas en torno al 19 y 20 de diciembre esos caminos se entrecruzan hasta formar un torrente poderoso, irresistible, capaz de destituir y vetar a los de arriba. Pero la confluencia no es unidad; se plasma sólo en la acción callejera, siempre fugaz, transitoria. Trabajadores sindicalizados y grupos “organizados” confluyen con desocupados y “vecinos”, categoría ésta apta para incluir la diversidad pero tan amplia que impide visualizar sujetos más o menos definidos.

En suma, es en la acción donde confluyen el abajo y el más abajo, portadores de culturas organizativas diferentes. Pero, valdría preguntar: ¿Podrían confluír de otro modo esos sectores tan diversos? ¿Es posible incluir el abajo y el más abajo en una misma organización, estable, institucionalizada? La respuesta, para quien está familiarizado con ambos mundos, parece evidente. Y esta es precisamente una de las novedades que trajo el neoliberalismo, que ha estratificado el campo popular en culturas tan diversas que no son reducibles a un solo estilo o cultura de organización y de lucha.

Durante el período del Estado del Bienestar, o sea durante el tiempo paudado por la centralidad del viejo movimiento sindical, el abajo y el más abajo pudieron compartir el mismo espacio-tiempo de la gran fábrica taylorista-fordista. La rígida estratificación entre obreros calificados y no calificados, que a menudo era una división entre obreros adultos por un lado, y mujeres y jóvenes por otro, permitió pese a todo un mínimo contacto entre los oprimidos, una pertenencia y un enemigo comunes. No era poca cosa. Diversos trabajos han mostrado cómo las grandes acciones de la clase obrera fueron dinamizadas por el más abajo y acompañadas con mayor o menor entusiasmo por el abajo⁵. A menudo los grandes conflictos comenzaban en las secciones en las que predominaban los obreros menos calificados y se expandían al resto de la fábrica. Esa unidad en la acción no estaba exenta de tensiones, ya que muchas veces los obreros y obreras del más abajo solían desbordar a los dirigentes sindicales yendo mucho más lejos de lo que éstos estaban dispuestos a llegar. De alguna manera, el sindicato fue escenario –entre otras– de una lucha sorda entre las diversas categorías por imponer sus condiciones y bregar por sus necesidades.

El neoliberalismo separó ambos sectores como forma de mantener en pie la dominación. La robotización y la informatización de las plantas redujeron

5 Para el caso argentino puede consultarse James P. Brennan, *El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba 1955-1976*, Sudamericana, Buenos Aires, 1996 y Mirta Zaida Lobato, *La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso (1904-1970)*, Prometeo, Buenos Aires, 2001. Para el caso uruguayo, Raúl Zibechi, *De multitud a clase. Formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-2005)*, Ideas, Montevideo, 2006.

al mínimo la cantidad de obreras y obreros no calificados. Hoy el grueso de los desocupados son jóvenes y mujeres, los que anteriormente integraban las categorías más “bajas” de las fábricas. La importancia de analizar revueltas como las que retrata este libro, es que son las pocas instancias en las que ambos sectores actúan juntos.

A partir de ahí, se acumulan las dificultades, pero también las nuevas posibilidades de la acción social. Una de las más importantes, es que el abajo y el más abajo no admiten ser incluidos en formas de unidad instituidas como los sindicatos y los partidos. El mundo de los oprimidos se ha complejizado hasta extremos inimaginables décadas atrás, cuando el movimiento sindical y campesino y los partidos podían erigirse como sus representantes. Ahora no sólo está en crisis la figura de la representación, sino que ocupados y desocupados –por hacer el corte más grueso aunque simplista– presentan estilos y culturas político-sociales contradictorios y a menudo incompatibles. Ante esa dificultad, y convencidos de que sólo la confluencia entre el abajo y el más abajo puede derrotar el modelo neoliberal, el zapatismo está ensayando la *Otra Campaña* como forma de crear espacios en los que ambos sectores vayan construyendo un lenguaje común, que es la base de cualquier acción de envergadura. Los resultados, hasta ahora, no han sido felices. Y no sólo en México. Las dificultades que encuentran los sin tierra de Brasil y los indios de la región andina para estrechar lazos con otros actores, son apenas un indicador de las dificultades para construir espacios comunes que vayan más allá del momento de la protesta y la rebelión.

Así y todo, el debate está servido. Recuperar la trama de la vasta acción social de los meses del *Argentinazo* es un paso ineludible a la hora de estimular un debate tan urgente y necesario como escaso y limitado. La construcción de puentes entre los mundos del abajo y del más abajo es parte de la reconstrucción del campo popular y, por lo tanto, no será obra de unos o de otros sino, como adelantara Mariátegui, la creación heroica de nuestros días. Este libro se inserta en ese proceso ya que abreva en las orillas de la rebelión popular, y al mostrar sus contradicciones y flaquezas pone en evidencia que los caminos de la emancipación necesitan ser fecundados por una multiplicidad de actores.

Montevideo, abril de 2007

La Trama de una rebelión. Diciembre de 2001 a enero de 2002: las provincias⁶

Daniela Mariotti, María Comelli,
María Inés Petz y Juan Wahren⁷

A todos los que perdieron la vida en estas rebeliones

*“El país agoniza. Basta ladrones, el pueblo se muere
y no se les mueve ni un pelo. Políticos corruptos. . .”*

Vecino de Río Cuarto, Córdoba

Las deudas internas

Días después de haberse decretado el “corralito financiero”⁸, comenzó a resquebrajarse la tensa calma que se vivía en esas semanas, luego de las medidas de ajuste económico tomadas por el Gobierno Nacional. Tal como sucedió en 1989, en la agonía del gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín, en diciembre de 2001 comenzaron a multiplicarse, en distintas provincias del país, los saqueos a pequeños comercios y grandes supermercados. También se declaró una huelga general en rechazo de estas medidas que sumaban, a las restricciones bancarias, un ajuste financiero del gasto estatal, con la consecuente rebaja y atraso en el pago de los sueldos estatales y docentes.

⁶ Este trabajo forma parte de la investigación “Acciones colectivas: protestas y organizaciones sociales en escenarios de crisis, en el interior del país” financiado por la Universidad de Buenos Aires, dirigido por Norma Giarracca y llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA.

⁷ Daniela Mariotti, María Comelli y Juan Wahren son doctorantes de la Universidad de Buenos Aires. María Inés Petz es Becaria UBACYT.

⁸ El “corralito financiero”, era un eufemismo para denominar la confiscación de bienes privados por parte de los bancos con el aval del gobierno. El paquete de medidas consistió sintéticamente en que no se podía retirar por semana más de doscientos cincuenta pesos o dólares de cada cuenta bancaria, medida que supuestamente iba a ser levantada luego de un mes y medio. Los bancos no podrían cobrar comisiones de las extracciones realizadas en pesos o dólares. Los fondos entre cuentas podían operarse libremente. No podían realizarse transferencias al exterior. Véase Giarracca y Teubal en este mismo libro.

Entre el 14 y el 17 de diciembre se realizó la consulta popular a nivel nacional organizada por el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), un espacio donde confluyeron sindicatos (principalmente de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA), sectores de la Iglesia, organizaciones de trabajadores desocupados, federaciones de pequeños y medianos comerciantes y otros sectores sociales. Durante cuatro días se instalaron mesas de votación en plazas, calles, lugares de trabajo, barrios y centros culturales. Participaron más de tres millones de personas que apoyaron con sus votos las principales reivindicaciones del espacio: un seguro de desempleo y formación para los desocupados, universalización de las asignaciones familiares, entre otras medidas concretas para una redistribución de la riqueza en pos de los sectores sociales más desfavorecidos.



Sábado 15 de diciembre

Durante la jornada, mientras circulaban a través de la prensa los privilegios monetarios de los que eran beneficiarios los senadores⁹, habitantes de los barrios populares de la ciudad de Concordia en la provincia Entre Ríos, en su mayoría mujeres y niños, saquearon una de las sucursales del supermercado Maxitotal que había presentado la quiebra y se encontraba cerrado

⁹ Las sumas a percibir por los miembros de la Cámara Alta giraban alrededor de los treinta mil pesos en concepto de dietas, gastos de representación, pasajes aéreos y combustibles.

aunque lleno de mercadería. La Guardia de Infantería y los efectivos policiales presentes sólo lograron salvar el mobiliario del supermercado. No hubo acciones represivas ni detenidos. Sin embargo, horas más tarde, se congregaron unas doscientas personas en la casa central del supermercado, donde se produjeron incidentes ya que cuando las personas intentaron ingresar, la Policía comenzó a disparar balas de goma y gases lacrimógenos, provocando varios heridos. Luego de los incidentes, por la noche, unas setecientas personas permanecieron frente al supermercado, exigiendo a la empresa la entrega de alimentos.

En la ciudad santafecina de Rosario hubo saqueos en tres supermercados y en otros comercios de la ciudad. Asimismo se produjeron incidentes con la Policía que intentaba impedirlos. Más de ciento cuarenta móviles provinciales patrullaban constantemente distintos barrios de la ciudad.

Ante una convulsionada Mendoza que replicaba saqueos en las ciudades Godoy Cruz, Las Heras y el Gran Mendoza, el gobierno mendocino entregó bolsones con alimentos en las puertas de los supermercados y las municipalidades. Familias enteras se quejaban por “*el hambre*” y el retraso en el pago de los planes sociales¹⁰.

El Gobierno Nacional argumentaba que los saqueos se debían a que eran las vísperas de las fiestas navideñas y por ende “*era el momento más sensible del año*” y acusaba a la oposición de infiltrar punteros políticos que incentivaban estas acciones, queriendo generar caos e incertidumbre entre la población. Sin embargo la gente expresaba: “*Acá más que infiltrados hay hambre*”. Era evidente que las últimas medidas económicas habían agravado la situación de los sectores de la economía informal, arrastrándolos más allá de los niveles de tolerancia posible. Los comerciantes de distintas provincias cedían a la demanda de alimentos e incluso avanzaban en la prevención donando importantes cantidades de mercaderías.

Se producían, conjuntamente a los saqueos, reclamos y demandas de otros actores. Entre ellos, los transportistas de carga del litoral anunciaban que iniciarían un paro por tiempo indeterminado, reclamando rebajas en el combustible y tarifa mínima para algunos sectores. Manifestaban que la crítica situación por la que atravesaban era consecuencia de las medidas que acarrearba el “*corralito financiero*” al restringir la circulación de dinero. La medida alcanzaba a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

¹⁰ Estos subsidios para personas desocupadas consistían en un estipendio de ciento cincuenta pesos mensuales por los que los beneficiarios debían desarrollar tareas comunitarias. Los primeros programas de este tipo fueron implementados durante el segundo gobierno de Carlos Menem, como respuesta a los primeros cortes de ruta protagonizados por trabajadores desocupados en Cutral-Có y Plaza Huincul (provincia de Neuquén) y en General Mosconi y Tartagal (provincia de Salta).

Los empleados públicos, en distintas provincias, se manifestaban de diversas formas por el retraso en el pago de los sueldos de meses anteriores o la imposibilidad de cobrarlos debido a las interminables filas que se formaban en los bancos. En la ciudad de Mendoza cortaron las calles y aplaudían mientras gritaban “*el gobierno es inepto*”. Los empleados públicos de Godoy Cruz, en la misma provincia, tomaron un corralón municipal e interrumpieron la recolección de residuos. Los chaqueños de Resistencia, Barranqueras y de Tres Isletas iniciaron una huelga por tiempo indeterminado ante la posibilidad de cobrar los sueldos atrasados en bonos. Los empleados no docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, apoyados por los docentes, tomaron el predio universitario y la Facultad de Ciencias Agrarias por los recortes salariales y el recorte en el presupuesto.

Domingo 16 de diciembre

Las setecientas personas que habían permanecido toda la noche frente al supermercado Maxitotal en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, ingresaron a la tercera sucursal y posteriormente se dirigieron a locales de autoservicios, pequeños comercios y a una sucursal de Supermercados Norte, custodiados todos ellos por la Policía. En Guaymallén, Mendoza, las autoridades municipales, con apoyo del gobierno provincial, continuaban con la entrega de los bolsones de comida en las puertas de los supermercados “*saqueables*” mientras que se constituía un comité de emergencia para que los “*necesitados*” expresaran su situación en los municipios y no en los supermercados.

En tanto, grupos de desocupados chaqueños de Quitilipi, se movilizaban hasta el Concejo Deliberante solicitando asistencia alimentaria, remedios, terrenos prometidos y la restitución de los servicios de luz y agua.

Lunes 17 de diciembre

Los conflictos gremiales se disparaban y agudizaban en las distintas provincias. En Neuquén, los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Educación Neuquinos (ATEN), junto con organismos de Derechos Humanos, agrupaciones estudiantiles y partidos políticos de izquierda, marcharon en repudio a la represión sufrida en una movilización protagonizada días antes. La marcha que contó con más de quinientos manifestantes recorrió el centro de la capital neuquina hasta la Legislatura Provincial. Allí se profirieron contra el pago de sueldos en LECOP¹¹ y los retrasos salariales,

¹¹ El Gobierno Nacional a través del Decreto presidencial 1004/2001, de fecha 9/8/2001, estableció el Programa de emisión de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), por el cual transfería a las provincias que acordaran, a través del Banco de la

reafirmando el paro de actividades que había comenzado el 27 de noviembre anterior. Finalmente convocaron a una “gran marcha provincial” para el 19 de diciembre, en la que se manifestarían en contra de las políticas de ajuste y del autoritarismo del gobierno provincial.

Por su parte los trabajadores municipales de San Carlos de Bariloche resolvieron en asamblea mantener la suspensión de tareas a través de paros parciales, mientras que los trabajadores municipales de la capital catamarqueña iniciaron un paro total en reclamo por el pago de haberes.

Los docentes de Jujuy decidieron no iniciar la tarea compensatoria acordada por el gobierno, dado que el ciclo lectivo tuvo setenta días sin clases, como medida de fuerza por la falta de pago de los meses de octubre y noviembre. Por los mismos motivos los gremios estatales y de la salud pública de La Rioja iniciaron distintas acciones de protesta.

Por la noche, en la ciudad de Las Termas, Santiago del Estero, se produjeron disturbios a causa del conflicto gremial de empleados municipales que había comenzado el 4 de diciembre en reclamo de haberes atrasados. El conflicto fue liderado conjuntamente por los dos sindicatos municipales, el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) quienes organizaron para los días de huelga ollas populares y movilizaciones. Durante la jornada el cura párroco de Las Termas intentó mediar en el conflicto y sin arribar a resultados favorables, a las 22:30hs, unas trescientas personas se movilizaron tirando basura y cortando el tránsito. Hubo forcejeos con la Policía y se tiraron escombros en la Terminal de Ómnibus para bloquear la entrada general a la ciudad. Un grupo de desocupados se sumó a este escenario al marchar primero hacia el Concejo Deliberante y posteriormente a la Municipalidad, donde realizaron una asamblea para decidir cómo continuarían las medidas de protesta.

El Movimiento de Trabajadores Desocupados de Neuquén (MTD) se manifestó frente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y frente al Ministerio de Desarrollo Social provincial en reclamo de cuarenta nuevos subsidios que habían sido presentados y que no fueron efectivizados. Al mismo tiempo los de la ciudad de Santa Fe, se presentaron frente a distintos organismos públicos, reclamando el pago de las asignaciones de planes de empleo atrasados y la entrega de alimentos.

Los saqueos se recrudecían en Mendoza: “*Nosotros nos enteramos de otros saqueos y vinimos a hacer el nuestro*”, afirmaban vecinos de barrios periféricos de la capital mendocina. Entre la represión, los manifestantes detenidos y las acusaciones de los funcionarios entre sí y a la oposición política, el

Nación como fiduciario del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, bonos en pesos por un monto total que no podía exceder la suma de 1.000 millones de pesos.

Comité de Emergencia, que se había conformado el fin de semana anterior, decidió sumar a la Iglesia, los Municipios y al Gobierno Provincial para que conjuntamente abrieran comedores escolares y dieran una ayuda personalizada a los necesitados: *“En los comedores se les pedirá: nombre, número de documento y domicilio para evitar la ayuda al voleo”* referían desde el Comité de Emergencia. Por otra parte las voces oficiales continuaban expresando que los saqueos eran instigados y su finalidad era distinta a la satisfacción de las necesidades de las personas. *“Los saqueos no forman parte del comportamiento normal de los necesitados. Por lo general la gente encauza sus necesidades por la vía de las instituciones. Suponer otra cosa equivaldría a decir que los pobres, cuando tienen hambre, se dedican a robar. Esto no es así”*, declaraba Ema Cunietti, Subsecretaria de Desarrollo Social de Mendoza.

Los transportistas de carga continuaban el paro iniciado dos días atrás. Las rutas cortadas en la provincia de Entre Ríos recibieron el apoyo de la “Multisectorial de Entre Ríos para recuperar la República” y de los comerciantes chajaritenses quienes realizaron un apagón en sus centros de venta. En Gualeguaychú se sumaron a la protesta los productores agropecuarios realizando cortes en las Rutas N° 14 y 20. Así como realizaron un corte simbólico en la Ruta N° 16, en la que se dejó circular a los vehículos, invitando a los automovilistas a adherirse a la protesta. Hubo una fuerte custodia de la Policía y Gendarmería pero no se registraron incidentes.

Como consecuencia del despido de más de la mitad del personal de la fábrica de yeso Iggam en Piedras Blancas, Entre Ríos, los habitantes se volcaron a las calles y se movilizaron hasta la fábrica en una “marcha del silencio” que fue apoyada por la Municipalidad. Allí entregaron un petitorio a los directivos reclamando la reapertura de la fábrica y la reincorporación de los empleados despedidos. Por otra parte, las tres plantas de la empresa metalúrgica Montich, en Córdoba, fueron tomadas debido al conflicto generado por la falta de pago de las indemnizaciones de ciento cuarenta y siete empleados.

Escenas violentas se vivieron en una villa de emergencia situada en Rosario, donde un grupo de vecinos agredió con armas y piedras a miembros de la Policía y Bomberos que habían desalojado un piquete que mantenía cortada una avenida. En el enfrentamiento resultaron heridos una niña, un hombre, una mujer y dos policías.

Martes 18 de diciembre

Los representantes gremiales de los trabajadores municipales de la capital de Santiago del Estero que se encontraban de paro se reunieron con el intendente Zavallía, quien se comprometió a pagar los sueldos atrasados con bonos

LECOP después del 20 de diciembre. Posteriormente, y en el marco de la movilización de los municipales, se produjeron incidentes menores frente al edificio de la Municipalidad, cuando algunos manifestantes arrojaron tomates a funcionarios y empleados que no habían acatado el paro de actividades. En tanto, los gremios estatales de Neuquén también se movilizaron congregándose frente a la Fiscalía, para apoyar las denuncias realizadas contra el gobernador Jorge Sobisch por la represión sufrida, mientras continuaba el paro de actividades.

La Municipalidad de Neuquén fue escenario de una protesta organizada por más de trescientos desocupados que reclamaban la implementación de un bono de cincuenta pesos para las fiestas de fin de año. Rodearon el edificio comunal mientras se realizaba la asunción del nuevo Secretario de Cultura Municipal. Al no obtener respuestas, una parte del grupo fue hasta el barrio San Lorenzo: *“Vamos a ir a reclamar directamente en los hiper lo que no nos quieren dar los funcionarios”* y amenazaron con realizar un saqueo al Supermercado Bomba. Como medida de emergencia el gerente del local resolvió repartir bolsones de comida a los cincuenta manifestantes para descomprimir el conflicto barrial. En Santa Fe grupos de desocupados recorrieron supermercados locales reclamando alimentos y el cobro de planes atrasados. Los dueños de los supermercados prometieron entregar alimentos. Fue una movilización numerosa donde se unieron varios grupos, cuyos organizadores se encargaron de evitar desmanes y disturbios. Por el contrario, en Mendoza y Entre Ríos los saqueos continuaron produciéndose: el supermercado Impulso en Concepción del Uruguay, fue saqueado por más de mil personas que reclamaban la entrega de comida. La larga espera y la falta de respuesta desencadenaron el saqueo total del local.

Los trabajadores del Sanatorio Privado de Santiago del Estero se manifestaron frente a las puertas del establecimiento en reclamo por el retraso de ocho meses en el cobro de sus haberes. A este grupo se sumaron enfermeras y empleadas de lavandería que había renunciado hacía seis meses por falta de cobro de sus salarios durante tres meses. El resto del personal en actividad no se sumó a la pequeña movilización, pero suspendió momentáneamente sus actividades en solidaridad con el reclamo. Muy complicada era también la situación de los trabajadores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), quienes marcharon hacia la Casa de Gobierno y entregaron un petitorio firmado por miles de afiliados a la misma solicitando la urgente normalización de los aportes adeudados por el gobierno para dar continuidad a los servicios de salud suspendidos por la grave situación económica.

La protesta del campo hizo su aparición cuando medio millar de chacareiros, con sus tractores y máquinas agrícolas, se manifestaron frente a la Casa

de Gobierno de la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, reclamando el pago del Fondo Solidario Frutícola y la sanción de la Ley de Quiebras que favorecía a los productores primarios. El presidente de la Federación de Productores, Salvador Durán, entregó un petitorio a las autoridades provinciales, mientras una comitiva de los productores viajó a Buenos Aires para negociar con el gobernador rionegrino, Pablo Verani, un acuerdo entre las partes.

Por la falta de respuesta a sus reclamos, y después de varios días de la toma pacífica de la planta de Manufactura Textil, los empleados de la localidad de San Justo, Santa Fe, decidieron cortar la Ruta Nacional N° 11. El motivo de la protesta era el recorte de salarios y el despido de personal. En la misma provincia, pero en Laguna Paiva, la comunidad educativa convocó a una multitudinaria concentración contra el ajuste educativo y en defensa de la escuela pública. Se congregaron más de mil personas entre docentes, autoridades municipales y representantes de instituciones de la localidad y comunidades vecinas. Según la opinión de los convocantes ese día fue un hecho histórico en Laguna Paiva por la cantidad de adhesiones que tuvo y se recordará como el “Día de la Defensa de la Escuela Pública”.

La Cólera

Miércoles 19 de diciembre

La protesta de este día se hizo extensiva a una multiplicidad de actores y diversos reclamos. La crisis económica había colocado al país en un estado que se consideraba al borde del estadillo y el desgarró social, profundizándose la crisis momento a momento.

La comunidad educativa de Santiago del Estero se movilizaba a través de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE) que había iniciado un paro de 48 horas, con motivo del recorte presupuestario de la Universidad, contra el arancelamiento de las carreras de grado, el recorte del trece por ciento de los salarios de los trabajadores y cualquier intento de posponer o suprimir el pago del aguinaldo. Esta medida, convocada en el ámbito nacional por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), era una secuela del paro realizado por los mismos motivos el día 12 de diciembre que tuvo un alto grado de acatamiento. Por su parte, los empleados no docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Córdoba tomaron las instalaciones de la regional, en reclamo de los salarios adeudados del mes de noviembre. La medida contó con el apoyo del resto de los claustros y de las autoridades. Una protesta del mismo tenor se realizaba en la Facultad Regional Santa Fe

de la UTN, donde el personal ya venía efectuando un paro sin asistencia a los lugares de trabajo desde el día 10 de diciembre.

El SUOEM de Santiago del Estero continuaba con las medidas de protesta iniciadas el día anterior, para reclamar por el retraso en el pago de los sueldos. En Chaco los trabajadores municipales de Barranqueras iniciaron un paro por las mismas razones.

En tanto, los empleados municipales de Río Tercero, Córdoba, realizaban un paro activo con abandono de tareas por 48 horas. La protesta comenzó minutos después de que los concejales aprobaran el ajuste que aplicara la Municipalidad. Se vivieron momentos de tensión ya que los empleados ocuparon el Concejo Deliberante durante todo el día. Presentaron por la mañana ante la Justicia una medida de “no innovar” para que se evitara el recorte en sus haberes. *“Ningún Concejal oficialista explicó por qué hacen este ajuste, es vergonzoso. Los trabajadores no tienen la culpa de lo que está pasando. Y se decidió con soberbia, sin buscar ni una consulta ni el diálogo”*, reprochó el titular del sindicato de empleados municipales. Los hechos que se iniciaron a las 9 de la mañana en el Palacio 6 de Julio, alcanzaron su momento más dramático alrededor de las 12:30 horas frente al edificio del Sindicato Luz y Fuerza, cuando dirigentes y activistas de distintos gremios fueron reprimidos por la Policía. Los gases y las balas de goma lanzadas al interior del local produjeron graves cuadros de asfixias entre mujeres y niños, así como otras heridas. Los manifestantes debieron romper la puerta de ingreso e implementar dispositivos de emergencia para auxiliar a los niños. Una vez apaciguada la situación, los gremialistas marcharon para pedir la libertad de los detenidos en los incidentes ocurridos en el Palacio por la mañana.

Los saqueos y la represión policial se replicaban a lo largo del país. El Gobierno Nacional ante la gravedad de la situación social resolvió distribuir ayuda alimentaria entre los sectores más empobrecidos. También decidió pagar con LECOP las raciones de comida que comprara en una suerte de “plan de emergencia alimentario” que tendría la participación del Ejército y de comités de crisis zonales.

En la ciudad de San Miguel de Tucumán mujeres, hombres y niños se dirigieron a los supermercados más importantes de la ciudad a pedir comida. La presión de la multitud y el miedo a nuevos saqueos obligó a los comercios y al gobierno a negociar con los manifestantes para evitar que hubiera destrozos. En algunos supermercados se entregaron bolsones de comida. Hubo quema de cubiertas, gases lacrimógenos, balas de goma e intentos de ingresar por la fuerza. En uno de los supermercados la Policía reprimió a un grupo de mujeres que reclamaban bolsones de comida que el gobierno había prometido. Un grupo de cuarenta desocupados del interior de la provincia, que por la mañana había reclamado bolsones con alimentos frente a la Casa de Gobierno, al no obtener respuesta fue hasta un supermercado que cerró sus

persianas y solicitó custodia policial. Por la tarde miles de tucumanos se sumaron a la ola de violencia. Entre las 18 y las 20 horas fueron saqueados una decena de comercios de la capital provincial, Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Famaillá y Alderetes. En algunos casos, según describe el diario provincial, fueron familias con varios hijos, y, en otros, jóvenes encapuchados y armados con palos, piedras y armas blancas. En Banda del Río Salí atacaron seis comercios y en cuatro de ellos se logró sacar mercaderías. En esa ciudad y en Tafí Viejo hubo enfrentamientos con la Policía. En la capital de la provincia se produjeron variados incidentes; se arrojaron gases lacrimógenos, balas de goma y hubo numerosos detenidos y heridos. Los choques más violentos se desencadenaron al anochecer frente a los supermercados. Cuatrocientos gendarmes sitiaron el microcentro y llevaron a cabo varias detenciones. El gobernador Miranda anunció que no toleraría más saqueos en los comercios y advirtió a los manifestantes que serían reprimidos por las fuerzas de seguridad. En un mensaje que procuraba garantizar la propiedad y la seguridad de los ciudadanos, agregaba que se asistiría con bolsones de alimentos a cien mil familias. *“Creo que el modelo económico del país está agotado, porque excluye a un mayor número de argentinos. Es hora de buscar respuesta a las necesidades de todos”*, concluyó. Se registraron seiscientas personas detenidas entre Alderetes, Banda del Río Salí y la Capital y setenta hospitalizados. Tres menores de entre 10 y 12 años resultaron heridos en las zonas aledañas a un hipermercado y en otros locales. Una niña de 10 años, recibió un balazo en la pierna derecha cuando la Policía comenzó a reprimir a los que saqueaban el supermercado.

En diversas ciudades de Santiago del Estero –La Banda, Frías, Termas de Río Hondo–; en Entre Ríos –Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Villaguay y Paraná–; en algunas ciudades de Neuquén, y Córdoba, grupos de desocupados y vecinos saquearon supermercados, hipermercados, y pequeños comercios. La acción represiva de la Policía que custodiaba los comercios, dio como resultado varios heridos de balas de goma y numerosos detenidos. En algunos lugares, las fuerzas policiales impidieron la consumación de los saqueos y en otros, como Cipolletti, Río Negro, como consecuencia de los enfrentamientos, Elvira Avaca, una mujer de 46 años, murió de un balazo.

Los intentos de saqueos neuquinos se multiplicaron por la noche y afectaron a tres supermercados, uno de los cuales sufrió una tentativa de incendio. Los tres locales fueron vaciados y en sus alrededores, los saqueadores se enfrentaron con la Policía. En la provincia de Corrientes centenares de vecinos de una villa de emergencia mantuvieron durante la noche un duro enfrentamiento que incluyó intercambio de disparos de armas de fuego con la Policía que intentaba dispersar el saqueo de un supermercado de la zona. Habitantes de regiones aledañas aseguraron que hubo heridos de bala.

En la provincia de Córdoba casi treinta de los quinientos supermercados de la ciudad capital sufrieron intentos de saqueos, en siete casos la gente logró ingresar a los locales y llevarse mercadería. Los vecinos salían con los carritos repletos, bolsas y brazos cargados de azúcar, yerba, latas de conserva y otros alimentos. En todos los lugares de conflicto hubo enfrentamientos con la Policía, contabilizándose diez heridos, aunque ninguno de gravedad, y más de cincuenta detenidos. Sin embargo en Guñazú, Brian Barrera, un niño de 9 años, recibió un disparo en el pecho. Comentaba el diario local que *“a las cuatro y media en el súper, fue un rumor, una frase, una consigna que comenzó a extenderse durante la siesta por los barrios más pobres de la ciudad, donde el hambre y la necesidad se confundieron con las ideas y la violencia... Parece la presentación de un baile de la Mona¹², pero no es. Esta vez el escenario son los alrededores de súper e hipermercados. En vez de músicos hay policías. En lugar de público turbas que exigen. Nadie paga entrada pero todos quieren llevarse algo”*.



El norte de la capital santafecina, junto con la ciudad de Rosario, fueron el epicentro de la tensión social de la provincia. Hubo saqueos y enfrentamientos con las fuerzas policiales que, como “métodos disuasivos” para desconcentrar

¹² El diario se refiere a la Mona Jiménez, famoso músico y cantante de “cuarteto” oriundo de la provincia.

a las personas, disparaban con armas de fuego y balas de goma. La gente respondió con pedradas. Los grupos de vecinos reclamaban alimentos en supermercados o directamente los tomaban por la fuerza, hubo destrozos en el frente de los locales y otros daños edilicios. Según lo expresaba el diario local *“no participaron de las manifestaciones los grupos que habitualmente reclaman por cambios sociales y políticos en la ciudad. Las agrupaciones de piqueteros y desocupados que han protagonizado los reclamos anteriores a la jornada no fueron vistos en los supermercados”*. En la ciudad de Rosario, se registraron cinco muertos, cuarenta y seis heridos y ciento sesenta y cinco detenidos, también como consecuencia de los saqueos. En un barrio de los suburbios fue asesinado el militante social Claudio “Pocho” Lepratti de 35 años que frente a la represión policial salió del comedor infantil donde trabajaba gritando *“¡Bajen las armas que acá sólo hay pibes comiendo!”*, haciendo caso omiso a su reclamo la Policía le disparó un balazo en la garganta¹³.

En Buenos Aires, vecinos de Vicente López, San Martín, Tigre, José León Suárez, Moreno, Tres de Febrero y Lanús arrasaron con las mercaderías de varios supermercados y pequeños comercios. Hubo saqueos también en La Plata, La Matanza, Tapiales, Lomas de Zamora, Boulogne, San Fernando y casi todos los distritos del conurbano bonaerense. En Villa Fiorito murió una persona apuñalada por el dueño de un supermercado que se resistió al saqueo y atacó a los manifestantes. En la localidad de Libertad murió un joven de 20 años al recibir un balazo. La línea de saqueos también se diversificó dentro de diferentes barrios de la Capital Federal.

Mientras se mantenían los cortes de ruta en Chajarí, Concordia, Federal, Gualaguaychú, provincia de Entre Ríos, en las afueras de Resistencia, Chaco, se iniciaba uno en la Ruta N° 11. Participaban los desocupados alineados en la “Agrupación General San Martín” de Resistencia y Barranqueras, los desocupados del “Grupo Almafuerde”, vecinos del Barrio “25 de julio” y un grupo de docentes. Denunciaban el estado crítico en el que se encontraban los hospitales y las escuelas; solicitaban también una urgente asistencia alimentaria *“para pasar las fiestas”*.

Los desocupados jujeños cortaron la Ruta N° 34 pidiendo alimentos y el pago de varios meses adeudados de los planes sociales. Los desocupados neuquinos del MTD de Barrios enrolados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se manifestaron frente al Ministerio de Desarrollo Social. Como se hallaba cerrado “por cierre de ejercicio” marcharon hacia la casa del Ministro Jorge Lara para realizar un escrache por no atender los reclamos de subsidios de ciento cincuenta pesos, de “bonos navideños” de cincuenta pesos

¹³ Claudio “Pocho” Lepratti es recordado en las calles de Rosario con stencils de una bicicleta alada ya que era el medio con el que se desplazaba por los barrios donde realizaba su trabajo social. El cantante León Gieco compuso una canción en su homenaje intitulada “El ángel de la bicicleta”.

y bolsones de mercadería. Decenas de policías custodiaron la vivienda del funcionario y no se registraron incidentes. Por su parte la Coordinadora de Desocupados de Cipolletti se manifestó frente a la Municipalidad en reclamo de planes de trabajo y alimentos donde tampoco se registraron incidentes.

El Grupo Productivo de Córdoba convocaba para ese día, por la tarde, a una misa en la catedral “por la defensa del trabajo y la producción nacional”. La Unión Industrial y la Cámara de Metalúrgicos invitaron a empresarios a participar del oficio. Mientras tanto sectores de pequeños comerciantes y productores rurales de la ciudad de Río Cuarto, en la misma provincia, organizaron una caravana de protesta para reclamar por el estancamiento de la economía y la falta de medidas para reactivarla. “El país agoniza” sentenciaban las banderas argentinas cruzadas por listones negros y pegadas a más de doscientos cincuenta vehículos en la caravana. Innumerables leyendas en carteles se manifestaban contra la clase dirigente. Más de quinientas personas participaron en la manifestación realizada sin incidentes en la plaza central. Eran, según los diarios, vecinos de clase media, pequeños productores agropecuarios y comerciantes. Un viejo tractor tiraba de un carro que llevaba un esqueleto pintado en una suerte de féretro e innumerables leyendas contra la clase dirigente. Entonaron también el Himno Nacional. En otro acoplado junto a un tarro en el que se hacían detonar bombas de estruendo, un cartel decía : *“Basta ladrones, el pueblo se muere y no se les mueve ni un pelo. Políticos corruptos. . .”*. Las columnas se unieron en la Catedral y allí el Obispo Staffolani advirtió *“La violencia física no hace nunca a la justicia de Dios”*. Tras manifestar su apoyo a los reclamos y rezar un Padre Nuestro, cerró su intervención con un *“Viva la Patria”*. En la misma ciudad, horas antes, trabajadores del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) y jubilados realizaron una marcha por las calles de la ciudad aferrados a una gran bandera negra.

También los comerciantes de Río Negro, agrupados en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura en las localidades de Catriel y Villa Regina cerraron las puertas de sus comercios entre las 10:00 y 12:00 horas en señal de protesta por las medidas económicas.

Los trabajadores del hospital provincial de San Martín de los Andes en Neuquén y de Bariloche en Río Negro, continuaron con las medidas de fuerza, en reclamo de mayor presupuesto para el funcionamiento del hospital. Las medidas afectaban la atención sanitaria de las ciudades, a excepción de las guardias y emergencias.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Jujuy demandaba ante los supermercados la entrega de bolsones de comida, y expresaba el rechazo de los saqueos denunciando a la clase política como la responsable del *“saqueo que hundió al país”*. Por la noche, una vez que se conoció la declaración

del estado de sitio¹⁴ por parte del Gobierno Nacional, se convocó a un encuentro multisectorial. Entre los participantes estaban el Frente de Gremios Estatales, el FRENAPPO, organismos de Derechos Humanos, Centros de Estudiantes Universitarios, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, pequeños y medianos empresarios. Se elaboró un documento para responder al estado de sitio señalando la preocupación por la conmoción social y la falta de respuestas oficiales. La multisectorial también convocó a una movilización de repudio para el día siguiente.

Los vecinos de Fontana, en Chaco, rodearon la Municipalidad restringiendo los accesos con gomas incendiadas, reclamando el pago del Plan Solidaridad (subsidio nacional que nuclea a mil quinientas familias) que se adeudaba desde agosto y solicitando la entrega de cajas de comida.

En la ciudad de Salta trabajadores municipales dispersaron y quemaron miles de bolsas de basura que no se habían levantado por el paro de días anteriores. Simultáneamente el secretario general del Sindicato de Camioneros anunciaba que *“Empezamos el paro porque había un compromiso de pagar hasta el 14 y no se cumplió, levantamos la medida porque el intendente se comprometió a pagar y si no cumple volvemos al paro y hacemos movilización”*.

A última hora de esa jornada, el Gobierno Nacional como consecuencia de los saqueos registrados en casi todo el territorio nacional, dispuso el estado de sitio por 30 días en todo el territorio nacional. Miles de personas salieron a las calles en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia bonaerense y ciudades del interior para sumarse al “cacerolazo” espontáneo en repudio a esta medida. En su discurso el presidente De la Rúa, instaba a la oposición a conformar una mesa de concertaciones: *“Más allá de las personas hay que asegurar paz social y estoy dispuesto a hacerlo preservando a las personas y los bienes; por eso he dictado el estado de sitio. Una pronta respuesta del justicialismo, sin embargo, es necesaria. No puede seguir el cuadro de violencia en la calle que arriesga a situaciones más peligrosas. . . Vamos por una política productiva, por un cambio de acuerdo con lo que necesita la gente. Estoy dispuesto a aguardar la respuesta patriótica y de grandeza del justicialismo porque es mi deber y, desde luego, no me aferraré a situaciones personales porque yo mismo, como lo hice toda mi vida, estoy dispuesto a las máximas actitudes de grandeza que sean necesarias para el bien de la Patria y la paz de los argentinos. . . Convoco por eso desde mi legitimidad, en el claro sentido de la institucionalidad, a los líderes de la oposición, del Partido Justicialista para juntos fortalecer la gobernabilidad y participar de la conducción en este tiempo difícil para la República”*.

14 Decreto 1678/2001 del Poder Ejecutivo Nacional.

Inmediatamente después de terminado el discurso, la desazón popular se tradujo en una protesta espontánea: miles de personas salieron a la calle con cacerolas, sartenes, espumaderas y tapas. Transitaban por las calles de los distintos barrios porteños, en la Casa de Gobierno, el Congreso Nacional, la Quinta de Olivos y otras localidades del conurbano bonaerense. El clima era festivo. En Rosario, mil personas marcharon cerca de la medianoche al Monumento a la Bandera. El estado de sitio, y el discurso que lo había anunciado, se ahogaban en los cánticos de los manifestantes: “*Qué boludos, qué boludos, el estado de sitio, se lo meten en el culo*”.

Jueves 20 de diciembre

Durante esa madrugada, en la ciudad de Buenos Aires, las personas continuaron recorriendo con sus cacerolas la Avenida 9 de Julio para acercarse a Plaza de Mayo. Otras se apostaban frente al Congreso, o la Quinta de Olivos, los domicilios particulares del ministro de Economía Domingo Cavallo, y de otros funcionarios, como el jefe de Gabinete Nacional, Christian Colombo; del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra; de la ex funcionaria del gobierno de Menem, María Julia Alsogaray, y del ex vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez. Los vecinos de los distintos barrios porteños expresaban su repudio al estado de sitio, pero también se manifestaban contra la gestión de todos los funcionarios y la clase política en general, al grito espontáneo de “*Que se vayan todos, que no quede ni uno solo*”. Pasadas las dos de la madrugada, el ministro de Economía, Domingo Cavallo renunció a su cargo mientras que el conjunto del gabinete nacional puso su renuncia a consideración del presidente De la Rúa.

A partir de ese momento, alrededor de las 2:30 horas, varias decenas de personas comenzaron a congregarse espontáneamente frente a la Catedral de Paraná, Entre Ríos, la Casa de Gobierno y el domicilio del gobernador Montiel festejando la renuncia de Cavallo. Haciendo sonar bocinas, cornetas y golpeando las cacerolas los manifestantes, que no se identificaban con ningún partido político, entonaron cánticos en contra del Gobierno Nacional y luego el Himno Nacional. Al mismo tiempo cientos de tucumanos, “*siguiendo el ejemplo de lo que ocurría en la Capital Federal*” según comentaba el diario provincial, se concentraron en la Plaza Independencia con cacerolas y ollas. Familias enteras se concentraron en las cuatro esquinas de la Plaza Independencia, porque la Policía Provincial impedía el acceso a la plaza y a la Casa de Gobierno. Con un ruidoso cacerolazo pedían un cambio político y social y se burlaban del estado de sitio. Los manifestantes entonaron en reiteradas oportunidades el Himno Nacional.

Por otra parte los cortes de ruta que se habían iniciado días antes, en Chajarí y Concordia, Entre Ríos, comenzaron a flexibilizarse y abandonaron la protesta en Gualaguaychú y Federal. Nuevos cortes se produjeron en otras localidades de la provincia, llevada a cabo por desocupados, gremialistas, empleados y algunos productores. Asimismo se registraron cortes en las Rutas N° 34, N° 1 y N° 56 de Jujuy protagonizados por organizaciones de desocupados, y por empleados municipales y “asentados ilegales”. En algunos de los cortes, comenzaron a organizar asambleas para determinar el modo en que se daría continuidad a la protesta ante la imposición del estado de sitio.

Por la mañana, el Foro de Instituciones Intermedias de Santiago del Estero se reunió para buscar “soluciones a la crisis”, indicando que la *“recuperación de la Nación debe fundarse en el Nunca Más a la corrupción y la entrega”*. Por otro lado, las Multisectoriales de Santiago del Estero (la CCC, el Movimiento de Desocupados “General San Martín”; Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), Asociación de Trabajadores de la Educación (ATECH), el Partido Comunista, concejales capitalinos) y la de Jujuy (Frente de Gremios Estatales, CTA, FRENAPO, CCC, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU), organismos de Derechos Humanos y estudiantes) efectuaron movilizaciones para expresar su crítica a los gobiernos nacionales y provinciales que *“...ante la lamentable situación socioeconómica que sufre el pueblo y sólo beneficiaba a un sector pequeño dando como única respuesta el estado de sitio”*.

La Multisectorial de Entre Ríos se concentró por la mañana en la Plaza 1° de Mayo y solicitó la renuncia del gobernador, se cantó el Himno Nacional y se cortaron por unas horas las calles. Recibieron la adhesión de la gente que los alentaba con bocinazos y gritos. Por la tarde, luego de un acto frente a la sede de ATE, la Multisectorial marchó hacia la Casa de Gobierno para manifestar sus críticas. Colocaron una pila de neumáticos sobre la puerta de acceso principal y le prendieron fuego. Los manifestantes se dispersaron cuando la Policía comenzó a tirar gases lacrimógenos intentando apagar el fuego y controlar la situación.

En la capital de Mendoza hubo concentraciones de agrupaciones políticas y sindicales que pedían la renuncia de algunos de los gobernantes. En la ciudad de Córdoba varias personas se concentraron espontáneamente y se movilizaron por las calles de la ciudad para protestar contra el gobierno y su política económica. El shopping Patio Olmos fue escenario principal de la protesta. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, recibieron el apoyo de los vecinos que salían desde las ventanas con sus cacerolas. No se observaron banderas ni pancartas de partidos políticos. Según el diario *“Al parecer, las imágenes que difundían los canales porteños, motivaron a los cordobeses que*

siguieron el mismo camino". En determinado momento, la Policía disperso a los manifestantes arrojando gases, pero la gente retornó al lugar para seguir cantando consignas contra el gobierno. Los gremios estatales en la misma provincia, también realizaron distintas actividades de protesta en contra del estado de sitio, y en rechazo a la política de ajuste que llevaban adelante las administraciones provincial y municipal. El gremio docente dispuso un paro por 24 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo, con concentración en la sede de la ciudad y posterior movilización; el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), por su parte, realizó protestas en los distintos ámbitos de la administración pública, con asambleas, cortes de calle y movilización; Luz y Fuerza acompañó la protesta de sus pares estatales. También se movilizaron los trabajadores Viales, Judiciales, Legislativos, la CTA y la Confederación General de los Trabajadores (CGT)-Rodríguez Peña.

En Neuquén más de dos mil personas se manifestaron pacíficamente por el centro de la ciudad para exigir un cambio en la política económica nacional y provincial y para pronunciarse contra el estado de sitio. Participaron de la manifestación organismos de Derechos Humanos, ATE y el Sindicato de Ceramistas que apoyaba la ocupación por parte de los trabajadores de la fábrica Zanón.

Luego de la marcha de la Multisectorial que se realizó en Roca, Río Negro, comenzaron a generarse enfrentamientos entre vecinos y policías cuando grupos de manifestantes intentaron saquear distintos supermercados. La Municipalidad no informó en forma efectiva los lugares de reparto de alimentos y esto fue una de las causas de los desmanes que comenzaron al mediodía y se extendieron hasta pasadas las 23:00 horas en distintos puntos de la ciudad. La Policía desató una feroz represión con gases lacrimógenos, balas de goma y balas de plomo. Se registraron cuarenta y un heridos y casi cien detenidos.

Los saqueos, intentos de saqueos y enfrentamientos seguían multiplicándose en distintas ciudades de Chaco, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe, Tucumán, Neuquén, Córdoba y Mendoza. Mientras en algunos casos la Policía reprimió, en otros se intentaban acuerdos con los dueños de los supermercados para la entrega de bolsones con alimentos, al tiempo que las autoridades prometían la entrega de más bolsones para descomprimir la tensión social.

La violencia se apoderó de Tucumán cuando los comerciantes de Mercosur, armados con revólveres dispararon contra unos ciento cincuenta vecinos del Barrio Topa que se disponían a entrar al mercado. Por otro lado, un grupo de personas que no logró obtener comida en el Hipermercado Libertad, saqueó una estación de servicio y luego el galpón de una distribuidora de gaseosas de Villa Urquiza. El diario provincial caracterizó al 20 de diciembre como "*Un día de furia*".

También en Neuquén se registraron disturbios y saqueos que provocaron decenas de heridos y más de setenta detenidos. Los enfrentamientos que comenzaron por la tarde se extendieron hasta la madrugada del día siguiente.

Las protestas provinciales que se venían realizando en las jornadas anteriores, en su mayoría por falta o retraso en el pago de los sueldos, continuaron sus acciones expectantes del clima que se vivía en la Ciudad de Buenos Aires y del débil proceder de los funcionarios nacionales. Los dirigentes del gremio de empleados municipales de Santiago del Estero tuvieron reuniones con autoridades provinciales pero no realizaron manifestaciones debido al estado de sitio. En la ciudad de Loreto, de la misma provincia, los empleados municipales que venían manifestándose en reclamo del pago de sus haberes atrasados, organizaron una misa frente a la Municipalidad, y los trabajadores municipales de Río Hondo fueron desalojados de la plaza principal del pueblo por la Policía a causa del estado de sitio. Los empleados de la Dirección de Minoridad y Familia y trabajadores de la construcción en la provincia de Mendoza, protestaron en un corte de ruta. En Centenario, Neuquén, más de trescientos desocupados marcharon a la Municipalidad en reclamo del pago de sus planes sociales.

Los recolectores de la ciudad de Salta no sólo no juntaron la basura ese día, si no que la dispersaron en señal de protesta. La medida se debía al retraso en el pago de los sueldos del mes de noviembre. Luego de un compromiso por parte del intendente decidieron levantar el paro. La Unión de Trabajadores Municipales (UTM) y la ATE también marcharon hacia la intendencia por el mismo motivo.

Los comerciantes de Río Negro realizaron una protesta contra las políticas económicas y porque no podían utilizar los LECOP para cancelar sus compromisos bancarios. En la Cámara de Comercio de Río Colorado, de la misma provincia, se juntaron más de cuatrocientas personas para protestar contra las políticas económicas y contra las inspecciones de la AFIP. En Catriel, más de trescientas personas entre comerciantes, amas de casa y trabajadores estatales se movilizaron por el centro de la localidad. Convocada por la Cámara de Comercio local, la manifestación confluyó frente a la Legislatura Municipal, donde los manifestantes entregaron un petitorio e insultaron a los concejales y los partidos políticos. Los empleados municipales de Bariloche, se manifestaron en forma pacífica por el centro de la ciudad, repudiando las medidas económicas, el estado de sitio y al intendente local.

En la provincia de Jujuy los desocupados mantuvieron los dos cortes sobre la Ruta Nacional N° 34, próximos a San Pedro de Jujuy, mientras que el Gobierno Provincial pretendía que desistieran de esta medida mediante la entrega de bolsones de alimentos.

En la localidad de San Justo, Chaco, los empleados de Manufactura Textil levantaron luego de once días la toma de la planta al recibir el pago de la

deuda salarial por la que reclamaban. Los empleados habían improvisado una carpa y organizado una olla popular en el marco de una toma pacífica.



En Buenos Aires, a media mañana, agentes de la Policía Montada se enfrentaron a un grupo de Madres de Plaza de Mayo en una imagen que recordó a la última dictadura militar. A los manifestantes espontáneos fueron sumándose militantes políticos y sociales que se enfrentaron con la represión policial, desatándose así una batalla campal en las calles aledañas a la plaza. De la Rúa y sus ministros sabían de estos enfrentamientos y no tomaron decisiones que pusieran fin a la represión. A las cuatro de la tarde, el Presidente pronunció un discurso por televisión en el que volvió a convocar a la “unidad nacional” y le ofreció a la oposición un esquema de coalición política que hiciera frente a la crisis. La respuesta del Partido Justicialista (PJ) le

llegó casi de inmediato. Puerta lo llamó por teléfono al jefe de Gabinete, Christian Colombo, y le dijo lo que todo el Gobierno ya esperaba. —*No, Christian. . . Me parece que ya es tarde para probar con algo así*; fue la frase de Puerta para dar por terminado el juego. Al mediodía, los senadores y diputados del PJ le habían pedido al Presidente “un gesto de grandeza”. Y finalmente para reforzar la decisión, el peronista Humberto Roggero salió por televisión a negar cualquier posibilidad de acuerdo con De la Rúa.

El presidente comenzó entonces a escribir de puño y letra su renuncia. Minutos antes de las siete de la tarde, los enfrentamientos crecían en las calles argentinas y las centrales sindicales daban comienzo a un paro “por tiempo indeterminado” que agigantaba la incapacidad del Gobierno para resolver la crisis. El presidente juntó a sus ministros y les dijo “*Hice todos los esfuerzos; convoqué a la unidad nacional y no fui escuchado*”.

Finalmente a las 19.45 horas, cuando la represión policial y las manifestaciones callejeras alcanzaban su punto más álgido en la Plaza de Mayo y las calles aledañas, el texto con la renuncia del presidente fue distribuido entre los periodistas de la Casa Rosada. Siete minutos más tarde el presidente, que ya había dejado de serlo, subió a un helicóptero y dejó definitivamente el poder. La feroz represión policial en el centro porteño dejó un saldo de cinco muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos.

Afirmaban algunos diarios que la salida anticipada del presidente aliviaba a una sociedad angustiada por “*el estallido social que produjo 25 muertos y más de 400 heridos, víctimas de la crisis económica que ha puesto a la Argentina al borde de la cesación de pagos y en el centro de la atención mundial*”.

Al mismo tiempo en Chaco, un vecino chaqueño, que participaba en una concentración iniciada el día anterior, cuando se enteró de la renuncia del presidente dijo: “*Esa es nuestra victoria. Pero esto recién empieza, ahora falta que se vaya la intendente por incapaz*”, mientras todos los vecinos aplaudían la salida aérea de De la Rúa.

Una treintena de estudiantes de las Facultades de Humanidades y Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), militantes de Izquierda Unida (alianza electoral entre el PC y MST) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) se concentraron en las puertas de la UNSE para reclamar la derogación del estado de sitio y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente luego de la renuncia del presidente De la Rúa. La concentración fue controlada por un fuerte operativo policial que tenía orden de impedir cualquier tipo de corte de calle. También los estudiantes universitarios de la Facultad de Humanidades de Jujuy decidieron tomar la institución, manifestando que el estado de sitio demostraba que el modelo neoliberal se iba desbarrancando hacia una crisis terminal. Organizaciones de Derechos Humanos y la agrupación Franja Morada de la Universidad

Nacional de Salta marcharon en la ciudad, sin embargo la movilización fue disipada por la vigencia del estado de sitio. Hubo dos detenidos.

Trece días, cinco presidentes

Viernes 21 de diciembre

A las once de la mañana se reunió la Asamblea Legislativa para aceptar la renuncia del Presidente. El presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, se hizo cargo formalmente del poder para luego dar paso al reemplazante de De la Rúa. El Congreso tenía 48 horas para decidir quién sería el próximo presidente de la Argentina. Tanto Puerta como el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, se perfilaban como posibles candidatos para reemplazar a De la Rúa. Por su parte algunos de los gobernadores peronistas, entre ellos Carlos Ruckauf de Buenos Aires, el cordobés José Manuel de la Sota y el santafesino Carlos Reutemann, preferían que el PJ y la Unión Cívica Radical (UCR) armaran un gobierno de coalición por un lapso breve para llamar luego a elecciones presidenciales anticipadas, aunque todos tenían intenciones de ser candidatos a presidente.

El nuevo gobierno debía enfrentar un gravísimo cuadro económico y social. Se especulaba que la primera medida a tomar, sería una devaluación que probablemente deterioraría aún más la situación económica y social de la población.

En algunas provincias se hicieron eco de los acontecimientos que ocurrían en Buenos Aires, entre ellas el gremio Luz y Fuerza, de Córdoba, que anunció su adhesión al paro por tiempo indeterminado que iban a realizar las dos CGT (oficial y disiente) en repudio a la brutal represión ejercida por la Policía en Plaza de Mayo, para lo que convocaron a una concentración en la sede sindical.

En la ciudad de Mendoza se festejó la renuncia de De la Rúa y se repudió la represión en Buenos Aires: *“El gobierno fue el que saqueó primero cuando empezaron con robarnos el sueldo y la plata que tenemos en el banco”*, afirmaba un manifestante. En Luján de Cuyo, los vecinos comenzaron a pedir a los concejales que recortaran el gasto del municipio.

Los saqueos y las manifestaciones de los trabajadores estatales en reclamo por falta de pago, seguían apareciendo en el espacio público continuamente. Los empleados municipales de Loreto en Santiago del Estero y Tres Isletas en Chaco, continuaban reclamando el pago atrasado de los sueldos y se negaban a que fuera cancelado en bonos. Un reclamo similar sostenían los trabajadores del Hospital Ramón Carrillo de la capital santiagueña, quienes realizaron un corte de calle. En Entre Ríos los gremios estatales, la Federación Agraria

Argentina (FAA), transportistas y autoconvocados, presentaron una carta al gobernador Montiel exigiendo el pago de haberes adeudados y una rebaja en el precio del gasoil.

En una radio de Concordia, Entre Ríos, se anunció que se entregarían bolsones de comida en el hipermercado Wall Mart. Frente a este hecho grupos de vecinos, en su mayoría mujeres y niños, comenzaron a congregarse en el lugar esperando que se haga efectiva la entrega. Los responsables del establecimiento desmintieron la noticia e informaron que las puertas permanecerían cerradas hasta que la gente se desconcentrara. Frente a la fuerte presencia policial, los vecinos permanecieron durante toda la tarde y noche exigiendo alimentos no sólo al hipermercado sino también a las autoridades provinciales. Grupos de vecinos se concentraron en otros supermercados de la ciudad exigiendo la entrega de alimentos. No hubo enfrentamientos entre la Policía y los vecinos, pero tampoco se consumaron los saqueos. Por la noche, en el barrio Maccarone de la misma ciudad, los vecinos atacaron la Comisaría N° 8, exigiendo que sea detenido el efectivo que había baleado y matado a una menor el día anterior, cuando ésta regresaba a su domicilio luego de intentar sacar comida de un supermercado. En esa manifestación hubo corridas a causa de la represión policial, y bombas molotov y barricadas de los manifestantes.

En diversos puntos de la ciudad de Neuquén, los vecinos salían a las calles “a defenderse” frente a versiones de que se producirían nuevos saqueos y que esta vez incluirían las casas particulares. Se corría el rumor de que unos barrios serían atacados por otros.¹⁵ En el marco de estos rumores, fue asesinado a manos de un agresor desconocido, Juan Rufino López, cuando en la madrugada del 22 de diciembre regresaba a su casa acompañado de su esposa y su hija mayor. En la misma ciudad se realizaron dos marchas por la “paz social”. La primera, por la mañana, fue protagonizada por trescientos desocupados y vecinos. A las 21:00 horas se realizó otra marcha donde seiscientos comerciantes y vecinos se diferenciaron explícitamente de la marcha de los desocupados pues los culpaban de haber sido instigadores de los saqueos.

Tanto en esa provincia como en Río Negro hubo manifestaciones de vecinos que demandaban a las autoridades locales que se repartieran alimentos entre los más necesitados, contra el estado de sitio, contra las medidas económicas nacionales, por reducciones de los gastos públicos y que los concejales acompañaran esos reclamos junto con los vecinos.

¹⁵ Situaciones similares se vivieron en muchos barrios del conurbano bonaerense. Estos rumores fueron levantados, rpesuntamente, por la policía y por punteros políticos del justicialismo.

Al caer el día, en una cumbre del Partido Justicialista se decidió por unanimidad convocar a elecciones presidenciales para el 3 de marzo, bajo la Ley de Lemas, para completar el período 1999-2003. También se resolvió designar al gobernador Adolfo Rodríguez Saá como nuevo presidente provisorio por sesenta días, en reemplazo de Puerta. La propuesta sería presentada a la Asamblea Legislativa.

Sábado 22 de diciembre

En Jujuy, desocupados de San Pedro solicitaban por nota alimentos a supermercados, haciendo explícito que no recurrirían al saqueo.

Alrededor de cincuenta vecinos de la localidad fronteriza de Salvador Mazza en Salta, se movilizaron hasta la aduana para solicitar en forma pacífica ropa y alimentos. Mujeres, niños y algunos hombres mayores pedían que se les haga entrega de las mercaderías secuestradas durante los operativos al contrabando y la comercialización ilegal. Sin embargo fueron disuadidos por el administrador de la Aduana de Pocitos quien afirmó que dicha mercadería era propiedad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Domingo 23 de diciembre

Mientras asumía como Presidente Rodríguez Saá y presentaba a su gabinete junto a una serie de medidas¹⁶, las organizaciones representativas de los desocupados jujeños, encabezados por la CCC, reclamaban al gobierno más planes de empleo para el próximo año y que éstos provinieran de un único programa nacional y provincial.

Asimismo, los vecinos Autoconvocados de Paraná, a través de presentación de un documento, manifestaron su preocupación por la represión violenta que se vivió en la última semana y que dejó como saldo la muerte de dos jóvenes

¹⁶ Durante el discurso de asunción del cargo, el flamante presidente anunció una serie de medidas a tomar por su gobierno: “El gobierno argentino suspenderá el pago de la deuda externa argentina. Los dineros que estén previstos en el Presupuesto para pagar la deuda externa, mientras los pagos estén suspendidos, serán utilizados “sin excepción” en los planes de creación de fuentes de trabajo y el progreso social. Se analizará el futuro de la Convertibilidad que, por ahora, se mantiene. Implementación de una tercera moneda a fin de inyectar liquidez al consumo popular. Será el “argentino”. No habrá devaluación. Incentivos a la producción y las nuevas inversiones. Sistema tributario al servicio de la producción y la inversión. Ley para indemnizar a todos aquellos que fueron víctimas de la protesta popular. Plan social para crear un millón de empleos en la Argentina. Plan de emergencia alimentaria. Ley para disminuir los salarios de los funcionarios en actividad del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y sus entidades autárquicas y descentralizadas. Nadie ganará más que el Presidente de la Nación, cuya remuneración por todo concepto será fijada en 3 mil pesos”; anunció entre otras medidas.

mujeres de 13 y 15 años. Exigieron que los responsables fueran juzgados y condenados, además de la renuncia del ministro de Justicia y del jefe de Policía por ser responsables directos de las muertes ocurridas en la ciudad.

Lunes 24 de diciembre

Se realizó una manifestación de más de doscientas personas en Río Negro, para exigir el esclarecimiento de la muerte de Elvira Abaca, víctima de un balazo en la represión del 19 de diciembre. Además de vecinos de los barrios populares, la marcha contó con la presencia de organismos de Derechos Humanos de la provincia.

En Neuquén, los trabajadores de la fábrica de cerámicos Zanón realizaron un escrache en el domicilio del propietario de la empresa en reclamo de sueldos atrasados y luego cortaron la Ruta Provincial N° 7. Junto a sus familias, los trabajadores pasaron nochebuena en las instalaciones de la inactiva fábrica.

Jueves 27 de diciembre

El sindicato de trabajadores municipales de Reconquista en Santa Fe tomó la Municipalidad en forma pacífica en reclamo por el pago de los haberes de noviembre y aguinaldo. El gremio pidió la renuncia del intendente Héctor Ocampo. Desde el 10 de diciembre que los empleados venían realizando medidas de fuerza. Un grupo de personas en la misma provincia se autoconvocaron para realizar un escrache frente al domicilio particular del ex gobernador Víctor Reviglio, secretario de Políticas Sanitarias de la Nación en ese momento. Los manifestantes se toparon con un cordón policial y con otro grupo definido como de “militantes peronistas” que defendía a dicho mandatario.

Los desocupados de Fontana, Chaco, instalaron una olla popular frente al municipio que se extendió hasta el 3 de enero reclamando por el pago de los módulos alimenticios y el subsidio de cuarenta pesos que se adeudaba desde octubre.

Viernes 28 de diciembre

En el Día de los Santos Inocentes, una radio de Sáenz Peña, provincia de Chaco, anunció que se estaba entregando mercadería en el predio de Ferichaco, lo que generó que muchos vecinos de los barrios periféricos se acercaran hasta este lugar donde se dieron cuenta de que el mensaje había sido una broma “inocente”. Los vecinos, sin embargo, reaccionaron irrumpiendo en la

emisora y saqueando la despensa del dueño de la misma. La Policía intervino reprimiendo a los vecinos enfurecidos.

Por otra parte, un grupo de piqueteros del Movimiento de Desocupados en Lucha y de Vecinos y Obreros en Lucha de Santa Rosa de Lima, en Santa Fe, entregaron un petitorio en Casa de Gobierno y permanecieron en la Plaza de Mayo. Reclamaron en contra de la rebaja de los planes a cien pesos y pidieron al gobierno que establezca un diálogo con las “víctimas del desempleo”.

Los desocupados de Chaco, en Quitipili y Sáenz Peña, continuaron movilizándose hasta los municipios respectivos reclamando por la entrega de alimentos y la inclusión en Planes de Trabajo. La Multisectorial de Resistencia se volvió a movilizar hasta la Casa de Gobierno ante la desconfianza en la distribución de los planes de trabajo. Solicitaban el pago de aguinaldo, asistencia alimentaria y planes labores. Se prendieron fuego cubiertas en la puerta de la Casa de Gobierno que fueron extinguidas por la Policía.

En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, el Movimiento Paranaense de Autoconvocados (MPA), en su primera aparición pública, con la adhesión de la Multisectorial, se movilizó hasta la Casa de Gobierno reclamando justicia por la muerte de las dos adolescentes. Mientras en la vecina provincia de Santa Fe, los trabajadores del establecimiento industrial Lácteos San Jerónimo tomaron la fábrica pacíficamente en reclamo de los sueldos atrasados.

En tanto, en horas de la tarde un nuevo cacerolazo se producía en la Capital Federal frente al Palacio de Tribunales mientras la Asociación de Abogados Laboristas pedía la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Lentamente, la Plaza de Mayo se fue colmando de gente que, en forma pacífica, se expresaba exigiendo la renuncia de la Corte Suprema y el alejamiento del gobierno de “todos los políticos corruptos”. Cánticos y pancartas expresaban el repudio contra Carlos Menem, Carlos Ruckauf, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín, Carlos Grosso, entre otros. Por la noche, una vez más, miles de vecinos irrumpieron en Plaza de Mayo para protestar contra el corralito y las figuras acusadas de corrupción que integraban el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá. La multitud se manifestó en forma pacífica cantando “*¡Ya pasó la Nochebuena, ya pasó la Navidad, ya lo echamos a De la Rúa, vamos por Rodríguez Saá!*”. Los manifestantes protestaban por el corralito en los bancos, otros por la corrupción, o la Ley de Lemas y la mayoría coincidía en los nombres que se habían mencionado en la Casa de Gobierno en la última semana y que fueron tomados como una provocación: Carlos Menem, José Luis Manzano, Carlos Grosso, Matilde Menéndez. . . “*No se dieron cuenta de lo que pasó acá, pensaron que se trataba de echar a De la Rúa y nada más, estamos podridos de los chorros, sean peronistas o radicales, no queremos más ladrones*”, afirmaban algunos de los manifestantes.

Sábado 29 de diciembre

Alrededor de las 2 de la mañana, un grupo de jóvenes traspasó las vallas que rodeaban la Casa Rosada. Al intentar ingresar, la Policía comenzó a tirar gases lacrimógenos y los manifestantes se resistieron arrojando piedras. Hubo doce policías heridos y treinta y tres manifestantes detenidos.

Los acontecimientos indujeron a la renuncia de Carlos Grosso como funcionario de gobierno. Finalmente los ministros del gabinete nacional presentaron su renuncia y el presidente Rodríguez Saá convocó a los gobernadores del PJ a una reunión en la Residencia Presidencial de Chapadmalal para el día siguiente, con el objetivo de afrontar de manera conjunta la crisis de legitimidad política del flamante gobierno.

Mientras tanto, los comerciantes, productores, pequeños empresarios, jubilados, empleados públicos, docentes, desocupados y vecinos del Gran Mendoza se concentraron en la puerta de la Municipalidad para exigirles a sus representantes: *“Si no les conviene trabajar por ese presupuesto que se vayan. Nosotros nos hacemos cargo del control de la municipalidad”*. Los representantes respondieron de distintas maneras a los pedidos: negociando el monto de la reducción del sueldo en algunos casos, en otros casos adelantándose a las movilizaciones con anuncios de rebajas en las dietas. Las comunidades de muchos municipios del interior de la provincia, Junín, Guaymallén, Monte Comán, Luján, Tunuyán y Alvear, apuntaron sus críticas a las autoridades locales. En repetidas ocasiones grupos de pobladores se acercaron a la sede municipal para exigir a los concejales e intendentes: que rebajaran sus dietas, que redujeran el número de empleados “políticos” y que con el dinero ahorrado, promovieran programas de apoyo económico para los pequeños productores y los comerciantes y auxiliaran a los centros de salud y educación que lo necesitaran. Finalmente solicitaban periódicas rendiciones públicas de los gastos que realizaba el Municipio. Las reuniones en las que se discutían estos temas estaban compuestas por jóvenes y adultos, hombres y mujeres representantes de varios sectores de la comunidad.

La Coordinadora de Desocupados de la provincia de Jujuy (integrada por la CCC, el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive y agrupaciones de las localidades de El Carmen, Ledesma y Palpalá) se movilizó a la Casa de Gobierno para pedir una equitativa distribución de los cuatro mil puestos de trabajo que Nación supuestamente había otorgado a la provincia. Reclamaron también bolsones de alimentos y el pago de meses adeudados de los planes sociales.

Domingo 30 de diciembre

El caos en el país era tal que permitía situaciones paradójales como la vivida en Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos, donde los comerciantes realizaron un escrache público a las personas que fueron vistas dentro de los supermercados sustrayendo mercaderías los días de los saqueos y que no estarían atravesando una situación económica delicada, aprovechándose de la situación generada por quienes realmente sí se encontraban apremiados por el hambre. El escrache consistía en que los comerciantes anunciaban por los parlantes que se encontraba en el local tal o cual persona, y le reclamaban que devuelva lo que había saqueado.

En la Residencia Presidencial de Chapadmalal, con notorias ausencias de algunos gobernadores justicialistas como Marín de La Pampa, De la Sota de Córdoba, Kirchner de Santa Cruz, Manfredotti de Tierra del Fuego y Reuteman de Santa Fe y ante un cacerolazo de vecinos que se manifestaban en la puerta de la residencia al grito de “*ladrones*”, el presidente Adolfo Rodríguez Saá presentó la renuncia indeclinable a la presidencia. Asimismo Ramón Puerta renunciaba a la presidencia de la Cámara de Senadores, debiendo Eduardo Oscar Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, asumir como nuevo presidente provisional de la Nación.

Lunes 31 de diciembre

Mientras continuaba el conflicto entre los dirigentes justicialistas para ocupar el cargo de presidente, los desocupados de la CCC de Chaco se movilizaban frente a la Casa de Gobierno de la provincia para reclamar una definición sobre los veinte mil planes de empleo prometidos por la Nación a la provincia. Interrumpieron el tránsito por varias horas y prendieron fuego cubiertas. En la ciudad de Quitilipi, de la misma provincia, los desocupados realizaron un cacerolazo frente a la casa del intendente reclamando alimentos.

En tanto, en la ciudad de San Martín, provincia de Mendoza, más de trescientas personas reclamaron frente al Banco de la Nación el pago del Plan Solidaridad para ayudar a los indigentes del distrito de Palmira. La queja popular se originó porque se adeudaban los meses de octubre y noviembre, ochenta pesos por persona. Los manifestantes llegaron a la ciudad para pedir explicaciones y al no obtener el dinero cortaron la Ruta Provincial N° 50 y las calles principales de la localidad.



Martes 1 de Enero

Luego de una extensa sesión, la Asamblea Legislativa designó a Eduardo Duhalde, Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires (PJ), presidente provisional de la Nación hasta el 10 de diciembre de 2003. El candidato justicialista obtuvo doscientos sesenta y dos votos a favor, veintiuno en contra y dieciocho abstenciones. En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, Duhalde describió la situación económico-social del país y afirmó que *“se van a respetar los depósitos y serán devueltos en la misma moneda”*.

Miércoles 2 de enero

Al asumir la presidencia provisional de la Nación, Duhalde presentó su nuevo gabinete. En varias provincias esperaban recibir los programas de ayuda prometidos por el renunciante presidente Rodríguez Saá, sin embargo ante el cambio en el Ejecutivo, los gobiernos provinciales y de las comunas del interior debieron esperar las nuevas directivas por lo menos dos días. Esta demora, exacerbó la urgencia de los reclamos por alimentos y asistencia social desatándose nuevas protestas en varias localidades.

La protesta de los trabajadores de la salud se profundizaba en la Patagonia, ya que los empleados del Hospital de Bariloche, en Río Negro, reclamaban a las autoridades provinciales que resolvieran el atraso salarial que se

remontaba al mes de octubre. De no solucionarse ese problema profundizarían las medidas de fuerza que venían realizando desde hace más de setenta días y suspenderían incluso la atención de las guardias hospitalarias. Asimismo, en el Hospital de la ciudad de Choele-Choel se mantenía la retención de tareas en reclamo de sus sueldos atrasados y por un mayor presupuesto para el funcionamiento e insumos del hospital. En la provincia de Santa Fe continuó la protesta que llevaba varios días en adhesión a la permanencia de la doctora Noemí Cuellar en la dirección del Hospital de Tartagal. Los vecinos instalaron un hospital de campaña para garantizar la salud de la población. Por otra parte, en la capital provincial, empleados del Sanatorio Americano continuaron con el reclamo por el pago de haberes atrasados. Se manifestaron con sentadas en la vereda de la entidad y con la retención de tareas.

Ante el retraso en el pago de haberes, los empleados de la empresa contratista Furoeex Express S.A. del Correo Argentino decidieron suspender el reparto de correspondencia en la ciudad de Santa Fe, mientras que los trabajadores municipales de Reconquista en la misma provincia y los municipales de Río Piedras en Salta llevaron a cabo un paro total de actividades.

En la ciudad de Junín, Mendoza, más de doscientas cincuenta personas entre comerciantes, productores, pequeños empresarios, jubilados y empleados públicos, realizaron un cacerolazo para reclamar a los concejales que rebajaran sus dietas y pidieron al intendente, Dante Pellegrini, que redujese los gastos. Esta demanda se había iniciado el 31 de diciembre cuando comenzaron a circular petitorios avalados por cuatrocientas ochenta firmas, en el que se pedía la reducción de los gastos públicos. Los vecinos, quienes se identificaron como víctimas de la crisis que afectaba al país, reclamaron con cacerolas y cánticos que los “representantes del pueblo” cobraran entre trescientos y quinientos pesos¹⁷, y “con los 650.000 pesos que gasta el Concejo Deliberante al año podemos poner en marcha dos mil hectáreas de plantaciones”.

Por otra parte, en la Municipalidad de Guaymallén, alrededor de cien vecinos reclamaron con un cacerolazo por subsidios, planes sociales y alimentos para los desocupados. La protesta fue encabezada por distintos centros de desocupados, que llegaron de diversos barrios del departamento, haciendo ruido con cacerolas, botellas, bombos y tirando pirotecnia. Cerca del mediodía la Policía cortó la calle Libertad, frente al Municipio, para evitar incidentes. Ante el ahogo financiero en el que se encontraba la provincia, la manifestación también tuvo como objetivo que la comuna pidiera lo que le

17 Cabe aclarar que hasta ese momento la paridad cambiaria era de un peso igual a un dólar. A partir del 7 de enero se dejó sin efecto la Ley de Convertibilidad, equivaliendo el dólar a \$1,40, valor que fue aumentando paulatinamente en el mercado cambiario hasta estabilizarse alrededor de los \$3.

correspondía al Gobierno Provincial, para que éste hiciera lo mismo con la Nación.

En la ciudad de Resistencia, Chaco, el Movimiento de Desocupados General San Martín, realizó una movilización frente a la municipalidad y la casa de gobierno reclamando puestos de trabajo.

Jueves 3 de enero

En el Gobierno Nacional asumía el nuevo Ministro de Economía Remes Lenicov, quien anunciaba la pesificación de las tarifas de los servicios públicos, liquidándolas a precio dólar. Anunciaba su propuesta de devaluación controlada del peso, que se estimaba en el orden del treinta por ciento y establecía una paridad de U\$S 1= \$1,30.

Como consecuencia de la devaluación y la posterior inflación que provocaría el fin de la convertibilidad, comenzó a circular el temor por el desabastecimiento de medicamentos. Muchos comerciantes –sobre todo farmacéuticos– especularon con aumentar los precios. Esta situación causó indignación entre la gente, registrándose en algunas ciudades nuevos intentos de saqueos.

La plaza central de Resistencia, Chaco, se convirtió en el escenario de tres cacerolazos simultáneos. Por un lado, desocupados nucleados en la CCC que continuaban reclamando planes de trabajo; por otro lado y en forma separada, los desocupados del Movimiento General San Martín, al igual que el día anterior, continuaban con el reclamo por puestos de trabajo; y finalmente los trabajadores de la UPCP reclamaban el pago de los aguinaldos.

También se registraron cacerolazos en otras tres provincias. En la ciudad de Córdoba los proveedores de distintos servicios a la Municipalidad se concentraron en el ingreso del edificio exigiendo a las autoridades el pago adeudado. La mayoría de los allí presentes eran miembros de los cuerpos artísticos estables y proveedores externos del área de Cultura.

En Santa Fe, los empleados municipales de Reconquista que venían reclamando sus haberes, realizaron un cacerolazo frente a la sede del Ejecutivo Municipal. En tanto el intendente anunciaba otro severo plan de recortes para el Municipio, el obispo de dicha ciudad se comprometió a dialogar con éste, frente al pedido formulado por los municipales. Por otra parte, los vecinos de Tartagal continuaban resistiendo al cese de actividades de la directora del Servicio de Atención Médica para la Comunidad (SAMCO), Noemí Cuellar.

En la ciudad de Humahuaca, provincia de Jujuy, los trabajadores municipales protestaron por el pago de sueldos atrasados, al igual que el personal de salud pública provincial que se movilizaba en la ciudad de San Salvador. Ese día la plaza principal y las calles de la ciudad congregaron por un lado, a un grupo de vecinos con banderas argentinas para expresar su “*patriotismo*” frente a los hechos que conmovían al país, y por el otro, a los trabajadores de

la Asociación de Personal de Discapacitados para el cobro de estacionamiento y afines, que requerían a las autoridades municipales vetar la ordenanza que suspendía la remoción de vehículos de la vía pública como una forma de preservar sus puestos de trabajo; y por último, los desocupados de la Asamblea Piquetera Provincial reclamaban precisiones respecto de la distribución de planes de trabajo.

Al igual que en la capital jujeña, en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero, se sucedieron distintas protestas. Por la mañana un nutrido grupo de trabajadores municipales quemaron cubiertas y se manifestaron frente a la Intendencia en reclamo de los sueldos atrasados. Pedían también una reunión directa con el intendente, desconociendo la representación del gremio municipal. El intendente no los recibió y mantuvo una reunión con el SUOEM. Cerca del mediodía, cuando estos manifestantes se retiraron sin ninguna solución a la vista, los empleados del Concejo Deliberante iniciaron una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Además de cánticos y gritos denunciando la situación, los manifestantes se valieron de una cacerola (la que utilizaban para preparar el desayuno), para acompañar el reclamo. Al mismo tiempo, un grupo de maestras jardineras municipales se acercaron a la Intendencia en reclamo de sus haberes retrasados y para plantear cuestiones particulares del ámbito educativo municipal. El intendente tampoco recibió a este contingente de trabajadoras. Por otro lado, en la ciudad capital de dicha provincia un grupo de afiliados y dirigentes del Sindicato de Jerarquizados Municipales iniciaron una huelga de hambre en la Catedral de Santiago del Estero para reclamar por las mismas razones.

En la ciudad de San Rafael, Mendoza, más de cincuenta colectivos de una empresa de transporte de pasajeros cortaron el tránsito ante el peligro de remate de esas unidades debido a una deuda de quinientos mil pesos que la compañía mantenía con un banco. La amenaza judicial provocó la manifestación espontánea de todo el personal con los micros, a quienes se sumaron taxistas, remiseros, otros colectiveros y choferes de servicios contratados. La palabra saqueo volvió a resonar en la misma provincia cuando, cerca de la medianoche, unos doscientos vecinos del departamento de General Alvear se agruparon frente al supermercado más importante de esa ciudad –SuperVea– al grito de “*Tenemos hambre, queremos comer y darle algo a nuestros hijos*”. Mientras la gente amenazaba con romper los vidrios del supermercado si no les entregaban comida, un grupo de policías frenó a los vecinos formando un cordón para custodiar el comercio. Posteriormente empleados de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad, llegaron con una camioneta cargada con bolsas de mercadería que fueron entregadas entre los manifestantes, permitiendo de esta manera que se descomprimiera la tensa situación.

En la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) envió un comunicado repudiando “el asesinato

del compañero Rodríguez” por parte de las fuerzas policiales de la provincia durante la sangrienta represión de los días 19 y 20 de diciembre. Exigió el juicio y castigo a los policías culpables de todos los homicidios ocurridos durante esas jornadas, así como la cesación de las autoridades de la jefatura de policía y la renuncia inmediata de los responsables políticos: el gobernador y el ministro de gobierno.

Mientras tanto, en el sur del país también continuaban las protestas. En Río Chico, un pueblo rionegrino de trescientos cincuenta habitantes, algunos vecinos tomaron la Comisión de Fomento para pedir la renuncia de la comisionada de la localidad por mal desempeño en sus funciones. Entre los reclamos se encontraba la denuncia por la entrega de alimentos vencidos, la no provisión de mercadería y la falta de distribución de papeles administrativos para la venta de ganado y productos agrícolas.

Viernes 4 de enero

Ante la presión recibida por diversos grupos de interés (bancos, empresas privatizadas, etc.), el gobierno no dio a conocer el nuevo plan económico, tal como había anunciado el día anterior. Por otro lado, se presentaba al Congreso el proyecto de Ley de Emergencia Pública y Régimen Cambiario.

Una vez más, en la provincia de Entre Ríos, el Movimiento Paranaense Autoconvocado y la Multisectorial realizaron una marcha hacia la Casa de Gobierno reclamando justicia por la muerte de tres personas, ocurridas durante los días de la represión a los saqueos. Golpeando cacerolas, exigieron también la renuncia del gobernador Montiel, del ministro de justicia y el jefe de la Policía. Participó gente de diferentes sectores: militantes de varios partidos políticos y gremios, representantes de organismos de defensa de los derechos humanos, vecinos de los barrios humildes, trabajadores estatales y comerciantes.

En San Salvador de Jujuy, los trabajadores del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales continuaron con su reclamo por el pago de haberes adeudados; ante la “*incertidumbre reinante*” anunciaron la continuidad de un plan de lucha con nuevas movilizaciones. Lo mismo hacían los trabajadores municipales de Reconquista, provincia de Santa Fe, frente a la Municipalidad. La protesta se realizaba pacíficamente con pancartas, una olla popular y quema de cubiertas. Esa mañana se concretaba la reunión entre el intendente, el obispo y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAM) para encontrar una solución al conflicto.

Asimismo en Rosario de la Frontera, Salta, los trabajadores municipales se concentraron y marcharon hacia la Municipalidad. Miembros del Ejecutivo escucharon los reclamos en la vereda y cruzando algunas palabras con los manifestantes les recordaron que “*todos saben que la provincia, al no*

recibir en tiempo y forma, la coparticipación nacional, no puede hacer las transferencias a los municipios". Los trabajadores insultaron al intendente y anunciaron la realización de una asamblea para el día siguiente, producto de la indignación que causaron las explicaciones.

La provincia de Chaco fue escenario de varias protestas. Por un lado los aborígenes desocupados de la localidad de Sáenz Peña pidieron al Gobierno Provincial y Municipal, que se les conceda el cincuenta por ciento de los puestos de los planes sociales al conjunto de las comunidades que con anterioridad habían recibido solamente el uno por ciento. En Resistencia, los obreros despedidos de la empresa Licores del Litoral S.A., intimaron a ésta, mediante carta documento, a abonar el sueldo anual complementario de 2001, vacaciones e indemnizaciones. Por último, los desocupados de la localidad de Las Breñas realizaron un cacerolazo frente a algunos supermercados y a la Municipalidad debido al aumento de los precios en los comestibles.

También en Río Negro, desocupados del MTD "23 de Julio" de la localidad de Allen, se manifestaron frente al edificio municipal reclamando la implementación de nuevos proyectos laborales. Cuestionaban la distribución en el reparto de los planes de empleo por parte de la Municipalidad. En tanto, en Bariloche, un centenar de desocupados beneficiarios de planes provinciales tomaron la municipalidad por un par de horas en reclamo de los pagos atrasados de estos subsidios. Y, finalmente, en la ciudad de Cipolletti, quince trabajadores de una empresa frutihortícola que habían comenzado su protesta el 27 de diciembre, volvieron a manifestarse frente a las instalaciones de la compañía para reclamar por sus haberes y contra el despido de algunos de los empleados más antiguos de la firma. Además de hacer retención a sus tareas, quemaron cubiertas y desplegaron carteles con sus reclamos.

En la vecina provincia de Neuquén, los trabajadores de la fábrica de cerámica Zanón reactivaron parte de la planta luego de decidir su ocupación en asamblea y reactivar la producción frente al "lock out" patronal que mantenía paralizada la planta. También volvieron a solicitar la estatización de la empresa "*bajo control obrero*" en virtud de la deuda de más de 5 millones de pesos que la firma mantenía con la provincia.¹⁸

En el ámbito educativo, en la ciudad de Santa Fe, la Asamblea de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL) se mantenía en estado de asamblea permanente y movilización hasta que fuera garantizado el pago del sueldo de diciembre y medio aguinaldo. Enviaron una nota al rector para

18 Frente al vaciamiento de la empresa por parte de los dueños y la consiguiente pérdida de la fuente de trabajo, los trabajadores tomaron la fábrica en los últimos meses de 2001 y comenzaron una lucha por la autogestión obrera de la empresa que aún continúa. Las acciones de los trabajadores de Zanón se convirtieron junto con la textil Brukman y la metalúrgica IMPA de Buenos Aires, en símbolos paradigmáticos de las fábricas recuperadas por sus trabajadores.

que solicitara el no cobro de intereses punitivos por parte de los entes de servicios públicos. El inicio del ciclo académico 2002 estaba supeditado a la solución del conflicto.

Por último, en la ciudad de Mendoza, alrededor de cien empleados estatales se concentraron haciendo sonar latas y cacerolas frente a la Casa de Gobierno en reclamo por los atrasos en el pago de aguinaldos y sueldos y para protestar contra la administración aliancista. Al mismo tiempo, los empleados de la Legislatura tomaron el Salón Rojo donde se iba a realizar una reunión para tratar la escasez de medicamentos en las farmacias. Golpearon durante media hora ollas para reclamar por su sueldo anual complementario, lo que obligó a diputados y funcionarios a trasladarse a otra sala. Por otro lado, afuera de los Tribunales Federales, un grupo de trabajadores judiciales con carteles en contra de la Corte Suprema incitaban a los automovilistas a tocar bocina y protestar.

Sábado 5 de enero

En el marco de las nuevas medidas que estaba tomando el gobierno, el secretario de la Presidencia Aníbal Fernández, aseguró que se crearían un millón de puestos de trabajo en el mediano plazo y aclaró que el pago se haría con bonos, debido a las dificultades financieras para emitir moneda genuina. Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobaba el proyecto de Ley que había ingresado el día anterior en el Congreso y que ponía fin a la convertibilidad.

En la ciudad de Mendoza continuaba el repudio a la clase dirigente. El ministro de Economía de la provincia, Lucio Duarte, debió abandonar un bar cuando una veintena de personas mediante un “escrache espontáneo”, con cacerolas y bocinas, protestó ante su presencia. Los manifestantes lo repudiaron con gritos e insultos que incluyeron al Gobierno Nacional y a los miembros de la Corte Suprema. “*Vamos a levantar a los políticos de los cafés*”, gritó uno de los manifestantes, mientras recorrían las calles céntricas pidiendo, entre otras cosas, un nuevo llamado a elecciones en el país. Portando carteles, haciendo sonar cacerolas y agitando banderas, este grupo de personas comenzó a recorrer los bares de la Peatonal Sarmiento, una zona frecuentada por los políticos mendocinos, intimidando a los funcionarios a que abandonaran el lugar. A ellos se fueron sumando otras mujeres y hombres que paseaban por el centro mientras los automovilistas acompañaban la protesta haciendo sonar las bocinas. En varias oportunidades confundieron a empresarios que habitualmente aparecían en los medios con políticos: “*da lo mismo*”, dijo un hombre que increpó a los gritos a un empresario.

En otro punto de la ciudad, los empleados estatales realizaron un cacerolazo frente a la Casa de Gobierno y la legislatura de Mendoza por el atraso en el sueldo de diciembre y el medio aguinaldo. Por la noche, la residencia del

gobernador Roberto Iglesias apareció con carteles y varios pares de zapatos colgados en el frente de la misma, colocados por un grupo de personas que solicitaban trabajo y comida.

No sólo la capital provincial fue escenario de protestas, sino también varias localidades del interior de la provincia. En San Martín, cerca de cien empleados públicos se manifestaron frente al edificio municipal para reclamar por el atraso en el pago de los sueldos. Éstos esperaron algunos minutos y luego pidieron a los funcionarios que salieran para escuchar sus reclamos. Más de cuatrocientos cincuenta vecinos de Junín se reunieron en la plaza departamental Juan Bautista Alberdi para exigir que el Concejo Deliberante local sólo gastara el veinticinco por ciento del presupuesto y la Comuna rebajara sus erogaciones al cincuenta por ciento. Los vecinos advertían que no se debían rebajar los sueldos de los empleados de las categorías más bajas. A su vez, proponían que con los fondos ahorrados se ayudara a microemprendimientos agrarios, industriales y comerciales, se diera auxilio a las empresas en crisis, centros de salud y educacionales; y exigían una rendición pública en períodos trimestrales del manejo de los fondos. En la localidad de San Rafael, los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo y del gremio Unión Empleados de Comercio intentaron realizar una inspección en locales comerciales, pero propietarios, empleados, clientes y hasta vecinos se levantaron contra los inspectores y les pidieron que se fueran, lo que generó una fuerte pelea: *“Parecía que nos tomaban el pelo, ¿justo ahora tienen que salir a inspeccionar?, ¿acaso ellos viven en otro país?”*, dijo uno de los afectados. Los comerciantes cerraron los locales en repudio a la medida y cortaron el tránsito en una de las principales calles de la ciudad en hora pico. *“Nunca nos sentimos representados y los gremialistas no entienden que parte de todo el movimiento que hubo en la Argentina fue en su contra”* expresó un trabajador de una zapatería que intentó ser inspeccionada.

Protestas particulares resurgían en un escenario de conflicto marcado por una demanda común: el repudio a la clase dirigente local y nacional.

En Jujuy, una acción de protesta fue protagonizada por la Asociación de Discapacitados para el cobro de estacionamiento frente a la municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el fin de que se vetase la ordenanza que hacía peligrar sus puestos de trabajo. En oposición a esa protesta, ese mismo día, el Colegio de Arquitectos realizaba con otras organizaciones de la sociedad civil un bocinazo a favor de la ordenanza que prohibía la remoción de vehículos por parte de la empresa Setranor.

La población de Tartagal, provincia de Santa Fe, continuaba apoyando a la Dra. Cuellar quien se mantenía firme en su función de directora del SAMCO y había presentado un recurso de amparo ante la justicia, después de que una decisión ministerial decidiera alejarla de su cargo. La gente hacía una semana que se encontraba en la puerta de SAMCO, con ollas populares,

quema de cubiertas y un abrazo simbólico al portón de ingreso. Concurrían al lugar personas de todas las edades y grupos sociales e incluso de zonas rurales cercanas a Tartagal. Por segunda vez había fracasado el intento de nombrar a un nuevo director del nosocomio.

Domingo 6 de enero

Finalmente la Cámara de Senadores otorgó sanción definitiva al proyecto de Ley que ponía fin a la convertibilidad. Esa Ley fijó el precio del dólar oficial a \$1,40 para todas las transacciones relacionadas con el sistema financiero y el comercio internacional; la devaluación del peso rondaba el cuarenta por ciento. También se anunció una flexibilización parcial del “corralito” y otras medidas: se podrían extraer hasta mil quinientos pesos por mes en las cuentas de depósitos de sueldos y jubilaciones; no habría control de precios; se pesificarían las deudas de hasta cien mil dólares; y durante noventa días no podría haber despidos sin causas justificadas. El ministro de Economía, Remes Lenicov, enumeró los desafíos que tenía por delante el Gobierno luego de *“la muerte oficial de la convertibilidad”*.



Por otra parte, asumieron los nuevos ministros, Horacio Jaunarena en Defensa y Graciela Gianettasio en Educación.

Los maestros de la ciudad de Susques, Jujuy, iniciaron un paro en reclamo por sueldos atrasados, sumándose a las acciones de su gremio, la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), quienes mantenían medidas de fuerza por el incumplimiento de pagos por parte del Gobierno Provincial.

Nuevos saqueos y nuevas puebladas

Lunes 7 de enero

La Coordinadora del Área Social del Gobierno, Hilda “Chiche” Duhalde, anunciaba un plan de subsidios y alimentos a jefes de hogar destinado a más de un millón de personas.

Luego de las medidas económicas anunciadas, que enardecieron una vez más el irritado ánimo de la gente, se registró una fuerte suba en los precios de varios productos importados, en los de exportación y en algunos artículos de primera necesidad. Esto generó un incremento de las protestas en demanda de alimentos como sucedió en la localidad de Las Breñas, provincia de Chaco, donde los desocupados volvieron a movilizarse hasta la Municipalidad solicitando bolsas de mercaderías y planes de trabajo. Por otra parte, en Resistencia, se realizó un cacerolazo en el mástil mayor al que concurrieron más de un millar de personas. En este cacerolazo, convocado a través de la radio Morena, se protestó contra el Gobierno Provincial y el Superior Tribunal de Justicia.

También en la ciudad de Neuquén, los gremios estatales y provinciales realizaron una marcha y un cacerolazo contra las medidas económicas del Gobierno Nacional, el atraso en el pago de los salarios y contra las empresas multinacionales. Por la noche se sumaron además de los empleados estatales, estudiantes universitarios, organizaciones sociales, trabajadores de la fábrica recuperada Zanon y partidos de izquierda, quienes mezclaron bombos, redoblantes y bombas de estruendo con cacerolas y sartenes.

Por otra parte, una veintena de transportistas del Correo Argentino manifestaron frente a la sede de la ciudad de Neuquén y anunciaron el comienzo de un paro de actividades hasta que se les abonara, por lo menos, dos meses de los cinco que se les adeudaba.

Además de las movilizaciones en la ciudad capital se registraron varias protestas en otras localidades de la provincia. Los trabajadores del matorral municipal de la ciudad de Centenario cortaron el puente que une esa ciudad con la localidad rionegrina de Cinco Saltos en reclamo del pago de sueldos atrasados y pidiendo el levantamiento de las medidas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que restringían

la actividad del sector impidiendo el ingreso a la provincia de ganado en pie. Al no recibir respuestas de las autoridades, cortaron el puente y ocuparon el establecimiento. En la ciudad de Cutral-Có trabajadores de la empresa de cerámicos Stefani recrudecieron su protesta en reclamo de sus haberes atrasados, anunciando un posible corte de la Ruta N° 22 o la realización de una olla popular en la puerta de la fábrica. Los trabajadores mantenían paro en la producción desde el 31 de diciembre. Por último, en Río Colorado unos cuarenta desocupados agrupados en la Unión Obrera de la Construcción de la República de la Argentina (UOCRA) ocuparon por algunas horas el edificio municipal en reclamo de la agilización de los trámites para la obtención de subsidios sociales, así como de los puestos de trabajo en la construcción, anunciados por el Gobierno Nacional.

En la provincia de Río Negro, trabajadores estatales de la localidad de Luis Beltrán realizaron una manifestación frente a la Municipalidad y mantuvieron enfrentamientos verbales con un funcionario comunal. Por la noche setenta vecinos y trabajadores estatales realizaron un cacerolazo por el centro, siendo la primera vez que se realizaba una acción de este tipo en la región del Valle Medio. También en Santiago del Estero se manifestaron los trabajadores municipales de la ciudad de La Banda, agrupados en el SUOEM, quienes iniciaron un paro por 48 horas, agudizando su reclamo de noviembre y diciembre.

Los empleados estatales de Mendoza volvían a protestar con un cacerolazo frente a la Casa de Gobierno para exigir el pago del aguinaldo y el salario de diciembre que todavía no tenían fecha de pago. Los manifestantes pidieron ser recibidos por las autoridades y, ante la negativa, intentaron ingresar por la fuerza en la Casa de Gobierno de la provincia lo que dio inicio a una fuerte represión policial. Los manifestantes respondieron con una lluvia de piedras y la protesta se extendió verticalmente ya que los que estaban en las oficinas de la Casa de Gobierno arrojaron papeles, agitaron a los manifestantes, e inclusive dejaron caer un par de tubos de neón que explotaron cuando dieron en la calle. A los pocos minutos, llegó un grupo de la infantería para dispersar a los manifestantes. Sin embargo, éstos continuaron haciendo sonar sus cacerolas con insultos al gobierno y a las fuerzas de seguridad. *“Nosotros tenemos entendido que el Gobierno quiere pagar los sueldos de diciembre en el mes de febrero. Nosotros no podemos hacer frente a semejante demora. No queremos golpear ollas, queremos cocinar la comida de nuestros hijos. Eso defendemos”*, dijo una de las manifestantes. La protesta finalizó con varios heridos, entre policías, manifestantes y un camarógrafo.

En tanto, continuaba la protesta provincial mendocina que exigía la reducción de gastos y sueldos de las autoridades y los Concejos Deliberantes. En la localidad de Luján de Cuyo, mientras se cumplía la quinta jornada

de protesta, en horas del mediodía los vecinos volvieron a juntarse y esperaron allí a los concejales. Ante la falta de respuestas de éstos al petitorio presentado días atrás –rebaja del presupuesto y renuncia de los funcionarios que no lo aceptaran– exigieron la presencia del intendente De Marchi, quién admitió que estaba dispuesto a hacer todas las reducciones posibles en gastos y sueldos. En San Carlos, cerca de un millar de personas realizaron un escrache en la puerta de la Municipalidad exigiendo la reducción de los sueldos y gastos del municipio. A diferencia de otros departamentos de la provincia los sancarlinos consiguieron que los concejales, que hasta 2001 cobraban dietas de mil setecientos cincuenta pesos, a partir de 2002, según se habían comprometido ante los manifestantes, percibieran sólo quinientos pesos. Asimismo, el intendente Mario Guiñazú anunció una reducción en los gastos de la estructura comunal. El gasto político fue también el motivo de que medio centenar de santarrosinos se manifestaran y entregaran un petitorio al jefe comunal, en el cual le exigían la rebaja en más de un cuarenta por ciento de los sueldos de funcionarios y concejales y la suspensión total de los viáticos. Al igual que sus vecinos, pidieron que lo que resultara de ese ahorro se utilizara para la realización de un fondo de emergencia que ayudara a la creación de microemprendimientos y mayor cantidad de puestos de trabajo en la zona.

En San Rafael los empleados del hospital Teodoro Schestakow realizaron un paro en reclamo por el pago del aguinaldo, el sueldo de diciembre, y por la falta de insumos y medicamentos que afectaba el normal desarrollo del hospital, según lo expresado por Silvia Depetris, delegada de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). El paro consistió en la retención de tareas y el quite de colaboración de enfermeros, médicos y personal administrativo del hospital. Sin embargo, decidieron respetar los servicios de guardia. Los trabajadores de la salud anunciaron que la medida se prolongaría hasta que se hubiese percibido lo adeudado por el Gobierno Provincial.

En General Alvear unas ciento cincuenta personas se concentraron en la explanada del palacio municipal. Según lo expresado por los medios periodísticos, el objetivo de la convocatoria tuvo dos interpretaciones. Por un lado, el Ejecutivo manifestó que “*es una espontánea manifestación de apoyo a la gestión municipal de parte de esta gente*”. Por otro lado, muchos de los manifestantes aseguraron que habían llegado hasta allí porque se había corrido la voz de que iban a repartir cerca de cuatrocientos planes de empleo.

Por último en la localidad de Godoy Cruz, representantes de más de quince barrios carenciados se concentraron en la plaza departamental y, con cacerola en mano, exigieron asistencia social y el mantenimiento de comedores comunitarios. El intendente César Biffi mantuvo una reunión con los vecinos

quienes advirtieron al jefe comunal sobre “*posibles nuevos saqueos si no se accede a los reclamos de la gente*”.

En la provincia de Salta un grupo de aborígenes, en su mayoría de la etnia Wichí, liderados por el cacique Indalecio Calermo de la misión La Mora, cortaron la Ruta Provincial N° 34 en el acceso norte de Tartagal. Pedían que se les otorgaran dos mil planes sociales, y que se establecieran planes habitacionales. Por último solicitaban que se nombrara en la presidencia del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas (IPPIS) a dicho cacique.

El conflicto en el área de la salud se extendió también a Tucumán donde vecinos y desocupados de la ciudad de Los Ralos se autoconvocaron en una asamblea popular y reclamaron ante el Gobierno provincial por la falta de insumos en el hospital local. Sólo los pacientes graves podían ser internados y el resto se derivaba a la capital donde los hospitales estaban saturados. Además de las quejas por la situación del hospital, los asambleístas anunciaron una extensa lista de demandas, entre ellas, la justa distribución de los planes sociales, el arreglo de la Ruta N° 303, el traslado del basural de la comuna, la rebaja de tarifas en transportes públicos y el boleto estudiantil. Por otro lado, en la localidad de El Bracho, una parte del interior de la sede de la comuna amaneció quemada ante la sorpresa del delegado comunal, Armando Ale. El funcionario manifestó que este incidente era producto de intencionalidades políticas, mientras que los vecinos negaron que su protesta hubiera tenido dicha motivación. También negaron haber participado en el incendio. Los pobladores de la comuna insistieron, al igual que la semana anterior, con su postura de reclamar el alejamiento del delegado comunal y de tomar pacíficamente la sede.

Martes 8 de enero

Al igual que ayer, en la ciudad de La Banda, el SUOEM se manifestó por la mañana frente al Palacio Municipal de la ciudad capital de Santiago del Estero. El paro de cuarenta y ocho horas había tenido, según los dirigentes, “*más del 100 %*” (sic) de acatamiento. Las autoridades municipales, en cambio, deslegitimaron la protesta denunciando que el paro había tenido un “*bajo acatamiento*”. Por otra parte, en la ciudad de Frías se realizó un cacerolazo organizado por el Movimiento de Desocupados de Frías (MODEFRI) para repudiar “*la inestabilidad económica por la que atraviesa Frías y el país*”. Protestaron más de doscientas personas por el aumento indiscriminado de los precios en los productos de la canasta familiar y por la aguda crisis en la que se encontraba el “bono municipal”.

En el municipio de San Antonio Oeste, Río Negro, trabajadores del hospital local protestaron por el atraso en sus salarios, sumando la solidaridad de los trabajadores estatales de otros sectores de la administración pública. Se

movilizaron hasta el edificio comunal y se reunieron con el intendente, quien se comprometió a acompañar el reclamo de los trabajadores. Por otra parte empleados de una empresa pesquera de esa localidad realizaron una protesta con quema de cubiertas en la puerta de la fábrica exigiendo el pago de sueldos atrasados. En General Roca, un centenar de desocupados de la construcción se manifestaron frente a la Municipalidad en reclamo de la reactivación del sector, de puestos de trabajo y de planes laborales que “aliviarían” la situación de desocupación. Luego de una reunión con el intendente se retiraron con la promesa del comienzo de una importante obra de infraestructura municipal que generaría nuevos puestos de trabajo en el sector y de que les serían entregados cuatrocientos bolsones con alimentos.

En la provincia de Santa Fe se realizaron diversas protestas a lo largo de la jornada. En Calchaquí alrededor de seiscientas personas se concentraron en una esquina comercial de la ciudad para exigir la entrega de alimentos a tres comercios céntricos. A su vez, algunos grupos que se dirigían desde los barrios periféricos hacia el centro de la localidad cortaron la Ruta Nacional N° 11. Debido a la gran concentración de personas y ante la consumación de un posible saqueo, el intendente se acercó al lugar para dialogar con los manifestantes y les prometió la entrega de bolsones de alimentos. La promesa se cumpliría al finalizar el día, acompañada de una fuerte presencia policial que causó algunas tensiones. Por la tarde, un grupo de personas se dirigieron a la casa del intendente Miguel Milessi y del senador Martín Mucchielli (PJ) y en ambos domicilios, quemaron cubiertas y apedrearon el frente de las casas. Posteriormente, en la sede municipal quemaron cubiertas y organizaron una olla popular. Los manifestantes enardecidos ya no pedían planes y alimentos, sino directamente la renuncia del intendente. Alrededor de las 22:00 horas, y ante la falta de respuesta, comenzaron a gritar “¡queremos saqueo!” y rompieron las vidrieras de un supermercado y otros locales, mientras la Policía intentaba dispersarlos con balas de goma.

En la capital provincial, los empleados del Sanatorio Americano cortaron la calle e hicieron una ruidosa protesta para reclamar por el pago de haberes atrasados. Mientras, los choferes de una línea de transporte urbano de pasajeros mantenían paralizado el servicio desde el jueves 3, en reclamo por la deuda de aguinaldos y la falta de mantenimiento de las unidades. Asimismo, los trabajadores del frigorífico Sodecar también iniciaron un paro de actividades y se concentraron frente a las oficinas de la firma realizando una asamblea. La empresa se encontraba paralizada con cuatrocientos operarios de la industria de la carne inactivos. Los reclamos se basaban en la demanda de pagos atrasados y la falta de respuesta en relación al futuro del frigorífico debido a su delicada situación financiera. Por último, los obreros de la papelera Tacuarendí cortaron media calzada de la Ruta Nacional N° 11 en reclamo de la reapertura de la fuente laboral. Las actividades en esta

planta se habían paralizado hacía veinte días debido a la caída de las ventas y luego de que la empresa provincial de energía les interrumpiera el servicio por falta de pago.

Al igual que en la ciudad de Santa Fe, los choferes de colectivos de Salta capital continuaban con el paro por sueldos adeudados. Los trabajadores se concentraron con los colectivos en la zona céntrica de la ciudad y en los alrededores de la plaza 9 de Julio. El secretario general de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA), Oscar Cruz, anunció que se quedarían allí por tiempo indeterminado hasta tanto no se solucionara el conflicto. También se registraron protestas en el interior de la provincia. En la localidad de Salvador Mazza, un grupo de vecinos realizó una ruidosa manifestación con olla popular en reclamo por la finalización de los contratos de dos médicos del hospital local a quienes el ministerio de Salud Pública decidió sumariar por graves irregularidades. En Tartagal, los aborígenes que continuaban con el corte de la Ruta Provincial N° 34 levantaron por la noche las barricadas, pero anunciaron que permanecerían en la zona y volverían a tomar medidas de fuerza si el gobierno no daba respuestas a sus reclamos.

En la provincia de Mendoza, un grupo de piqueteros cortó la ruta del acceso Sur a Maipú y reclamó por trabajo y comida. Lo mismo sucedió en las calles de las localidades de Guaymallén y Las Heras, y en la Ruta Nacional N° 40 en la localidad de Luján. Estos cuatro piquetes fueron organizados por la Mesa Provincial de Desocupados y participaron unas doscientas personas, en su mayoría niños y mujeres. El pedido concreto giró sobre cinco puntos: rechazar las medidas de devaluación, pedir la puesta en marcha de los nuevos puestos laborales, exigir el reparto de planes sociales y el subsidio para jefas y jefes de hogar, mercaderías e insumos y la reconexión de los servicios de luz, gas y agua que hayan sido cortados a los desocupados. En la ciudad de San Martín, más de quinientas personas, que protestaban desde hacía unos días tomaron virtualmente el Concejo Deliberante departamental, y mantuvieron en cautiverio por más de seis horas a la mayoría de los concejales bajo la exigencia de que redujeran sus ingresos mensuales y el gasto que ocasiona el cuerpo deliberativo. Los funcionarios no salían por temor a la pueblada, ya que quienes intentaron hacerlo fueron empujados por los vecinos para que retornaran al edificio. El número de manifestantes aumentó hacia la noche cuando la gente del casco céntrico se concentró frente al edificio comunal y, con una larga bandera argentina, cortaron la Ruta Provincial N° 50. La presión de la gente logró que los concejales aceptaran cobrar quinientos pesos hasta el mes de mayo, momento en que asumirían los nuevos concejales.

Por último, en la ciudad de Sáenz Peña, Chaco, un grupo de personas, en su mayoría mujeres y niños, saquearon un autoservicio llevándose alimentos de primera necesidad.

Miércoles 9 de enero

En materia de política económica el ministro Remes Lenicov anunció un nuevo cronograma de pagos para salir del corralito. Los plazos fijos comenzarían a devolverse a partir de enero de 2003, dado que los bancos no disponían del dinero para hacer frente a un retiro masivo. Además, el gobierno anunció la posibilidad de distribuir productos retenidos en la Aduana (ropa, alimentos, calzados) para los planes sociales. En el área de salud, luego de varios días de reclamos y protestas, se declaró la emergencia sanitaria y llegaron partidas de insulina desde Brasil.

Continuando con la ola de protestas, en la ciudad de Resistencia, Chaco, desocupados se reunieron frente a la Casa de Gobierno para reclamar planes de trabajo. Por la noche, tal como había sucedido el lunes anterior, se realizó un cacerolazo frente al mástil mayor de dicha ciudad contra el Gobierno Provincial y los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Por otra parte, en la ciudad de Villa Ángela, trabajadores municipales protestaron contra el pago de haberes en bonos, mientras que en Tres Isletas, desocupados se concentraron frente a la municipalidad pidiendo la renuncia del intendente, concejales y otros políticos, al grito de: *¡Argentina! ¡Tenemos hambre! ¡Queremos Trabajo!* Una vez más, efectivos policiales se apostaban frente a los supermercados ante rumores de saqueos.

Tanto en la provincia de Jujuy, como en Neuquén y Santa Fe, se registraron marchas de trabajadores municipales. En Jujuy fue en la ciudad de San Pedro, donde las marchas fueron acompañadas por cortes en la Ruta Provincial N° 34 protagonizados por desocupados y empleados municipales, que protestaban ante los aumentos de precios en los comercios. Mientras que en Neuquén, los trabajadores municipales de San Martín de los Andes realizaron una quema de cubiertas y de basura frente al edificio comunal en reclamo por la falta de pago del salario correspondiente a diciembre. Más de medio centenar de trabajadores concluyó la medida de protesta cuando la Municipalidad les garantizó que habían depositado un cincuenta por ciento de lo adeudado y que el resto iba a pagarse la semana siguiente.

En la localidad de San Javier, Santa Fe, los empleados municipales se movilizaron y se concentraron frente al municipio reclamando el pago de haberes atrasados. Ya el día anterior habían realizado un cacerolazo para actualizar un reclamo que comenzó en diciembre. La asamblea de afiliados al gremio resolvió levantar el paro cuando se completara el pago correspondiente. Por otra parte, en la capital provincial los no docentes de la Universidad Nacional del Litoral, continuaban en asamblea permanente ante la falta de pagos, razón por la que los docentes también se sumaron al conflicto. El sindicato ratificó el estado de asamblea y movilización permanente. A su vez, en el interior de la provincia, continuaban las protestas en las plazas principales

de Calchaquí y Reconquista. En esta localidad los trabajadores municipales organizaron una olla popular en reclamo del pago de sueldos atrasados, mientras que los desocupados organizaron otra frente a la catedral de la ciudad para solicitar programas de empleo.

La distribución de subsidios continuó siendo motivo de protesta en varias provincias del país. Cientos de tucumanos se concentraron en la esquina de Córdoba y 25 de Mayo en la capital provincial, en busca del formulario de empadronamiento para conseguir subsidios para jefas y jefes de hogar que otorgaba la Nación. Los asistentes cortaron el tránsito ya que la Gerencia de Empleo suspendió el registro de postulantes a planes sociales.

En Neuquén, los desocupados del barrio Parque Industrial, cortaron la Ruta Provincial N° 7 en reclamo de planes laborales, puestos de trabajo y atención sanitaria. En la misma ciudad, empleados de la empresa de colectivos Centenario suspendieron los servicios de media y larga distancia en reclamo de sueldos atrasados. Además, realizaron una manifestación en la terminal central de Neuquén e impidieron la salida de unidades de otras empresas. Esta medida fue acatada por los empleados de Neuquén capital, Centenario, San Martín de los Andes; La Plata, Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires; y Viedma, en la provincia de Río Negro. El conflicto con el transporte de pasajeros se profundizaba también en Salta donde continuaba el paro de choferes. La ciudad se encontraba sin transporte desde hacía tres días y los choferes de la UTA habían amenazado con cortar los accesos a la ciudad. Mientras continuaban las negociaciones entre los empresarios, la Municipalidad y los choferes; éstos realizaron una ruidosa manifestación en el centro de la ciudad. Por otro lado, en la Plaza 9 de Julio, con un ruidoso cacerolazo se manifestaban en protesta por la crisis y contra las medidas oficiales, militantes de la CCC, el Polo Obrero, el Partido Humanista (PH), la Izquierda Unida, la CTA, la ATE, los prestadores de la salud, las asociaciones de profesionales y los tabacaleros. Por las calles céntricas marcharon también los sectores de servicios públicos y de la producción, dirigentes sindicales, amas de casa y representantes de partidos políticos de izquierda.

En la provincia de Mendoza, departamento de Junín, más de doscientas personas tomaron la Comuna durante aproximadamente un cuarto de hora. La pueblada reclamaba una respuesta al petitorio que habían entregado el viernes y exigía la disminución de las dietas en un cuarenta por ciento y la creación de un fondo de emergencia departamental. El intendente interino, Eduardo Angileri, anunció a los allí presentes la decisión de reducir el gasto político del Consejo Deliberante en un cincuenta por ciento, resultando una dieta por concejal de ochocientos pesos. Ante estas declaraciones la gente exigió a los gritos que las dietas fueran de quinientos pesos como las prometidas por los funcionarios del departamento vecino de San Martín. El

ambiente comenzó a caldearse y la gente tiró un vallado que la separaba del edificio comunal e ingresó al hall central. *“Es inconcebible que en un departamento de treinta mil habitantes haya sólo un médico cada dos mil personas, mientras que cada seis habitantes hay un empleado público”*, manifestó uno de los vecinos. Ante la fuerte presión y los insultos, funcionarios del Concejo Deliberante y anunciaron que cobrarían quinientos pesos. La gente exigió que este compromiso fuera firmado por escrito.

La concertación de las voces

Jueves 10 de enero

En distintos puntos del país comenzaban a conformarse espacios Multisectoriales. En una misma acción de protesta convergían diversos actores que se solidarizaban con los distintos reclamos.

En el barrio Parque Industrial de la ciudad capital de Neuquén un grupo de desocupados se encontraba realizando un piquete en la Ruta N° 7. La Policía Provincial intentó desalojarlos y se produjeron serios incidentes. La feroz represión se extendió a todos los habitantes del barrio quienes fueron reprimidos con gases lacrimógenos, balas de goma y bastonazos. Se registraron tres detenidos y varios heridos. En la misma ciudad otro grupo de desocupados, nucleados en el Movimiento Barrios de Pie, realizó una olla popular en reclamo de planes sociales y alimentos frente al Banco Provincia de Neuquén. Afirmaron que no dejarían la protesta hasta alcanzar un acuerdo con las autoridades provinciales. Por otra parte, en la localidad de Plaza Huinca, unos cincuenta desocupados cortaron la calle principal de la ciudad frente a la municipalidad en reclamo de una asistencia económica de doscientos pesos y mejoramiento en sus viviendas. Dos días atrás habían instalado carpas en el lugar y afirmaron que se quedarían allí hasta obtener alguna respuesta de las autoridades.

En la provincia de Entre Ríos los vecinos de Gualaguay realizaron un cacerolazo frente a entidades bancarias reclamando por la aceptación de los bonos Federales para el pago de servicios, la normalización de los haberes atrasados y la agilización de la Caja de Conversión. Participaron del cacerolazo tanto integrantes del Colegio de Profesionales, como la CTA, la CGT, delegaciones gremiales docentes, empleados del Hospital San Antonio, empleados de empresas de servicio, de supermercados, locales, amas de casa y empleados municipales. Finalmente conformaron un Comité de Crisis no gubernamental.



También se registraron cacerolazos en varias localidades rionegrinas. En la ciudad de Roca, la Multisectorial de organizaciones sociales y gremiales, vecinos y comerciantes autoconvocados, convocó a más de mil personas que reclamaron el mejoramiento de la salud y la educación pública, mientras que un grupo de treinta desocupados de la CCC se manifestaba frente a la municipalidad en reclamo de planes de trabajo y alimentos. En la ciudad de Cipolletti, unas quinientas personas se reunieron a cacerolear en la plaza principal. Las consignas escritas en carteles, que algunos manifestantes pegaron en la municipalidad y algunos bancos, decían: “*Trabajo Genuino, Salud, Educación, Precio Sostén, Justicia*”. Además, los manifestantes exigieron el esclarecimiento de la muerte de Elvira Abaca (muerta en las jornadas de diciembre) y de todos los crímenes impunes de la zona, un plan de viviendas y obras públicas. Entre las organizaciones y sectores que participaron estaban la Coordinadora de Desocupados, el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML), la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), la ATE, la CTA, productores autoconvocados, vecinos autoconvocados, Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, estudiantes y profesores universitarios, trabajadores de la salud y familiares de víctimas de algunos asesinatos ocurridos en la ciudad. En Villa Regina, se realizó un cacerolazo que contó con la participación de más de doscientas cincuenta personas en reclamo de Salud, Educación y Justicia. Una de las entidades convocantes era la Cámara de Industria y Comercio local. Por

último, en la localidad de Luis Beltrán se realizó un cacerolazo donde confluieron nuevamente vecinos, trabajadores del hospital y de la educación que se manifestaron contra los atrasos salariales y las medidas económicas nacionales y provinciales. A la protesta se sumó un grupo de productores rurales.

Los cacerolazos se extendieron también en la capital tucumana donde por segunda noche consecutiva los vecinos se manifestaron frente a la casa de Gobierno en contra de las autoridades. Mientras, otro cacerolazo se realizaba frente a los bancos en contra de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional. Este último fue organizado por el Polo Social, el Peronismo Revolucionario, la Unión de Docentes Tucumán, estudiantes terciarios y ONG'S. Los manifestantes pasaron por la Casa de Gobierno donde cantaron el Himno Nacional y luego se dirigieron a la Plaza Independencia y se concentraron frente a la estatua de la Libertad. En la localidad tucumana de Banda del Río Salí, los vecinos realizaron sucesivas protestas donde dejaron plasmada la bronca popular con pintadas en las paredes del Concejo Deliberante. Por la noche, alrededor de medio millar de personas se concentró en las puertas de dicho edificio para reclamar la reducción de las tasas municipales que pesaban sobre los servicios de gas, videocable, teléfono y agua. Convocados por la Comisión Pro Defensa del Consumidor de Cruz Alta, reclamaron también que los tributos dejaran de ser cobrados compulsivamente a través de las facturas de esos servicios. El destinatario común de los reclamos fue el intendente Víctor Alfredo Lossi.

Varias protestas se registraron en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. Por un lado, al igual que el pasado 8 de enero, en Calchaquí desocupados se concentraron frente a supermercados reclamando trabajo y alimentos. Ante esta situación, el intendente prometió bolsones de comida pero los desocupados no aceptaron la propuesta y decidieron cortar la Ruta N° 11. En la capital provincial, grupos de desocupados se manifestaron frente a la Casa de Gobierno. El reclamo obedecía a la caída de más de tres mil quinientos planes sociales. Por otra parte, en la localidad de Santo Tomé, los remiseros legales se manifestaron frente al municipio y entregaron un petitorio al intendente Schmidhalter *“en resguardo de la fuente laboral y en apoyo a las líneas de colectivo de la ciudad”*. La ruidosa manifestación la formaban integrantes de las empresas y concesionarias de remises habilitadas pidiendo por la clausura de las empresas no habilitadas. En Arequito, un grupo de personas integrada por productores agropecuarios, colonos de las inmediaciones, comerciantes y pequeños fabricantes manifestaron frente a los Bancos Bisel y Nuevo Banco de Santa Fe. En ambas entidades prendieron fuego el frente del local e impidieron el ingreso a los empleados. La manifestación fue principalmente en contra de los intereses usurarios de los bancos. Uno de los manifestantes declaró *“Estamos con el gobierno en esta pulseada contra*

los bancos. *Somos gente pacífica, de clase media, pero no vamos a soportar esta usura escandalosa*". Otra protesta similar se realizó en la localidad de Tortugas, donde numerosos vecinos y comerciantes exigieron a los bancos la total normalización de las transferencias bancarias realizadas hacía un mes. Y por último, en la ciudad de San Jorge, un grupo de desocupados se reunió en la plaza San Martín para pedir que las autoridades tomen medidas concretas frente a la crisis.

También en Chaco se realizaron diversas protestas en distintos puntos de la provincia. Vecinos del Barrio Lamadrid, en la ciudad de Sáenz Peña, realizaron una presentación formal ante el Servicio de Agua y Mantenimiento –Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) solicitando una prórroga de noventa días para que no les cortasen el servicio de agua potable. En Castelli, representantes de diferentes sectores (la Cámara de Comercio de Castelli, el Movimiento de Desocupados Ernesto Sábató, la CCC, trabajadores de la carne, la Iglesia Evangélica y concejales locales) solicitaron al poder provincial asistencia alimentaria. De la misma manera, en la localidad de Las Breñas, continuó la protesta en reclamo de asistencia alimentaria y planes de trabajo iniciada el pasado lunes 7. Para distender la presión social, la Municipalidad continuó entregando bolsones con mercadería, tanto en la ciudad como en las zonas rurales. Por último, en Charata, los trabajadores municipales iniciaron un paro por la falta de pago del sueldo de diciembre y aguinaldos, mientras que los vecinos de la ciudad de San Bernardo se concentraron frente a la municipalidad y, a través de la "Comisión de Emergencia de Autoconvocados de San Bernardo", presentaron un petitorio solicitando ollas populares y planes de trabajo.

En Santiago del Estero, los empleados municipales recorrieron, desde el mediodía y hasta las 20 horas las casas de la familia del ex intendente José Zavalía quemando cubiertas, arrojando piedras y provocando destrozos en protesta por la mala administración y los sueldos impagos que dejó su gestión. Finalizando la jornada, una camioneta cuatro por cuatro se acercó a los manifestantes y efectuó disparos con armas de fuego que hirieron levemente a uno de los empleados municipales. Mientras tanto, Zavalía envió una carta pública a los medios de comunicación en la que anunciaba que rendiría cuentas de su gestión.

Viernes 11 de enero

El conflicto de los empleados municipales por el pago de sueldos atrasados continuaba siendo masivo en todo el país, aunque en algunas localidades comenzaba a apaciguarse ante la promesa o la efectivización de los haberes adeudados.

En la capital provincial de Santiago del Estero, los trabajadores municipales continuaron movilizándose en reclamo del pago de los haberes atrasados y el SUOEM informó que estaban estudiando la posibilidad de un paro total de actividades si no se respondía al reclamo. Además, un grupo de jubilados de la Agrupación 17 de Octubre cortó una de las principales avenidas de esta misma ciudad para solicitar a las autoridades provinciales el pago adeudado del sueldo anual complementario.

En Río Negro, mientras que los trabajadores municipales de Pilcaniyeu realizaron un cese de tareas en reclamo de sus sueldos adeudados desde octubre de 2001, en San Carlos de Bariloche el conflicto comenzó a destrabarse cuando comenzaron a pagarse los sueldos atrasados. Igualmente, el Centro Cívico fue escenario de una protesta de “madres cuidadoras” que trabajaban en los centros infantiles municipales y que reclamaban el cobro de su subsidio. Luego de varias horas de negociaciones obtuvieron la promesa de pago y pasado el mediodía se retiraron del lugar.

En San Martín de los Andes, Neuquén, el conflicto por sueldos atrasados entre los trabajadores municipales y el gobierno local pareció ingresar en una tregua una vez que la municipalidad prometió pagar los salarios adeudados. Con este compromiso, los trabajadores que aún mantenían la retención de servicios se comprometieron a recomenzar sus tareas.

Por otro lado, los gremios estatales enrolados en la CTA se movilizaron por las calles de la ciudad de Neuquén con el fin de rechazar las acusaciones de agresión hacia el administrador del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, Gerardo Hettinger. Además se pronunciaron contra el pago desdoblado de los salarios. A esta movilización se sumaron los trabajadores de Zanón reclamando la estatización de la empresa bajo supervisión obrera y los desocupados del Movimiento Barrios de Pie, que venían realizando una protesta ininterrumpida por planes sociales y alimentos en el centro de la ciudad capital. Por la tarde, al hacerse público las detenciones de varios dirigentes de la CTA, ésta y la ATE anunciaron un paro de actividades para el día siguiente y trescientas personas marcharon a los tribunales para exigir la libertad de los dirigentes detenidos.

En Viedma, Río Negro, casi medio millar de trabajadores de la UOCRA realizaron una ruidosa manifestación para denunciar la grave situación social y económica que atravesaban los trabajadores de la construcción. Reclamaron la reactivación de diversas obras públicas para que se generaran nuevos puestos de trabajo. Asimismo en Roca, unos doscientos cincuenta trabajadores marcharon en coordinación con los manifestantes de Viedma y, luego de negociaciones con los funcionarios locales, lograron un acuerdo que contempló la entrega de bolsones de alimentos, la reactivación de algunas obras públicas y suspender los intereses por mora en el pago de impuestos municipales.

La ciudad de Santa Fe se hacía eco de este tipo de reclamos: por un lado un grupo de desocupados se concentraron frente a la casa de gobierno para reclamar por la renovación de planes sociales que habían vencido a fin de año. Por otro lado, empleados del Sanatorio Americano afiliados a ATSA, protagonizaron otra ruidosa protesta frente a la sede del nosocomio reclamando por el pago de haberes atrasados y aguinaldo. El malestar por la crisis financiera se hizo escuchar en distintas localidades donde productores agropecuarios, comerciantes y autoridades políticas encabezaron ruidosas movilizaciones frente a los bancos para rechazar lo que denominaron “*la patria financiera*” y defender sistema productivo nacional. En la localidad de San Justo se movilizaron con maquinarias agrícolas, camiones y automóviles hasta la puerta de los bancos y entregaron un documento a dirigentes bancarios. La medida finalizó frente a la sucursal del Nuevo Banco Santa Fe con la entonación del Himno Nacional Argentino por parte de los manifestantes, que portaron un ataúd con una bandera argentina y una corona floral que decía: “*QEPD industria y comercio argentino*”. Tanto en Rosario como en Casilda, Cañada Rosquín, San Jorge, Carlos Pellegrini y El Trébol protestaron por el “corralito financiero” y la falta de financiación ante la morosidad frente a los bancos. Los manifestantes arrojaron huevos y quemaron neumáticos. En Los Molinos y Bigand, la masiva movilización de comerciantes y productores por las calles obligó suspender la actividad bancaria.

En la ciudad de Salta, los prestadores de la salud, tanto del sector público como privado, decidieron iniciar un paro por veinticuatro horas demandando al Instituto Provincial de Salud (IPS) el pago de la deuda. Además, se concentraron en la Plaza 9 de Julio y entre pancartas y batucadas, se movilizaron hasta las oficinas de la presidencia del IPS.

La emergencia social y alimentaria continuaba enunciándose en los reclamos de grupos de desocupados y vecinos de distintas ciudades del interior de país. Así en Cipolletti, Río Negro, la Coordinadora de Desocupados y la CCC marcharon hasta la municipalidad solicitando alimentos, planes de trabajo y el pago de los subsidios sociales atrasados. Lo mismo ocurría en Villa Berthet y Villa Angela en Chaco. En Corzuela, los desocupados que se movilizaron hasta la municipalidad, al no obtener ninguna respuesta, apedrearon la casa del intendente e intentaron saquear algunos supermercados. Sin embargo, esto fue impedido por efectivos policiales quienes detuvieron a siete personas.

En Paraná, Entre Ríos, los días de saqueos y la fuerte represión de mediados de diciembre, seguían siendo recordados por el MPA y la Multisectorial, que realizaron una masiva marcha hacia la Casa de Gobierno reclamando justicia por la muerte de tres personas ocurridas durante aquellos días. Al son de las cacerolas exigieron también la renuncia del gobernador Montiel, del ministro de Justicia y el jefe de Policía Provincial.

En la provincia de Mendoza, mientras que los Concejos Deliberantes de General San Martín y Junín ratificaron que sus concejales cobrarían quinientos pesos, en San Rafael con bombos, ollas y petardos, los vecinos y comerciantes autoconvocados marcharon hacia el palacio comunal gritando “¡Que se vayan!; ¡que renuncien!”; mientras solicitaban la eliminación de secretarios y asesores, el uso de celulares, viáticos, la rebaja en las dietas y demás gastos públicos. En cambio, en la localidad de Rivadavia los concejales se adelantaron a la protesta y bajaron sus honorarios a quinientos pesos un día antes del anunciado cacerolazo. Sin embargo al mediodía, más de mil personas llegaron hasta la Comuna y exigieron que el presupuesto del Concejo Deliberante no fuera superior a los doscientos mil pesos.

Por la noche, al igual que en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, en el mástil mayor de Resistencia, Chaco, y en la ciudad de Frías de Santiago del Estero volvió a sentirse el cacerolazo contra el Gobierno Provincial, los ministros de Justicia y las políticas económicas en general. En Frías, el cacerolazo fue convocado por el MODEFRI en el que participaron más de medio centenar de personas que protestaron por el aumento de precios indiscriminado y por la situación económica en general. También en la localidad de San Jorge, Santa Fe, marcharon con sus cacerolas alrededor de quinientas personas por las calles céntricas, en protesta por la situación política, económica y social que atravesaba el país.

En varias localidades de la provincia de Tucumán sonaron los “cacerolazos de los viernes”. Los pobladores de Banda del Río Salí volvieron a manifestarse ruidosamente frente a la casa del intendente, Víctor A. Lossi, reclamando la reducción de todas las tasas que pesaban sobre los servicios públicos. En el departamento de Cruz Alta se produjeron en dos comunas, manifestaciones de vecinos. En una de ellas, El Bracho, se produjo la quema de la sede de gobierno de la Comuna, aunque los vecinos dijeron no haber sido ellos, sino que se había tratado de una maniobra política. Por otra parte, alrededor de doscientas personas convocadas por la Multisectorial conformada por ONG’S, gremios y vecinos autoconvocados de Aguijares, se movilizaron en reclamo de asistencia social para la zona. La asamblea popular del pueblo de Los Ralos confeccionó un petitorio en el que planteaban el abandono en materia social, laboral y económica en que se encontraba la localidad.

Sábado 12 de enero

En la provincia de Mendoza los políticos seguían siendo asediados. El diputado nacional Víctor Fayad fue “escrachado” entre cacerolas, silbato y aplausos en la peatonal de la capital. La bronca de la gente fue tomando fuerza. Un hombre se paró frente a la mesa del bar donde se encontraba el

diputado, lo increpó y hasta llegó a darle un puñetazo al concejal Guillermo Yazlli, que se había acercado a solidarizarse con Fayad. A su vez, una familia local de apellido Barbera decidió impedir el ingreso a los políticos a su restaurante “La Marchigiana” hasta que no cumplieran con el pago de los subsidios a los comedores infantiles. El dueño explicó que *“La idea es generar mayor participación ciudadana para que cambie el sistema. Hasta que se respete el derecho a la alimentación de la infancia no les servimos a políticos”*. El original método de protesta repercutió favorablemente entre la gente que se acercaba para solidarizarse con la decisión.

El llamado al diálogo social

Lunes 14 de enero

Por la noche el presidente Eduardo Duhalde, acompañado por representantes de la Iglesia, convocó al llamado Diálogo Social Argentino con el objetivo de conformar un espacio de concertación entre sectores sindicales, sociales, empresariales y eclesiásticos. En un discurso transmitido por la Cadena Nacional de Radiodifusión el presidente afirmó que no sería candidato presidencial en las próximas elecciones y que tenía el objetivo de *“poder convocar a todos los argentinos a la tarea seria y disciplinada de reconstruir los fundamentos de trabajo, justicia, creatividad y voluntad de ser, que hicieran de nuestra Argentina un país mundialmente respetado y admirado. Ambiciono poder entregar en el año 2003, junto con los símbolos de la Patria, una realidad mejor encaminada”*.

En Santiago del Estero nuevamente se reclamaron sueldos atrasados aunque esta vez fueron los profesores universitarios agrupados en la ADUNSE que se plegaron al paro dispuesto por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) en reclamo de la devolución del trece por ciento del salario descontado desde el año pasado por el Gobierno Nacional.

Un numeroso grupo de desocupados de veinte barrios marginales de la ciudad de Santa Fe protestó en las puertas de la Secretaría de Trabajo y entregaron un documento reclamando la falta de respuesta con respecto a la renovación de los planes. Además solicitaron bolsones de alimentos y que se los consultara a la hora de diseñar políticas para reducir la desocupación. Mientras que en Santa Fe la jornada se realizó en paz, los desocupados de Chaco no corrieron con la misma suerte. En La Clotilde y en Tres Isletas se produjeron estallidos cuando los desocupados se movilizaron a la Municipalidad reclamando por puestos de trabajo. La acción represiva de la Policía provincial provocó numerosos heridos y detenidos. En Resistencia la concentración de varios movimientos de desocupados frente a la Casa de Gobierno

reclamando alimentos y planes de trabajo también fue reprimida. En La Tígra, frente a la situación crítica que se desarrollaba en los otros puntos de la provincia, los concejales resolvieron donar dos meses de las propias dietas para fines sociales.

En Entre Ríos prosiguieron las manifestaciones contra el sector financiero. La Multisectorial de Chajarí se movilizó frente a los bancos Suquía, Nación, Bersa y Hederás. En Villaguay los comerciantes realizaron un cacerolazo frente a la sede de los bancos Hederás, Nación y Bersa para que se acepte el cien por ciento del pago de las facturas de servicios y las obligaciones bancarias en bonos federales.

La cruci-ficción

Martes 15 de enero

En las rutas de la provincia de Jujuy se contabilizaron hasta ocho cortes de ruta realizados por desocupados de las localidades de Tilcara, San Pedro y San Salvador de Jujuy. En un documento elaborado por los manifestantes se expresaban las siguientes demandas: reclamos por necesidades básicas insatisfechas, la solicitud de planes sociales, repudio a las ganancias de las empresas privatizadas, pedidos de normalización de los terrenos donde hay asentamientos, condonación de las deudas de los pequeños y medianos productores (azucareros y tabacaleros) y contra las causas judiciales que tenía el dirigente Carlos Santillán. También, en La Quiaca más de doscientas personas se registraron para “Crucificarse” a postes de luz y teléfono, pidiendo rebaja en el presupuesto legislativo y la implementación de planes de empleo.

Jujuy permaneció convulsionada durante toda la jornada porque además de estas protestas, en la ciudad de Palpalá, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) solicitó al intendente concretar las recategorizaciones acordadas pero no efectivizadas. Los gremios de trabajadores estatales convocaron para una marcha y cacerolazo en la capital de la provincia. En esta movilización no sólo se exigió el pago de salarios adeudados sino que se expresó el rechazo al rumbo económico y se repudió a todos los “*funcionarios, legisladores y grupos económicos concentrados*”. Se recorrió la ciudad registrándose destrozos en entidades bancarias (Citibank, Banco Macro y Boston Bank) y en la Empresa Jujeña de Energía. La Policía, por orden expresa de las autoridades, no reprimió. La marcha culminó con un acto frente a la Casa de Gobierno donde los oradores –entre ellos Carlos Santillán que venía de recorrer los diferentes cortes de ruta– expresaron el repudio a los políticos, pidiendo “*que se vayan todos*”, y haciendo un llamamiento “*a seguir luchando en unidad*”. A la tarde se realizó un cacerolazo en la ciudad

de San Pedro donde se exigió a los comercios mayoristas y supermercados no continuar con la remarcación de precios a los productos de la canasta básica.

Los empleados municipales de la capital provincial de Santiago del Estero volvieron a manifestarse quemando residuos en las puertas de la sede comunal en el marco de las protestas que venían realizando por la falta de pago de los haberes desde octubre. También los vecinos de Añatuya se hicieron oír con cacerolas repudiando a los comerciantes que remarcaron excesivamente los precios.

En el marco de la crisis en la prestación de servicios de salud municipal, vecinos de Los Boulevares, Córdoba, cortaron la calle para que les renueven los contratos a todos los médicos y en reclamo de insumos y de mejores servicios. Médicos, enfermeros, vecinos y hasta familiares de pacientes, ocuparon cinco dispensarios. Por la misma causa los hospitales Infantil y de Urgencias fueron tomados pacíficamente. En uno de los dispensarios los vecinos instalaron una olla popular y en otro realizaron una asamblea abierta que decidió tomar el hospital y cortar las calles que lo circundan. La secretaria de Salud de la Municipalidad, Haydé Giri, consideró que *“la actual situación que viven los establecimientos municipales excederá el estricto marco de la salud, para insertarse en un conflicto gremial más amplio”*. También Carlos Mercado, director de Atención Primaria de la Salud, expresó: *“Hay inconvenientes, pero estas dificultades se enmarcan en el contexto de crisis nacional y local”*.

La falta de medicamentos en los centros de salud y la falta de pago al personal de la empresa de limpieza en el hospital Teodoro Schestakow llevaron a que unos ciento cincuenta vecinos de San Rafael, Mendoza, reclamaran la aplicación urgente de medidas para solucionar la crisis sanitaria.

Por su parte los trabajadores de la Cooperativa Láctea Sancor iniciaron un paro de actividades en rechazo a las rebajas salariales ordenadas por la empresa. En la casa central de Sancor, ubicada en la ciudad de Sunchales, Santa Fe, dirigentes de Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) organizaron una movilización que impidió que el personal ingresara a la planta. Hubo aislados incidentes entre quienes querían trabajar y los sindicalistas que pedían respeto por la medida de fuerza que fue planteada por tiempo indeterminado.

En la capital chaqueña de Resistencia, mientras que los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidieron permanecer en asamblea permanente y paro por la falta de pago de haberes adeudados, la Agrupación de Desocupados 17 de Julio cortó el tránsito frente al edificio de la Gerencia de Empleos reclamando participar en la distribución de los planes.

En San Miguel de Tucumán se congregaron desocupados de distintas localidades de la provincia para gestionar ante la Empresa de Distribución

Eléctrica de Tucumán (EDET) que se les reconecte el servicio de electricidad. Además se trasladaron a la delegación del PAMI donde reclamaron la reactivación de la obra social de los jubilados y luego se instalaron en la Plaza Independencia mientras una delegación de quince personas fue recibida por el secretario general de la Gobernación, Cúneo Vergés. La movilización fue encabezada por una enorme pancarta que tenía escrita sólo una palabra: *Hambre*.

En la provincia de Salta, un grupo de doscientas personas de Aguaray, entre ellos ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y mujeres desocupadas, ocuparon las instalaciones de una planta de la empresa petrolera Refinor por más de 8 horas, exigiendo el pago de las acciones que les pertenecían por la venta de YPF. Además solicitaron a las autoridades de la empresa apoyo en la gestión de un extenso petitorio de veintiocho puntos que presentarían ante el Gobierno Provincial en el cual reclamaban entre otras cosas, fuentes de trabajo y la prestación de los servicios auxiliares del petróleo en la zona.

El malestar también se hizo sentir fuertemente en la provincia de Santa Fe. No sólo en la ciudad de Santa Fe se escucharon las cacerolas frente al Banco Nación, sino que los bancos de 40 localidades del sur de la provincia, entre ellas San José de la Esquina, Alcorta, Sanford, Chabás, Máximo Paz, Roldán y Los Molinos, también sufrieron los huevazos y tomatazos. En Casilda una movilización que había comenzado pacíficamente con la participación de aproximadamente siete mil personas terminó con un saldo de quince heridos y diecisiete detenidos. La caravana había partido a las 9 de la mañana, con la participación del intendente Rosconi, la mayoría de los concejales, los sectores productivos y de trabajo, en el marco de una protesta general organizada en localidades de ocho departamentos del sur santafesino contra el sistema bancario. Si bien hubo presencia policial, ésta no pudo impedir que los manifestantes atacaran a pedradas cinco entidades crediticias e incendiaran las sedes de Aguas Provinciales, Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Administración Provincial de Impuestos (API). Periodistas y otros comentaristas coincidían en que la marcha fue la más importante en la historia local.

Por su parte en la provincia de Mendoza, mientras que todos los partidos políticos acordaron con el gobernador Roberto Iglesias ponerle un tope a los salarios políticos redactando el proyecto de una nueva Ley General de Sueldos, que el Gobierno enviaría a la Legislatura para que tenga un tratamiento inmediato, cientos de personas cortaron la avenida San Martín de la capital mendocina para alzar su reclamo contra la clase política, el sistema judicial y el “corralito financiero”. La concurrencia representó sectores de la pequeña y mediana empresa que se manifestó con banderas argentinas, entonando el Himno Nacional. Ante la presión popular, en San Rafael, Maipú y Santa

Rosa los concejales e intendentes decidieron rebajar sus dietas para evitar posibles puebladas. Igualmente por la noche, unas trescientas personas se agolparon frente al edificio municipal de San Rafael en reclamo del achique del gasto público y la rebaja salarial para los concejales.

Todos protestan

Miércoles 16 de enero

El conflicto entre los trabajadores municipales y el gobierno por el atraso en el pago de los sueldos seguía extendiéndose por las distintas regiones del país. En la capital provincial de Santiago del Estero, mientras los empleados municipales se manifestaban frente a la Municipalidad, un grupo pequeño de manifestantes ingresó al edificio de Rentas y quemó documentación en señal de protesta por los sueldos atrasados. Al mismo tiempo, en La Banda los trabajadores decidieron iniciar un paro y responsabilizaron al Gobierno Nacional por el retraso.

En Santa Fe, los empleados municipales de Reconquista que mantenían la toma de la dependencia de Servicios Públicos de la Municipalidad y la olla popular a la entrada del corralón, cortaron durante la jornada la Ruta Nacional N° 11 en reclamo del pago de los salarios atrasados. A la vez, el Consejo Directivo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) informó que en quince municipalidades el personal había paralizado sus actividades ya que todos los municipios estaban retrasados en el pago a sus empleados.

En Mendoza los trabajadores de servicios públicos del municipio de Godoy Cruz se encontraban de paro por el retraso en el pago de los salarios. Ante la falta de respuesta, un grupo de trabajadores intentó volcar los residuos frente a la municipalidad, pero fueron detenidos por la policía que les disparaba balazos de goma de la Policía. Resultó herida una persona y hubo cinco detenidos. Por otro lado, en la capital, mientras que alrededor de 100 empleados estatales se reunían en la Legislatura para reclamar que se agilizará el pago de haberes de diciembre, los empleados de Metro, en una ruidosa protesta, manifestaron su descontento por no haber cobrado aún los sueldos correspondientes a noviembre, diciembre y el aguinaldo. También unos cuatrocientos empleados del área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Luján llevaron adelante una medida de fuerza hasta que la comuna les cancelara el sueldo de diciembre.

En Neuquén, los gremios estatales enrolados en la CTA se movilizaron para exigir la libertad de los dirigentes de ATE que habían sido detenidos días atrás. A la protesta, primero frente a los tribunales provinciales y luego frente

a la Casa de Gobierno neuquina, se sumaron organizaciones de desocupados, de Derechos Humanos y partidos políticos de izquierda. Además recolectaron firmas para pedir la liberación de los dirigentes e impulsar un pedido de juicio político contra el gobernador. La Pastoral de la Iglesia Católica local también pidió en un comunicado, por la libertad de los detenidos.



El gremio municipal SUOEM de Córdoba decidió continuar con la retención de servicios por lo menos dos días más, realizando asambleas dispuestas por cada repartición. También los médicos, enfermeros y vecinos de distintas zonas de la ciudad de Córdoba, por lo general de barrios humildes, volvieron a tomar los centros barriales de salud de la Municipalidad en protesta por la carencia de insumos, la falta de mantenimiento del equipamiento y los problemas de atención médica. Fueron al menos veinticinco los centros de

salud paralizados en toda la ciudad. En uno de los dispensarios los vecinos realizaron una olla popular y conformaron una comisión para intentar dialogar con las autoridades. Continuaban en tanto las tomas pacíficas en los hospitales Infantil y de Urgencia. Además, alrededor de cien docentes, que fueron jubilados compulsivamente por el Ejecutivo provincial en el marco del ajuste, protestaron frente a la Casa de Gobierno en reclamo de la revisión de la medida, ya que querían volver a las aulas.

En la ciudad de Salta los prestadores de la salud volvían a movilizarse hacia la sede del IPS reclamando por el pago de lo adeudado.

Los trabajadores de la empresa Sancor recrudecieron sus medidas de lucha y tomaron la planta de Balnearia en la provincia de Córdoba, impidiendo el ingreso de los camiones con leche recogida de los tambos de Balnearia, Marull y Miramar. En Sunchales donde se encuentra la casa central, los trabajadores directamente prohibieron la entrada a la planta a los integrantes de la administración central.

Frente al problema de la deuda salarial, los trabajadores de distintas empresas de transporte público de la ciudad de Santiago del Estero y La Banda realizaron por la tarde un paro de actividades.

Las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional en materia bancaria, llevaron a que la Unión Obrera Metalúrgica, seccional de Córdoba, reclamara a la Secretaría de Industria de la Nación medidas urgentes para permitir que Tubos Transelectric pudiera concretar operaciones en los bancos para adquirir materiales en el exterior. Por su parte, pequeños y medianos empresarios protestaron contra las medidas económicas del Gobierno Nacional por el centro de la ciudad de Córdoba, en plena zona bancaria, recibiendo el apoyo de muchos transeúntes que se adherían con aplausos.

En Santa Rosa de Calamuchita alrededor de trescientos comerciantes locales se movilizaron por la aparición de inspectores de la Dirección General de Rentas de la Provincia que iniciaron inspecciones. *“Justo en verano, la única época en que esto se mueve un poco, aparecen. No es momento para esta presión”*, reclamaban los comerciantes. Algunos de ellos acordaron que cuando un inspector se hiciera presente en un local, los de su cuadra harían una especie de escrache en su frente, y que no se entregaría documentación alguna.

En Santa Fe, por segundo día consecutivo, los ahorristas del Banco Nación protagonizaron otra protesta con cacerolas, maracas, etc. y llevaron un escribano público con quien labraron un acta para dejar constancia de que el banco no les entregaba sus ahorros. A la vez, en Villaguay, Entre Ríos, los comerciantes volvieron a realizar un cacerolazo frente a los bancos Hederás, Nación y Bersa, para que se acepte el cien por ciento del pago de las facturas de servicios y las obligaciones bancarias en Bonos Federales.

Los comerciantes de Paraná también realizaron un cacerolazo frente a bancos y domicilios de los funcionarios de la Caja de Conversión reclamando por “*una buena y honesta administración de la Caja de Conversión*”. Tanto los vecinos como los taxistas se adhirieron al reclamo a través de bocinazos y aplausos. A la vez, los desocupados del Barrio Belgrano se concentraron en las oficinas de Acción Social reclamando por planes sociales. Si bien se hicieron presentes efectivos policiales, no se registraron incidentes. Los desocupados fueron anotados en una lista para tenerlos en cuenta cuando desde el Gobierno Nacional comenzara a hacerse efectivo el proyecto de creación de un millón de puestos de trabajo.

Mientras tanto, en la provincia de Jujuy permanecían seis rutas bloqueadas por distintos grupos de desocupados que solicitaban planes sociales.

Los vecinos de la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, se reunieron en asamblea para consensuar estrategias en forma inmediata para paliar la crisis. Entre sus demandas más urgentes estaban los planes de empleo y la entrega de alimentos.

Más de quinientos vecinos de barrios populares, en la ciudad de Santiago del Estero, se agolparon en las puertas de la sede de la Cruz Roja cuando supieron que se entregarían bolsones de mercadería.

Por su parte en varios municipios de la zona de Berrotarán, Córdoba, los intendentes reclamaron a las autoridades provinciales y nacionales por la demora en el envío de bolsones de alimentos y denunciaron que se habían enviado alimentos para asistir a las ciudades y no a los pueblos más pequeños. En la localidad de Alta Gracia, alrededor de trescientos vecinos de todos los estratos sociales, desde comerciantes hasta desocupados, marcharon con sus cacerolas para reclamar alimentos y protestar por la situación de asfixia económica a raíz del corralito.

En la ciudad de Concordia, Entre Ríos, también se escucharon las cacerolas cuando los vecinos se manifestaron en la plaza principal exigiendo la aceptación de los federales, la regularización de los sueldos adeudados y la normalización de las obras sociales suspendidas.

El cuestionamiento a la clase política y la crítica situación económica, tuvo sus repercusiones en Sáenz Peña, Chaco, donde se produjo una caravana de protesta en la que participaron la Unión de Campesinos Poriajhú, la ATECH, movimientos de desocupados y dirigentes aborígenes en contra del modelo económico. Además enviaron un petitorio a la Cámara de Diputados Provincial, al que adhirió el intendente, solicitando la donación de los sueldos de los legisladores y funcionarios para asistencia social.

En la provincia de Mendoza, luego de varias horas de discusión fue aprobada la Ley General de Sueldos que establecía un tope en las dietas del gobernador, sus ministros, los legisladores y los funcionarios políticos, dejando afuera del ajuste a los intendentes y concejales. Por esta razón, en

la Municipalidad de Maipú se congregaron vecinos, desocupados y comerciantes para exigirle al cuerpo deliberativo que se adhiriera a la nueva Ley de Sueldos. Al final de un acalorado debate acordaron que cada concejal cobraría seiscientos ochenta pesos en lugar de mil ochocientos pesos.

Una vez más: Qué se vayan todos

Jueves 17 de enero

La incertidumbre respecto de la crisis financiera y el conflicto por la devolución de los depósitos iba en aumento, inquietando a la clase política preocupada por la efervescencia de la protesta social. El presidente Duhalde explicó públicamente que si bien los depósitos no iban a poder ser devueltos en su moneda original tal como había prometido en su discurso de asunción, se iba a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los mismos. Las protestas continúan en todo el país.

En la provincia de Santa Fe se realizaron varias movilizaciones cuestionando las políticas económicas y financieras que se siguieron implementando ante un escenario cada vez más crítico en el orden político, social y económico. En la localidad de Esperanza se realizó un cacerolazo. Los sectores productivos, vecinos, comerciantes y empresarios se manifestaron frente a las siete sucursales bancarias de la ciudad. Dieron lectura a un documento al pie del Monumento al Agricultor que reclamaba por la crisis terminal de la producción a raíz de las políticas económicas que se venían aplicando en el país. En las pancartas se podían leer duras críticas contra los políticos, la corrupción y el ex presidente Carlos Menem. En Rosario se realizó una movilización en la que participaron productores y comerciantes del sur provincial y militantes de la CCC. Al pasar por las entidades bancarias los manifestantes vociferaban insultos y la consigna “*que se vayan todos, que no quede ni uno solo*”. En la capital santafesina alrededor de quinientas personas, en su mayoría desocupados, se movilizaron por las calles del centro para reclamar puestos de trabajo y el cobro de planes sociales, a la vez que se solidarizaron con los ahorristas tras repudiar las trabas en las operaciones financieras. Las protestas más numerosas en los últimos días se concentraron frente al Banco Nación y la Municipalidad, donde se quemaron banderas y afiches con la imagen del presidente Eduardo Duhalde.

Tanto en la ciudad de Mendoza como en Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo y otras localidades del Gran Mendoza, sonaron las cacerolas en protesta contra el “corralito financiero” y el gasto político. No sólo solicitaban la renuncia de algunos funcionarios provinciales y jueces sino que también reclamaban el llamado a elecciones nacionales para elegir un nuevo

presidente. Al mismo tiempo, los vecinos de Tunuyán se concentraron frente al municipio reclamando por el achique del gasto político y la rebaja de los sueldos de los concejales.

En Entre Ríos las protestas del día se caracterizaron por hacer pública la crítica situación que estaban atravesando los distintos sectores de la sociedad y la necesidad de soluciones urgentes ante la crisis económica. En Paraná, los transportistas se movilizaron hasta la casa de gobierno para exigir la pesificación de todos los créditos contraídos por el sector, la flexibilización de las restricciones a la disponibilidad de los depósitos bancarios, la rebaja de los peajes del túnel subfluvial que une esa ciudad con Santa Fe, y la aceptación de los Bonos Federales como pago al cien por ciento de su valor nominal. Por otro lado, los desocupados de la CCC se concentraron frente a la Secretaría de Trabajo reclamando la urgente puesta en vigencia de los programas laborales nacionales y provinciales. Luego se trasladaron a Tribunales para pedir por el esclarecimiento de la muerte de un integrante de la CCC ocurrida durante los saqueos del 19 y 20 y por último, se dirigieron al Ministerio de Acción Social para solicitar la entrega de bolsones de alimentos.

Los comerciantes de Concordia realizaron un cacerolazo frente a los bancos contra el sistema financiero. En los vidrios de los bancos fueron pegados autoadhesivos que simulaban ser fajas de clausura en los que se leía “*Cerrado por vaciamiento*”. Cuando los comerciantes se dirigieron hacia el domicilio del senador nacional Busti (dos veces intendente y ex-gobernador) para realizar un escrache, un grupo de personas cercanas al senador impidió que se concrete la protesta. Se dirigieron entonces a la Municipalidad, donde entonaron el Himno Nacional y se desconcentraron. En Basavilbaso, luego de realizar una reunión multitudinaria en la plaza principal en la que participaron productores agropecuarios, transportistas, empleados estatales, jubilados y vecinos, se produjo una “pueblada” que impidió el normal funcionamiento de los Bancos Nación y Bersa, en la que reclamaban que estas entidades bancarias no acataran la Ley de Emergencia Provincial. Además se cortaron las principales calles de la ciudad con tractores e instrumentos de trabajo y se incendiaron neumáticos. Los manifestantes elaboraron un comunicado en el que expresaron el malestar con la dirigencia política. A su vez en la ciudad de Federal, los distintos sectores de la comunidad se reunieron espontáneamente en asamblea y redactaron una nota en la que hacían un fuerte llamado de atención a toda la dirigencia política, gremial y empresarial, tanto en el orden nacional como provincial y local, declarando en estado de emergencia financiera y fiscal a la localidad. Asimismo, solicitaron la urgente normalización del sector de la salud provincial y del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), el pago de sueldos adeudados a los empleados estatales, el cumplimiento de la Ley de Emergencia, la devolución de

los depósitos bancarios y la creación de una red de emergencia alimentaria con las dietas de los políticos.

Al igual que en la ciudad de Paraná, en San Miguel de Tucumán y en Córdoba capital los empresarios camioneros marcharon por las zonas céntricas contra las restricciones financieras y en reclamo de la pesificación de todos los créditos contraídos por el sector transportista de cargas.

En la localidad de Hernando, Córdoba, se realizó una movilización contra el sistema bancario en la que participaron alrededor de mil quinientas personas. Si bien la iniciativa partió de los comerciantes, recibió el apoyo de casi todas las instituciones locales y de numerosos vecinos. El diario afirmó que nunca se había realizado una marcha con tanta concurrencia en esa ciudad de diez mil habitantes. En la localidad de Río Tercero, el Centro Comercial Industrial y de Servicios invitó a comerciantes locales y de la región a cerrar por quince minutos las puertas de sus negocios para protestar por las medidas económicas que habían derivado en el “corralito financiero” y que afectaban al sector empresario. A su vez, en la localidad de Villa María un grupo de desocupados realizó una marcha y se concentró en la Plaza Independencia, frente a la Municipalidad, para reclamar puestos de trabajo y transparencia en el otorgamiento de los mismos. Los manifestantes invitaron a los desocupados y subocupados de Villa María a concentrarse permanentemente en la que dieron en llamar “*la plaza del aguante*”.

Mientras tanto en Jujuy, los cortes de ruta de los desocupados se profundizaban. La CCC dio a conocer un petitorio con 4 puntos:

1. pago de los proyectos adeudados;
2. renovación de planes nacionales y provinciales;
3. requerimiento de más puestos de trabajo; y
4. bolsones de mercadería para los más necesitados.

En La Quiaca con una masiva concurrencia se llevó a cabo nuevamente una crucifixión, pero esta vez fue el sacerdote Jesús Olmedo quien se crucificó en un poste de alumbrado, exhortando a la clase política a no robar a los pobres.

En el Chaco, los desocupados de la Agrupación 10 de enero de Santa Sylvina también se movilizaron hacia el municipio solicitando medicamentos, alimentos y trabajo. Por otro lado, mientras que los trabajadores de SAMEEP de Resistencia decidieron iniciar un paro por el pago de haberes atrasados, el personal de los hospitales de San Salvador de Jujuy protestó y entregó un petitorio a las autoridades sanitarias para denunciar irregularidades en la gestión y pedir el pago de salarios adeudados.

En la ciudad de Córdoba los operarios de la fábrica Pistones Persan continuaban con la toma pacífica de la planta. En San Miguel de Tucumán la asamblea general de profesionales se reunió en el Colegio de Graduados en

Ciencias Económicas bajo la consigna “*no permanecemos ajenos a la crisis, porque la patria sí nos interesa*” y crearon la “Comisión Permanente de Entidades Profesionales de Tucumán”, compuesta por más de veinte colegios de la provincia.

En el sur del país, con la participación de vecinos, trabajadores estatales, comerciantes y productores rurales se realizó otro cacerolazo en la ciudad de General Roca donde se manifestaron contra el “corralito financiero” y reclamaron que el gobernador Pablo Verani “*de un paso al costado*”. También hubo reclamos contra la política económica y social nacional y provincial, y pedidos de mayor presupuesto para la salud y la educación pública. Al mismo tiempo en otras ciudades rionegrinas también se realizaron cacerolazos. En Cipolletti participaron más de quinientas personas reclamando justicia frente a los crímenes impunes, además de las demandas similares a las del cacerolazo de General Roca. En Villa Regina participaron unas doscientas cincuenta personas y el reclamo que resaltó fue el de precio sostén para la fruta y soluciones para la crisis de producción frutícola de la zona. En Luis Beltrán, Cinco Saltos y Allen se manifestaron alrededor de cien vecinos en cada localidad con reclamos similares.

Viernes 18 de enero

La provincia de Jujuy amaneció con dieciocho cortes de ruta. El que se realizó en la capital provincial congregó a distintos sectores como la CCC, la ADEP, los Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), Centro de Estudiantes Universitarios, Movimiento Sin Trabajo, la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), la ATSA, el MST, colegios de profesionales, el SEOM, etc., y sus dirigentes plantearon la necesidad de construir la “*unidad popular*” para terminar con las políticas que favorecieron a los grupos económicos (empresas privatizadas, Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), bancos, etc.). El acto finalizó con una movilización hacia el municipio donde se solicitó la rescisión del contrato con SETRANOR (empresa que tenía la concesión del servicio de estacionamiento tarifado).

En La Quiaca en el segundo día de las crucifixiones de los desocupados, se realizó un cacerolazo que concluyó con ataques a las viviendas de funcionarios y concejales, llegándose a tomar el edificio municipal. El Gobierno Provincial decidió enviar efectivos desde la capital y esa misma noche se realizó una “*caza de brujas*” contra los supuestos responsables de los disturbios, provocando numerosos detenidos y heridos. A su vez, en San Pedro desde el día anterior se venían realizando marchas bajo la consigna “*por una vida digna*”, protagonizadas fundamentalmente por dos corrientes de desocupados: Frente Barrial y Comisión Provincial de Desocupados. La jornada

concluyó con denuncias de agresiones por parte de Gendarmería a dirigentes y desocupados que cortaban rutas, de “aprietes” de la Policía y el rechazo a las causas que se les iniciaron a dirigentes sindicales con motivo de los incidentes del 15 de este mes.

También en Entre Ríos, el Comité Gualeguay en Emergencia decidió cortar la Ruta N° 12 por el término de tres horas para reclamar por el incumplimiento de las obligaciones del Estado Provincial, el atraso salarial de los trabajadores estatales, la grave situación de la salud pública y la obra social IOSPER y la problemática por la que atravesaban la mayoría de los trabajadores privados y comerciantes que estaban recibiendo Federales y no tenían posibilidad de saldar sus deudas con esta moneda. En el corte participaron todos los sectores sociales de Gualeguay.

En varias localidades de la provincia cordobesa los empresarios, gerentes, camioneros y empleados de diferentes industrias de la alimentación realizaron una protesta conjunta en defensa de su producción y fuentes de trabajo. En Río Cuarto, los manifestantes ocuparon pacíficamente las Rutas N° 8 y N° 36 y repartieron volantes a los vehículos que circulaban por el lugar. Mientras que en la capital, la protesta alcanzó las plantas de Pritty, Vanoli, Porta y Café Vélez, en Arroyito la mayor concentración se registró en la fábrica de Dulzor, y Arcor adhirió con un cese de las operaciones externas. En Cruz del Eje el Centro Comercial e Industrial se plegó al reclamo. A la vez, varias entidades empresarias cordobesas presentaron un petitorio donde criticaban fuertemente a la clase política y pidieron una baja del gasto político y pesificación total.

Preocupados por la forma en que iban a ser repartidos los planes sociales otorgados por el Gobierno Nacional, los desocupados de Resistencia, Chaco, se movilizaron hasta la Casa de Gobierno exigiendo participar en la distribución de planes de trabajo y mercaderías. Con esta misma preocupación los vecinos y el ex intendente de Napenay irrumpieron en el municipio cuando se realizaba una reunión para la conformación del Comité de Emergencia o Comisión de Solidaridad, y solicitaron que se retiraran algunos de los asistentes.

También en la ciudad de Santa Fe los desocupados se manifestaron masivamente frente a la Casa de Gobierno a la espera de algún contacto con funcionarios de la cartera laboral. Lograron reunirse con el secretario de trabajo Oscar Ercoli quien exclamó: *“la clase política ya no camina, se arrastra”*. Además insultaron y quemaron basura y cubiertas frente al local del Citibank.

La distribución de los planes sociales también inquietaba a los vecinos de Maipú, Mendoza, que se reunieron con el intendente para entregarle un petitorio donde se solicitaba la reducción de las dietas de los concejales y sueldos de funcionarios, control de los vecinos de la entrega de los planes

sociales que llegaran al departamento, apoyo a comerciantes, empresarios y productores afectados por la crisis.

En la ciudad santafesina de Reconquista, se desarrolló en forma pacífica y ordenada una caravana por la Ruta Nacional N° 11, que une las localidades de Reconquista y Avellaneda, bajo la consigna “*Paren de robarnos*”. La caravana de más de 10 km. fue convocada por distintos sectores de la producción, el comercio y servicios que acudían con sus vehículos y envueltos en banderas argentinas entonaban cánticos contra los bancos y exigían un cambio de política económica a las autoridades nacionales. Numerosos comercios con sus puertas semicerradas y familias desde las veredas adhirieron con sus cacerolas a la manifestación.



Por otro lado, los pobladores de la localidad de Elisa se concentraron frente al Nuevo Banco de Santa Fe para entregarle al gerente un documento elaborado durante una asamblea donde exigían el cierre de la sucursal hasta que se regularizara la actividad bancaria.

En Entre Ríos, los comerciantes de Villaguay volvieron a realizar un cacerolazo frente a la sede de Hederás, Banco Nación y Bersa para que se aceptara el cien por ciento del pago de las facturas de servicios y las obligaciones bancarias en Bonos Federales. Al mismo tiempo, en la localidad de Crespo, el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Crespo, el Sindicato de la Carne, Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Sindicato Molinero, Unión Obreros y Empleados Municipales,

Asociación Empleados de Comercio, Asociación Crespo Capital de la Avicultura y demás instituciones y empresas privadas de la ciudad, con el apoyo de la Municipalidad, realizaron un cacerolazo exigiendo un cambio de rumbo en la política económica provincial y nacional.

Ante la situación de emergencia económica, la provincia de Córdoba fue conmovida por cacerolazos que terminaron en forma violenta. Por un lado, en distintos barrios de la ciudad de Córdoba vecinos y empleados municipales manifestaron con sus cacerolas y pidieron la renuncia del intendente Germán Kammerath. También protestaban contra los políticos y las entidades bancarias, al igual que todo el país. Si bien participaron muchos vecinos, la convocatoria estuvo motorizada por empleados municipales que mantenían un conflicto con el Intendente de la ciudad. En una de las plazas, en la que se estaba realizando la protesta, llegó un grupo que se autoproclamó como “*peronista*” y en forma violenta produjo la desconcentración de la manifestación.

En Río Cuarto se realizó una manifestación convocada por el Centro Empresario y por comerciantes quienes marcharon junto a sus familias hasta la sede del Concejo Deliberante para pedir la reducción de los gastos políticos (dietas y viáticos) y de la cantidad de concejales y asesores, entre otros reclamos. La marcha congregó a dos mil personas y luego de la entrega de un petitorio comenzaron los disturbios cuando un grupo de manifestantes que comenzó a arrojar proyectiles contra el edificio se enfrentó con la Policía. La marcha siguió hacia los domicilios particulares del diputado nacional justicialista Humberto Roggero y el legislador provincial Gumersindo Alonso. Ambas viviendas fueron atacadas con piedras y bombas de alquitrán. También sufrieron daños varias entidades bancarias. El saldo fue de trece detenidos y tres heridos.

Como el conflicto salarial se mantenía, los trabajadores municipales de la ciudad de Santiago del Estero continuaron manifestándose frente a la Comuna pero esta vez se registraron importantes disturbios cuando la Policía reprimió ferozmente. Hubo cuatro manifestantes detenidos y más de veinte heridos entre municipales y policías.

En Neuquén los dirigentes estatales volvieron a convocar a una marcha en la que participaron más de tres mil personas, para exigir la liberación de los dirigentes estatales detenidos. Junto a ellos marcharon representantes de organismos de Derechos Humanos (como Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), el sindicato de ceramistas neuquinos, diputados del Partido Justicialista y el Polo Social, así como organizaciones de desocupados. Por su parte el Obispado neuquino emitió un comunicado desautorizando las expresiones de la Pastoral Social en defensa de los dirigentes detenidos.

En la provincia de Río Negro la crisis sanitaria se hizo oír en General Roca. Médicos y empleados de sanatorios marcharon por las calles de la ciudad en reclamo de que se efectivizaran los pagos adeudados por las obras sociales a las clínicas, sanatorios y consultorios médicos. Esta “*marcha blanca*” de profesionales de la salud fue una protesta inédita para estos sectores que “*jamás habían pisado una calle con esta metodología de reclamo*”, según afirmaron algunos de los manifestantes, en su mayoría médicos, odontólogos y bioquímicos que marcharon con sus guardapolvos y ropa de trabajo característicos. Muchos transeúntes y automovilistas demostraron su apoyo a la movilización.

Los bomberos de la localidad de Allen realizaron una protesta frente a la Municipalidad en reclamo del pago de las deudas que el Municipio tiene con la Asociación de Bomberos Voluntarios. Varios vehículos de bomberos partieron en caravana al anochecer y con las sirenas y bocinas se estacionaron frente al edificio comunal. Ante el reclamo recibieron una entrega provisoria de combustible y la promesa de parte de las autoridades de continuar las negociaciones.

Por otro lado, en Choele-Choel más de doscientas personas marcharon en silencio y sin banderas, en reclamo de justicia y castigo a los responsables del fallecimiento del joven Juan Pablo Pinazo que había muerto la semana anterior a causa de una descarga eléctrica de una estructura montada por la Municipalidad.

En la provincia de Santa Fe, los empleados municipales de San Javier decidieron flexibilizar el paro que estaban llevando a cabo por deudas salariales y concurren a trabajar por media jornada. Los trabajadores industriales de Laguna Paiva, Cooperativa de Trabajo, Producción y Servicios Limitada, iniciaron una protesta por el pago de los salarios adeudados y un informe acerca de la situación actual y el futuro de la Cooperativa. Los obreros y sus familias permanecían apostados en el primer piso del edificio central de los ex talleres ferroviarios reclamando el informe. A su vez, en el Liceo Municipal de San Cristóbal se realizó una asamblea pública a la que convocaron diferentes instituciones y organizaciones junto con desocupados para analizar estrategias que posibilitaron contener desbordes sociales. El resultado fue un petitorio que entregaron a las autoridades provinciales donde solicitaban, entre otros puntos, la distribución de ochocientos planes de empleo.

Por la tarde en Gualeguaychú, Entre Ríos, los jubilados provinciales realizaron un cacerolazo en el centro de la ciudad. Luego, en la madrugada, estallaron dos bombas incendiarias en el domicilio del vicegobernador Edelmiro Pauletti.

Al igual que en Buenos Aires, los vecinos de Paraná realizaron el cacerolazo de los viernes por la noche frente a las entidades bancarias manifestando la indignación hacia las consecuencias del corralito y solicitando un cambio

de rumbo en la política gubernamental de la provincia. Luego de recorrer las sedes bancarias del microcentro, el grupo que se alineaba en el FRENAPO, hizo su propio acto y no acompañó a la mayoría de la gente que se dirigió hacia el domicilio del gobernador Montiel. Un férreo cordón policial impidió que los manifestantes pudieran llegar a destino. La mayoría de las personas que ganaron la calle eran comerciantes, gremialistas, ancianos, madres con hijos, estudiantes, profesionales, etc. Tanto vecinos como conductores fueron adhiriéndose al paso de la movilización a través de aplausos, bocinazos y papelitos. Durante toda la marcha estuvo presente el reclamo unívoco por el esclarecimiento de las muertes de las tres víctimas de los saqueos, Romina Iturain, Eloísa Paniagua y José Daniel Rodríguez. Durante el día, los familiares, vecinos y conocidos de los tres jóvenes muertos realizaron una ceremonia religiosa para recordarlos.

La presencia policial se hizo sentir tanto en Paraná como en Buenos Aires, donde un grupo de manifestantes que recordaba los muertos por la represión del 19 y 20 de diciembre pasado apedrearon y tiraron bombas molotov contra varias sedes bancarias.

Por otro lado, en Jujuy mientras que permanecían cortadas once rutas, se realizó una movilización y cacerolazo al atardecer en el centro de San Salvador. En la misma confluyeron distintas organizaciones sociales y nutridas columnas de participantes de los distintos piquetes.

También en la ciudad de Mendoza y el Gran Mendoza, con la caída de la tarde los barrios volvieron a llenarse de amas de casa, chicos, jubilados, desocupados y estudiantes, que con cacerola en mano, protestaron contra el corralito, los políticos y los gobiernos ineficientes. El cacerolazo más importante se registró en Guaymallén, donde vecinos del barrio Unimev cortaron el acceso Este. El repudio general hacia la clase política se ejemplificaba en la voz de una vecina: *“Tenemos que parir un nuevo presidente que salga del pueblo. Es el pueblo el que delibera y gobierna. Basta de los corruptos que nos manejan, no nos dejaron nada. Se tienen que ir todos, porque ninguno sirve. Es necesario gente que salga del pueblo”*.

Sábado 19 de enero

Las protestas contra la política económica y las entidades financieras continuaban tanto en la provincia de Santa Fe como en Córdoba. En Rafaela los comerciantes locales expresaron su descontento apagando las luces de las vidrieras y colocando banderas argentinas con la consigna *“Apagamos en defensa del comercio y las fuentes de trabajo. A favor de la gente”*. En la ciudad cordobesa de Tancacha alrededor de setenta personas, en su mayoría comerciantes y/o pequeños industriales de esa misma localidad, se movilizaron para entregar un petitorio a los bancos Nación y Provincia. El Consejo

de Médicos de la Provincia conjuntamente con otras entidades profesionales del ámbito reclamó a las autoridades provinciales un cambio de rumbo en el sistema de salud de la provincia.

Las mujeres de la Liga de Amas de Casa de la provincia de Salta marcharon por las calles céntricas de la ciudad capital escoltando una gran bandera argentina y golpeando ollas y sartenes expresaron su rechazo al aumento desmedido de los precios a raíz de la devaluación. Mientras tanto, en la ciudad entrerriana de Laguna Paiva se realizó una masiva movilización en apoyo al reclamo de los obreros de la cooperativa, que hacía un año no percibían sus haberes.

En la provincia de Santa Fe, entidades humanitarias reclamaron en los tribunales rosarinos el esclarecimiento de la muerte de siete personas como resultado de la represión policial registrada en Rosario el 19 de diciembre. La denuncia fue presentada por un funcionario judicial quien había revisado las cintas de una emisora de radio que fue relatando los hechos y registrando de ese modo la muerte de dos personas. En la cinta se podía escuchar el diálogo entre un periodista y un policía durante un saqueo a un supermercado: *“Pará, que hacés, estás tirando con balas de verdad”* a lo que el policía le contestaba *“si a estos negros no les tiramos con balas de verdad nos pasan por arriba”*. *“Todo esto se emitió al aire en el programa Sin Límites y por eso yo reclamo que se secuestren las cintas”*, subrayó el funcionario judicial Daniel Papalardo.

En la provincia de Mendoza, luego de cuatro cacerolazos consecutivos, el intendente de San Rafael, Ernesto Sanz llamó a una reunión de concertación social y propuso armar comisiones especiales entre vecinos y entidades para que evaluaran el monto salarial que merecería ganar cada uno de los funcionarios. Por su parte, la totalidad de los concejales de Alvear decidieron reducirse sus dietas a quinientos pesos, luego de la presión popular que se vivió en la noche del viernes en el primer cacerolazo que recorrió las calles de la ciudad.

Domingo 20 de enero

Mientras que en la ciudad de Córdoba los choferes continuaban de paro, en Tafí del Valle, Tucumán, alrededor de treinta choferes de remises de una cooperativa de trabajo de Tafí Viejo llegaron al Corralón de la Municipalidad para exigir la devolución de un auto secuestrado por la Dirección de Tránsito y cortaron la Avenida Avellaneda. En la capital de la provincia tucumana, la ex intendenta y diputada Córdoba soportó el abucheo de un grupo de personas mientras cenaba en una parrilla. Al notar su presencia las personas comenzaron a aplaudir y a golpear las mesas con los cubiertos como muestra

de rechazo ciudadano hacia la clase política. La diputada no se retiró del lugar.

En la localidad entrerriana de Bovril, un grupo de quinientos desocupados intentó ingresar a un depósito abandonado que estaba colmado de bebidas y alimentos pero la Policía logró persuadirlos y abandonaron el lugar.

Lunes 21 de enero

El equipo económico aprobaba un nuevo paquete de medidas tendientes a consolidar el proceso de pesificación de la economía.

Los participantes de la Mesa de Diálogo Social Argentino sostenían que los encuentros entre los diversos sectores, mostraban un avance hacia la recuperación de “la paz social”. En tanto movimientos de desocupados se movilizaban en las provincias de Chaco, Río Negro y Salta.

En Resistencia, mientras el Consejo Consultivo de los Movimientos de Desocupados se reunía con el secretario de Desarrollo Social solicitando que la distribución de mercaderías y planes de trabajo se centralizara bajo esa Secretaría, un grupo de desocupados se manifestaba frente a la Casa de Gobierno apoyando el reclamo. La manifestación fue reprimida por la Policía Provincial con balas de goma y gases lacrimógenos provocando numerosos heridos y dieciséis detenidos. Parte de la Casa de Gobierno fue alcanzada por piedras e incluso balas que provocaron serios destrozos.

En la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, un grupo de desocupados instaló una carpa frente a la Municipalidad exigiendo mayores cupos de planes sociales y los pagos atrasados de los planes de noviembre y diciembre. La Municipalidad les ofreció cien cupos, pero el movimiento de desocupados rechazó la oferta argumentando que necesitaban doscientos. En la ciudad de General Roca, los desocupados pertenecientes a la UOCRA se manifestaron frente al municipio y el Concejo Deliberante para reclamar quinientos puestos para planes de trabajo.

En la provincia de Salta se registraron distintas movilizaciones de desocupados. La Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi se movilizó en reclamo de trabajo genuino y planes sociales. Por otra parte medio centenar de manifestantes nucleados en la CCC acompañados por el intendente de Güemes, concejales de esa localidad y otras organizaciones de desocupados, marcharon por las calles hasta la Secretaría de Empleo Provincial, exigiendo puestos de trabajo para los ex trabajadores del ingenio y del ferrocarril.

En Santa Fe junto con los desocupados se movilizaron comerciantes, productores agrícolas y ahorristas por las calles de la capital, concentrándose luego frente a la Casa de Gobierno. Los manifestantes descargaron su enojo contra las autoridades políticas y las medidas económicas del gobierno. Los

desocupados sumaron al reclamo general el pedido de puestos de trabajo y la entrega de alimentos. Ese mismo día en la ciudad de Rafaela productores avícolas y trabajadores del sector se movilizaron con cacerolas en defensa de sus pequeñas explotaciones ante la crítica situación que afectaba a ese rubro productivo. Los manifestantes entregaron un petitorio al intendente expresando sus reclamos. Participaron alrededor de cien personas acompañadas por dos tractores y un acoplado con algunas gallinas.

Continuaba sin resolverse el conflicto en la Cooperativa de Laguna Paiva. Los familiares de los obreros cumplían una tensa vigilia frente a la sede de la misma. Luego de una agitada asamblea, se concentraron alrededor de mil quinientas personas frente a la puerta de ingreso de los talleres para saber cual sería el destino de esa fuente de trabajo.

En la localidad de Progreso, autoridades del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario acompañados por representantes de organismos públicos y privados entregaron sendos petitorios a los gerentes de los bancos Santa Fe y Nación como muestra de repudio al sistema financiero que ahogaba a los productores agrícolas de la zona.

Los empleados municipales de Tintina, en Santiago del Estero, agrupados en la ATE comenzaron un paro de actividades por tiempo indeterminado en reclamo por el pago de sus haberes retrasados. Realizaron una movilización que incluyó también quema de cubiertas y un cacerolazo.

En Neuquén trabajadores del hospital de Cutral-Có y la ATE marcharon por el centro de la ciudad hasta la Municipalidad, en reclamo por elementos básicos para el funcionamiento del nosocomio: medicamentos, elementos de limpieza, elementos quirúrgicos, etc. Los manifestantes fueron atendidos por funcionarios municipales que tomaron nota de sus reclamos. El conflicto con los trabajadores de la salud se extendió también a la ciudad de San Miguel de Tucumán donde se mantuvo el paro en los hospitales públicos ante la falta de pago de los sueldos de diciembre. Realizaron una manifestación al frente de la Maternidad.

En esta provincia continuaban las protestas por la crisis económica. Comerciantes, empresarios, empleados, trabajadores del campo, desocupados y vecinos de Famaillá realizaron una “pueblada” para reclamar una solución a la crisis que enfrentaba el municipio. En la Ruta N° 38, a la altura de Simoca se realizó un corte protagonizado por los cañeros, quienes llegaron a la ruta con sus tractores, carros helvéticos, camiones y camionetas impidiendo el tránsito vehicular durante toda la jornada. El sector reclamó al Gobierno Nacional medidas para aliviar la crisis de los productores endeudados en dólares.

También hubo movilizaciones en varias localidades del interior de Mendoza. En Santa Rosa, un grupo de vecinos se manifestó en el Concejo Deliberante e intentaron dialogar con los pocos concejales que se encontraban

en el recinto. Durante más de seis horas los vecinos mantuvieron el control del Concejo impidiendo la salida de los funcionarios, quienes se quejaron de la actitud prepotente de los manifestantes y radicaron una denuncia judicial por la acción de los vecinos. Éstos reclamaban principalmente la disminución de las dietas de los funcionarios a quinientos pesos, como ya había sucedido la primera semana de enero, en los departamentos vecinos de General San Martín, Junín y Rivadavia. Los manifestantes afirmaron que era *“una burla que hayan prometido cobrar \$500 y luego, por ordenanza, se hayan fijado dietas de \$800. Saben que el pueblo está pidiendo algo justo. La gente se está muriendo de hambre y los concejales no quieren soltar ni un peso”*. La gente recriminó la actitud de los funcionarios que no asistieron al Concejo y exigieron al presidente del cuerpo que se tomen medidas en consecuencia y si fuera necesario pidiera la renuncia de quienes no estaban dispuestos a *“dar la cara frente a la gente”*.

En el departamento de Maipú un grupo de cuarenta vecinos se manifestó frente al municipio donde estaba previsto que los delegados se reunieran con el jefe comunal. Sin embargo el encuentro se realizó en medio de gritos, petardos y una tensión creciente, en la entrada del edificio municipal. Los manifestantes exigían que los concejales y funcionarios municipales bajaran sus sueldos, un manejo más transparente de los planes de empleo transitorio, un ajuste del gasto comunal y la reactivación de las empresas e industrias de la zona, así como ayuda para que los productores pudieran levantar la cosecha de frutas hasta que se terminara el *“corralito financiero”*. A pesar de que no se registraron incidentes, la Policía detuvo a veinte personas por averiguación de antecedentes. Por último en la capital provincial un grupo de trabajadores de Metro Supermercados organizaron una olla popular en la zona céntrica, donde reclamaron las cuotas indemnizatorias que la empresa les debía. Los empleados se negaron a aceptar que el supermercado les abonara el sesenta por ciento de los haberes de noviembre en *tickets canasta*, ya que todas las sucursales se encontraban desabastecidas y no tenían garantías de poder canjear los tickets por alimentos y otros productos.

Varias ciudades entrerrianas fueron escenario de protestas, con cacerolazos, caravanas, movilizaciones y concentraciones que convocaron a gran cantidad de manifestantes. En Villaguay, se realizó una movilización con cacerolazos y caravanas convocada por las entidades del agro a la que se sumaron otros sectores de la ciudad. Entre los reclamos sobresalieron, la pesificación uno a uno de la totalidad de las deudas bancarias, la no retención a las exportaciones de la producción agropecuaria y la desarticulación de la usura financiera. En Concordia, diversos sectores sociales se concentraron en la plaza principal para adherir a la manifestación convocada por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, la Federación del Citrus, la Asociación de Citricultores, la Federación de Entidades Arroceras y la

Federación de Cooperativas Agropecuarias, entre otras. La manifestación se desarrolló en forma pacífica entre cacerolas y banderas argentinas. Tanto en Maciel como en Rosario del Tala, los comerciantes, productores y vecinos realizaron un cacerolazo frente a las entidades bancarias por el escaso movimiento de los Bonos Federales. Luego del intento de saqueo realizado el día anterior en la localidad de Bovril, se comenzó a rumorear que la Policía comenzaría a repartir cajas de comida, por lo que la gente se volvió a concentrar frente al galpón. Ante el transcurso del día y la falta de respuestas, entraron al depósito. El saqueo se desarrolló de manera pacífica y la Policía no ofreció resistencia.

Martes 22 de enero

En la ciudad de Resistencia, Chaco, las organizaciones de desocupados que habían sido reprimidas en la jornada anterior, volvieron a manifestarse frente a la casa de gobierno. Luego de varias horas de negociaciones con los funcionarios, el Comité de Emergencia Social resolvió que la Secretaría de Acción Social debía ser la responsable de la distribución de los alimentos y los planes sociales en el área metropolitana.

En la ciudad de Córdoba se realizó un cacerolazo convocado por APYME en repudio a las medidas económicas. En esta misma ciudad los trabajadores de la autopartista Petruzzi, cortaron la calle frente a la planta, para protestar contra el cierre de la fábrica y por el retraso en el pago de los sueldos de los últimos meses. En Villa María unos doscientos comerciantes y pequeños empresarios, acompañados por otros grupos de vecinos y ahorristas, realizaron una movilización recorriendo diferentes bancos para repudiar el “corralito financiero”. Los manifestantes colocaron carteles en cada sucursal bancaria y luego se trasladaron a la Municipalidad donde hubo algunos enfrentamientos con la Policía. El saldo fue de dos detenidos y tres policías levemente heridos. En Cruz del Eje unos trescientos desocupados cortaron por dos horas la Ruta Nacional N° 39 y caminos alternativos en reclamo de planes sociales.

Nuevamente los reclamos de desocupados se extendieron a varias provincias tanto en las capitales como en las localidades más pequeñas. En Humahuaca, Jujuy, desocupados, empleados municipales y otros sectores sociales permanecieron frente al Cabildo de la ciudad demandando la renuncia del intendente, la reducción de sueldos para funcionarios, puestos de trabajo y alimentos. Por su parte las organizaciones de desocupados de la provincia, luego de negociar con el ministro de Trabajo Nacional, decidieron por medio de una multitudinaria asamblea levantar los cortes de ruta más importantes de la provincia, como el corte de acceso a la ciudad de San Salvador de Jujuy, que sostenían la CCC y el Comando Piquetero. Se mantenían hasta esa

jornada cinco cortes de ruta en el área provincial. Según las versiones periódicas, en las negociaciones que permitieron el levantamiento de la medida de protesta se habrían conseguido miles de planes sociales y subsidios para comedores y proyectos de las organizaciones. Paralelamente el Frente de Gremios Estatales reclamaba aumento salarial para los trabajadores municipales y provinciales.

Por otro lado, en la capital provincial, familiares de los detenidos por los hechos ocurridos el pasado 18 de enero en La Quiaca, intentaron detener el traslado de los mismos a la capital de la provincia. Simultáneamente grupos de vecinos realizaron en la plaza principal marchas del silencio y bocinazos, reclamando la liberación de los detenidos y la renuncia de los concejales. Uno de los manifestantes afirmó que *“sin cabecillas (...) somos parte del pueblo que vamos a seguir hasta que los funcionarios corruptos se vayan de La Quiaca”*.

En la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, trabajadores desocupados que reclamaban por el pago adeudado de sus planes sociales, destrozaron parte del municipio y agredieron al intendente. La acción se desencadenó luego de que los funcionarios municipales ofrecieron solucionar el reclamo con el pago de Bonos Provinciales y LECOP, propuesta que enfureció a los manifestantes y desencadenó los destrozos. Por otro lado, en la localidad de Lamarque, ex empleados de una empresa empacadora se instalaron en la puerta de la firma, en reclamo de las indemnizaciones adeudadas, impidiendo el ingreso y egreso de los camiones con fruta. Mientras tanto, en Cipolletti continuaba la jornada de protesta de los desocupados, quienes instalaron una carpa y cortaron la calle frente al edificio comunal en reclamo de doscientos puestos de planes laborales.

En la localidad de Alvear, provincia de Mendoza, los concejales votaron en el Concejo Deliberante local la reducción de sus dietas, luego de un cacerolazo donde participaron aproximadamente trescientos vecinos. De la misma forma en la capital provincial, grupos de vecinos exigieron a los concejales de la ciudad que redujeran sus salarios y un mayor control sobre el presupuesto municipal. Paralelamente, ex empleados de un supermercado realizaron una olla popular, reclamando las cuotas indemnizatorias correspondientes a sus despidos.

En la provincia de Santa Fe alrededor de doscientas personas se concentraron en la Plaza 25 de Mayo de Calchaquí para dirigirse luego a las sucursales de distintos bancos donde leyeron petitorios que fueron entregados a las autoridades de dichas entidades. Después sellaron las puertas con fajas celestes y blancas donde podía leerse: *“Cerrado por el pueblo de Calchaquí”*. Todas las sucursales permanecieron sin actividad. La protesta fue encabezada por

la Sociedad Rural y el Centro Comercial. Los comercios de Calchaquí cerraron sus puertas y bajaron las persianas adhiriendo a la protesta. Lo mismo ocurría en San Miguel de Tucumán.

Miércoles 23 de enero

En la capital chaqueña un grupo de desocupados cortó las calles céntricas frente a los bancos por atrasos en el pago de los planes sociales, mientras que en otro punto de la ciudad, el MTD se movilizó frente a los juzgados exigiendo la liberación de los detenidos por la manifestación acontecida el 21 de enero. Por otro lado, las fuertes lluvias que asolaron por la noche a la ciudad hicieron que el cacerolazo que habitualmente se realizaba ese día, menguara en la participación de los manifestantes, quienes de todas formas realizaron el acto, entonaron el Himno Nacional y corearon consignas contra la política económica y los gobiernos provincial y nacional. En la localidad de Charata, la Asociación de Productores Chaqueños (APROCHA) se movilizó en contra del Gobierno Provincial y simultáneamente en Sáenz Peña se realizó un cacerolazo en la Plaza San Martín al que concurrieron diferentes gremios (ATECH, UPCP, Sindicato de empleados Judiciales), la APROCHA y la Coordinadora de Desocupados. Los comercios cerraron sus puertas en apoyo a la movilización. Si bien la protesta era en contra de la política económica llevada a cabo por el Gobierno Nacional, reclamaban también un seguro de empleo y formación, la eliminación del bono contribución en los hospitales y la donación de las dietas de los diputados por tres meses para la constitución de un fondo de empleo. Por otra parte en la localidad de Quilipi, un grupo de manifestantes mantenía una olla popular en la Plaza San Martín y afirmaron que continuarían con la protesta hasta que el gobierno municipal respondiera a sus reclamos.

También se movilizaron los desocupados de varias localidades rionegrinas. En Río Colorado, sesenta desocupados de la UOCRA se manifestaron frente al edificio comunal consiguiendo cuarenta puestos para los planes sociales. En Cipolletti continuó el conflicto de los desocupados que reclamaban una ampliación del cupo de planes asignados. Recibieron la solidaridad de un grupo de desocupados de la vecina localidad de Allen quienes luego de manifestarse en Cipolletti, marcharon a su vez hacia la sede comunal de su ciudad en reclamo de bolsas de alimentos.

En la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, una manifestación de aproximadamente mil quinientas personas, la de mayor convocatoria en los últimos tiempos según los medios locales, recorrió las calles de la ciudad hasta llegar a la Municipalidad en protesta contra las medidas económicas del Gobierno Nacional y para reclamar la renuncia del intendente justicialista

Norberto Gutiérrez. La movilización fue convocada por el Centro Comercial, la Multisectorial, el gremio de trabajadores municipales y la CTA.

En la provincia de Entre Ríos, comerciantes y productores de Rosario del Tala se concentraron frente al Banco Bersa con ocho tractores que cortaron la calle. Parte del personal de seguridad privada del banco y agentes policiales salieron armados dispuestos a reprimir, pero el hecho no pasó a mayores ya que los manifestantes se disiparon y evitaron la confrontación. En Concordia, vecinos autoconvocados realizaron un cacerolazo en la plaza central exigiendo la devolución del dinero a los ahorristas, el pago de sueldos adeudados a los empleados públicos, la pesificación de todas las deudas hipotecarias y diez mil puestos de trabajo para las personas desocupadas. También, los vecinos autoconvocados de Nogoyá realizaron una protesta denominada “*cacerolazo por la injusticia*” recorriendo los domicilios de los funcionarios hasta llegar a Tribunales. La protesta se realizó especialmente para repudiar a los políticos en general, a la burocracia sindical y la falta de funcionamiento de la justicia. En Villa Elisa, el Centro Económico convocó a la comunidad a una asamblea con el objetivo de manifestarse en forma enérgica ante todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales de la provincia y la nación para que se aplique la Ley de Emergencia Económica, Social y Financiera Provincial. Se congregaron alrededor de ciento cincuenta personas y firmaron una declaración que fue presentada a cada una de las autoridades y representantes políticos de la zona: concejales, intendentes, legisladores y al gobernador Montiel. En Paraná, los trabajadores de la empresa de Transportes Urquiza SRL se movilizaron hasta el edificio municipal para que se levante la caducidad de la concesión que decretó el Ejecutivo ante la falta de pago del seguro para circular y la presentación a concurso de acreedores resuelta por los empresarios. Temiendo perder su fuente de trabajo, los trabajadores cortaron las calles con los colectivos y quemaron cubiertas.

En Santa Fe los empleados municipales de Reconquista y de la capital provincial reclamaron por el pago de sus sueldos atrasados. Los primeros cortaron la Ruta Nacional N° 11 mientras que los empleados capitalinos se concentraron frente al palacio municipal. A su vez, grupos de trabajadores desocupados se movilizaron por la ciudad en busca de respuestas para sus reclamos: el pago de los planes de empleo, la implementación de programas laborales de emergencia y más cupos de beneficiarios. Al llegar a la Secretaría de Trabajo los desocupados ocuparon los pasillos del edificio.

Por otro lado, en la localidad de Villa Constitución más de mil personas, entre ellos el intendente Horacio Vaquié (UCR), cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires en protesta “*contra la usura y el corralito*”. A su vez, metalúrgicos, docentes, trabajadores, empleados municipales y provinciales, comerciantes y vecinos marcharon por el centro de la ciudad para hacer oír

sus reclamos frente a la crisis económica. Varios vecinos colocaron fajas en la puerta de los bancos que decían: “*banco clausurado, banco sin fondo*”.

En el Noroeste se llevaron a cabo varias protestas. En La Quiaca, provincia de Jujuy, continuaron las marchas del silencio, donde se presentó un petitorio a las autoridades comunales pidiendo reformas políticas y denunciando los distintos atropellos que sufren los vecinos de la localidad. Por otro lado, en San Pedro, los desocupados levantaron el corte de ruta luego de obtener quinientos bolsones de mercadería. En Humahuaca se realizó una marcha del silencio para pedir por la liberación de los detenidos.

En contraste con la provincia de Jujuy, en Salta capital se realizó un ruidoso cacerolazo donde participaron profesionales, amas de casa, estudiantes universitarios, desocupados, docentes privados, trabajadores, distintos sindicatos, todos unificados bajo la bandera de la “Comisión Multisectorial”. Protestaron contra el “corralito financiero”, los remates de viviendas, la fumigación de la laguna Tinkunaku y el pago de la deuda externa. Exigieron también por la libertad de los luchadores sociales, la nacionalización de la banca y por la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. Recorrieron las puertas de distintos edificios públicos, como el de Aguas de Salta y de la Corte Suprema de Justicia Provincial. Simultáneamente, en la ciudad de General Güemes, un grupo de aproximadamente noventa personas, entre trabajadores municipales, desocupados y adjudicatarios de los planes del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), cortaron la Ruta Nacional N° 34 en el acceso sur de la localidad. Solicitaban la implementación de planes de ayuda y ser incorporados al sistema de subsidios de desempleo. También pedían la excepción de cuotas y la suspensión de intimaciones para los adjudicatarios del Plan FONAVI hasta que se normalice la situación nacional. Solicitaban una tregua en los cortes a las empresas de luz, agua y gas. Los manifestantes exigían la presencia de autoridades comunales y del Concejo Deliberante.

Por su parte en la ciudad de San Miguel de Tucumán, más de cien empleados de centros de rehabilitación, discapacitados en sillas de ruedas y familiares realizaron una marcha. Los manifestantes reclamaban el pago de tres meses que la obra social adeudaba, en concepto de servicios prestados por las entidades privadas.

Jueves 24 de enero

Nuevamente los cacerolazos “hicieron ruido” en Córdoba, Entre Ríos, Río Negro y Mendoza.

En la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, alrededor de quinientas personas se manifestaron ruidosamente por el centro de la ciudad

protestando contra la Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol, la empresa local proveedora del agua potable, debido al alto costo mensual y la mala calidad del servicio. En la puerta de la entidad pintaron graffiti irónicos y luego arrojaron huevos contra la vivienda del representante legal de la cooperativa.

En la capital de Entre Ríos, comerciantes y usuarios del servicio financiero realizaron un cacerolazo frente a los bancos y la Dirección General de Rentas repudiando los efectos del “corralito financiero”, solicitaron que se cumplan los artículos contenidos en la Ley de Emergencia Económica y reclamaron también, por la transparencia y agilidad en el funcionamiento de la Caja de Conversión. Además entregaron un petitorio en los bancos especificando sus reclamos.



Los vecinos del barrio Unimev de la localidad de Guaymallén, Mendoza, realizaron un nuevo cacerolazo, que si bien a diferenciaba de los anteriores no fue numeroso, las características del escenario fueron las mismas que se vieron días atrás: familias enteras, abuelos, amas de casa, comerciantes, desocupados. Uno de los vecinos que se manifestaba afirmó que ya estaba harto de “*de ver cómo los concejales arreglaron sus casas y se compraron todos autos 0 Km.*”. Exigían también que el jefe comunal informe sobre los salarios de los concejales y los funcionarios municipales, así como del estado contable del municipio.

También se escucharon cacerolazos en distintas ciudades rionegrinas. En General Roca alrededor de ochocientas personas entre ahorristas y vecinos, se manifestaron frente a los bancos en contra del “corralito financiero”. Hubo insultos y cánticos contra el Gobierno Provincial y Nacional y contra el sindicalista Hugo Moyano. Los manifestantes pegaron fajas simbólicas de “*clausura y peligro*” en entidades bancarias, edificios municipales y empresas transnacionales como Telefónica. Por su parte unos trescientos manifestantes de Cipolletti sumaron al reclamo contra el “corralito financiero”, las empresas privatizadas y los gobiernos locales y nacional, las demandas de los desocupados que estaban realizando un acampe y corte de calle frente a la Municipalidad. En la ciudad de Villa Regina cientos de manifestantes, la mayoría mujeres, adhirieron al reclamo contra el “corralito financiero”, la devaluación y para que “*se vaya Verani y su gobierno*”. El cacerolazo convocó a diferentes sectores sociales, participaron entre otros la Coordinadora de Desocupados Teresa Rodríguez, la ATE, trabajadores del hospital local, el Movimiento Agrario de Mujeres en Lucha (MML), estudiantes universitarios, pacientes de los centros de diálisis, amas de casa y la Coordinadora de Padres de Villa Regina. Por otra parte, en Bariloche renunció el intendente radical Atilio Feudal, a causa de la crisis desatada por el conflicto y los destrozos protagonizados por grupos de desocupados que reclamaban pagos adeudados de planes laborales, y por “*la falta de apoyo de parte de los concejales y el gremio municipal*” a su gestión.

En San Salvador de Jujuy se movilizaron los empleados de la salud pública y privada pidiendo que se declare al sector en emergencia y por la defensa de la salud para que ésta “*vuelva a tener el protagonismo y el rol que nunca debió dejar de tener*”. A su vez la CCC realizó una movilización exigiendo el alto a la persecución de los dirigentes populares. Por último, los docentes jujeños realizaron una movilización pidiendo mediante un petitorio, insumos para trabajar y mejoras edilicias frente al deterioro del sistema educativo provincial.

El conflicto en el área educativa se extendió también a la ciudad de Santa Fe, donde los docentes se dirigieron hacia el Centro Cívico para repudiar el recorte de horas cátedra. A su vez los desocupados que responden al grupo Fuerza, Unidad y Lealtad, marcharon hacia el Banco Nación y luego hacia la Secretaría de Trabajo en reclamo de una respuesta concreta en materia de planes de empleo. En pleno centro ambas columnas se cruzaron y se aplaudieron mutuamente.

En el interior de la provincia de Santa Fe continuaban las protestas en varias localidades. Por un lado, trabajadores desocupados de la ciudad de Vera entregaron un petitorio al intendente de esa localidad reclamando planes laborales y ayuda alimentaria. En la ciudad de Ceres comerciantes y productores del noroeste protestaron frente a los bancos y luego cortaron la

Ruta Nacional N° 34. Se hicieron presentes todos los sectores productivos, municipales, representantes del FRENAPO, autoridades comunales, cooperativas tamberas y ganaderas, la Iglesia y el municipio. Según versiones periodísticas no se recordaba en Ceres una marcha con semejante convocatoria, ya que había más de cinco mil personas que portaban pancartas poniendo en tela de juicio el papel de la clase política y el sistema financiero. En esta masiva protesta participaron también organizaciones de distintas localidades de la provincia de Santiago del Estero: trabajadores municipales de la localidad de Selva y distintas entidades regionales, civiles e intermedias (productores, profesionales de la salud, cooperativas, comerciantes, centros vecinales y deportivos, jubilados, curas, etc.) de las localidades de Rivadavia, Pinto y Aguirre. “*Menos usura. Más trabajo*” fue una de las consignas que más se hizo sentir en esta movilización interprovincial donde se entregó un petitorio a las autoridades reclamando soluciones al corralito financiero, que se removiera totalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación y mayor flexibilidad para el pago de deudas y remates, dada la crisis financiera por la que atravesaba el país.

En la provincia de Tucumán comerciantes, empresarios, empleados, trabajadores del campo, desocupados y vecinos de Famaillá realizaron una pacífica marcha de protesta que tuvo como consigna central “*que se vayan, que se vayan*”. El reclamo estaba dirigido principalmente contra el intendente y el legislador representante de la región, Enrique y José Orellana, respectivamente. Una camioneta encabezó la movilización y por un altoparlante se exponían los motivos de la “pueblada”: mejor atención hospitalaria y distribución de planes de empleo a través de las instituciones de la Iglesia. Las pancartas que portaban los manifestantes pertenecían a Cáritas, la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA), la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), la CGT, distintos centros vecinales, La Fronterita, jubilados provinciales y el Sindicato Municipal.

En la localidad de Concepción del Bermejo, Chaco, alrededor de trescientos cincuenta vecinos se autoconvocaron frente a la Municipalidad reclamando asistencia alimentaria y planes de trabajo. En el marco de esta movilización se conformó una nueva comisión de desocupados, ligada a un concejal del PJ. Mientras tanto los vecinos del Barrio San José Obrero de Quitilipi presentaron un petitorio solicitando mejoras en el barrio.

Los trabajadores municipales capitalinos de Santiago del Estero iniciaron una protesta en reclamo por sus sueldos atrasados. Por la noche, se realizó un nuevo cacerolazo organizado por el Foro de Instituciones Intermedias donde participaron más de trescientas personas. Entre éstas había integrantes de la Pastoral Social, la Sociedad Obrera del Desocupado, la Asociación de Artistas Plásticos, la Liga de Amas de Casa, la Cámara de Comercio e

Industria, la Cámara de Ópticos, la Asociación de Extensión Rural, la Confederación Rural Argentina, el Consejo Económico y Social, el Círculo de Prensa y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Los puntos principales del reclamo se centraban en el pedido de un seguro de empleo, participación de las organizaciones en la distribución de los planes sociales, flexibilidad en el pago de impuestos y servicios, el pago de sueldos atrasados y mejoras en el sistema de salud y educación, entre otros. Por otro lado, en la ciudad de La Banda, el sindicato municipal anunció un cambio de estrategia en las protestas en reclamo de los haberes atrasados. A partir de allí, dejarían de realizar las movilizaciones y las quemas de cubiertas frente a la Municipalidad bandeña, para instalarse permanentemente en la plaza principal repartiendo volantes y así difundir a todos los sectores de la comunidad ese conflicto.

En la capital de Mendoza aproximadamente cuatrocientos comerciantes llegaron al kilómetro 0 de la ciudad, para protestar por el “corralito financiero” y exigir la renuncia de varios políticos del actual gobierno. Sin disturbios, ni violencia, ni banderas políticas, los comerciantes, convocados por APYME, decían indignados: *“No nos queda otra que hacer ruido para que estos políticos reaccionen. Hemos presentado varias medidas al Gobierno para que nos ayuden y no reaccionan. Si todo sigue así el mes que viene desaparecen la mitad de los negocios de Mendoza”*. En la misma ciudad los inspectores de Tránsito realizaron un paro de veinticuatro horas reclamando al municipio que les abonara el aguinaldo atrasado. Los agentes de tránsito también pidieron que les asignaran chalecos antibalas y mejores cascos y uniformes. Quienes disfrutaron el día fueron los “cuida coches” que se manifestaron por la continuación de la medida.

El cacerolazo nacional

Viernes 25 de enero

Como en los días anteriores los cacerolazos seguían extendiéndose por todas las provincias. Pero esta vez, estuvieron en coordinación con las asambleas barriales de Buenos Aires organizadas en la Asamblea Interbarrial que bajo la consigna *“Que se vayan todos”* convocó a un *“cacerolazo nacional”*.

En la capital de la provincia de Mendoza, aproximadamente cuatrocientos comerciantes agrupados en APYME repudiaron el “corralito financiero” con cacerola en mano. Simultáneamente en la ciudad de Guaymallén se realizó un cacerolazo de los vecinos reclamando la reducción de los sueldos de los concejales. Uno de los manifestantes afirmó al diario provincial: *“Yo me lo paso trabajando y con esto de los cacerolazos conocí a la mayoría de mis*

vecinos”. También se realizó a nivel provincial, un paro de inspectores de Tránsito en reclamo del pago atrasado del aguinaldo.

En Neuquén se realizaron cacerolazos en distintas localidades. En la capital, cerca de un millar de manifestantes recorrió el centro de la ciudad durante dos horas en contra del “corralito financiero” y los “*funcionarios corruptos*”. Según José, uno de los manifestantes, esta protesta no era “*sólo por el corralito, sino contra un sistema económico, contra la corrupción. Acá la gente pide gobernantes honestos y responsables que reemplacen a los políticos, quienes ya demostraron que lo único que quieren es llegar al poder para usufructuarlo*”. En San Martín de los Andes unas cuatrocientas personas realizaron también un cacerolazo contra el “corralito financiero” y las medidas económicas del Gobierno Nacional. La marcha fue pacífica y consiguió las adhesiones de varios turistas. En Centenario, el grupo de desocupados que continuaba con el corte de ruta desde hacía varios días, recibió el apoyo de vecinos y productores de la localidad que juntaron alimentos para los piqueteros.

En Río Negro diferentes localidades se sumaron al reclamo nacional. En Cipolletti se realizó un cacerolazo en el cual participaron aproximadamente ciento cincuenta personas entre los que se contaban productores agrícolas, el MML, organismos de Derechos Humanos, el PH, movimientos de desocupados, trabajadores del hospital y vecinos en general. En Choele-Choel unas setenta personas volvieron a manifestarse en reclamo de justicia para el caso del joven electrocutado por una instalación municipal. Vecinos y comerciantes se adhirieron a la manifestación junto con los familiares de otro joven asesinado en la localidad vecina de Lamarque en noviembre de 2001.

En la plaza central de San Salvador de Jujuy se realizó un cacerolazo contra el “corralito financiero”, por la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por “*que se vayan todos los políticos corruptos*”.

En la ciudad de Santa Fe una manifestación espontánea, en su mayoría familias de clase media, protestó frente a la Casa de Gobierno en contra del “corralito financiero” y la clase política. También hubo cacerolazos domiciliarios y un escrache en el domicilio del diputado nacional Julio Gutiérrez (PJ). Simultáneamente un grupo de vecinos se concentró en una esquina de su barrio, en las afueras de la ciudad, para hacer un cacerolazo también en rechazo del “corralito financiero”, en contra de los miembros de la Corte y por el hastío hacia una dirigencia política sin respuesta.

Además de la capital santafecina también hubo cacerolazos en otras localidades de la provincia. En Rosario los manifestantes recorrieron las calles de la ciudad con sus cacerolas, coreando consignas contra los dirigentes políticos, jueces y entidades financieras. Dos casas de funcionarios fueron apedreadas y dañadas. Entre los cánticos de los manifestantes se podía escuchar. “*que se*

vayan todos, que no quede ni uno solo” y “se va a acabar esa costumbre de robar”. La manifestación de siete mil personas aglutinó a familias enteras de clase media y congregó más gente que el 19 de diciembre en el mismo sitio cuando reclamaban la renuncia de Fernando De la Rúa. En la ciudad de Vera se realizó un cacerolazo con más de quinientas personas que demostraron su descontento al Gobierno Nacional. Participaron vecinos y representantes de instituciones intermedias. Al concentrarse frente al Banco Nación leyeron un petitorio que describe la situación de emergencia por la que pasa el municipio y plantearon medidas para acabar con esa situación. Luego entonaron el Himno Nacional. En San Justo un grupo de manifestantes que se concentró en la Plaza General San Martín, permaneció por más de una hora haciendo sonar sus cacerolas en protesta por las medidas económicas del actual Gobierno Nacional. Por último, la Comisión de Desocupados de la localidad de Tostado, asesorada por la CTA, se reunió con los concejales a quienes elevaron un petitorio mediante el que solicitan ayuda para paliar la crisis. Entre los puntos reclamaban la entrega de alimentos y la creación de un Fondo Económico que se destinara a proyectos para trabajos barriales.

Desde la tarde, la ciudad de Paraná volvió a ser centro de protestas que incluyeron marchas, cacerolazos y escraches que se sumaron al cacerolazo nacional. Los familiares, amigos y vecinos de los tres muertos durante los saqueos de diciembre se movilizaron desde la Catedral hasta los Tribunales exigiendo justicia. A ellos se sumó una columna de la ATE y juntos marcharon hasta la casa del ministro de Acción Social Rubén Villaverde, a quien le realizaron un escrache por considerarlo responsable de la crítica situación que atravesaba el IOSPER y por la falta de medicamentos en los hospitales y alimentos en los comedores escolares. Luego partieron hasta la casa del gobernador Montiel, donde se sumaron al cacerolazo programado por los Comerciantes Autoconvocados e integrantes de la Asociación de Usuarios del Servicio Financiero, contra el “corralito financiero”, los jueces corruptos y para reclamar por el funcionamiento más ágil y justo de la Caja de Conversión. Si bien se había dispuesto un fuerte operativo policial frente al domicilio del gobernador no se registraron incidentes. En San José, comerciantes y distintos sectores de la comunidad realizaron un cacerolazo frente a la sucursal del Banco Bersa solicitando la aceptación de los Federales para poder cubrir las obligaciones.

La provincia de Mendoza también se sumó a los cacerolazos. Esta vez, fue en el Kilómetro 0 de la capital donde casi seiscientas personas se arrimaron a la protesta. Cada cartel plasmaba una demanda distinta pero con un mismo destinatario: la clase política. Amas de casa, desocupados, estudiantes, profesionales y Madres de Plaza de Mayo se plegaron a la convocatoria del “cacerolazo nacional”. *“Estoy en contra de las medidas económicas, de vivir entre tanta corrupción, de sentirme prisionera en mi propio país”*, se

lamentaba una manifestante mientras agitaba su llavero. “¡La Argentina está harta!”, “¡Queremos votar!”, “Chorros: no a la pesificación”, “Ex de YPF quieren que el pueblo sepa la verdad”, decían algunos de los estandartes sujetados con firmeza por sus portadores. Alrededor de cincuenta desocupados reunidos en la agrupación Teresa Vive gritaron a viva voz por la urgencia de conseguir trabajo. “Queremos una audiencia con el Gobernador, no aguantamos más”, fue el pedido de Humberto, uno de los desocupados. Entre la penumbra de protestas, una sandía calada en forma de calavera y con una vela encendida alumbraba el pensamiento “Argentina es de terror”, plasmado en el cartel que portaba el joven que había llevado la original sandía. Por turnos cada asistente iba pidiendo el megáfono para dar a conocer uno a uno los motivos que los congregaban en una asamblea improvisada en el punto de encuentro. Ya casi en la desconcentración, el Himno Nacional acompañaba los pasos de los manifestantes que se alejaban por la Avenida San Martín. Simultáneamente en distintos puntos de la ciudad las concentraciones se dieron en forma espontánea en la intersección de las calles Buenos Aires y San Juan y en Avenida Colón y Mitre. Y así se replicó la protesta en casi todo el Gran Mendoza.

En las localidades de Maipú, Las Heras, Luján y Godoy Cruz también los vecinos se autoconvocaron tocando bocinas, haciendo sonar sirenas y por supuesto, pegándoles sin cesar a las ollas. Más temprano, en la localidad de Guaymallén se habían registrado incidentes entre vecinos y un grupo de empleados municipales y militantes justicialistas, quienes corrieron a gritos y empujones de la explanada del edificio comunal, a un grupo de vecinos del barrio Unimev que iban a reclamar por el ajuste del gasto político y que habían realizado un cacerolazo el día anterior en su propio barrio. Los empleados del municipio y los militantes del PJ comenzaron a insultar y empujar a los vecinos del Unimev para que se retiraran del lugar. Incluso, algunos de ellos tuvieron que correr varias cuadras para no ser golpeados por los agresores. Antes de estos incidentes unas cincuenta personas del asentamiento Castro también se habían manifestado frente a la Municipalidad pidiendo planes sociales y bolsones de alimentos, aunque cuando comenzaron los incidentes este grupo decidió retirarse.

Los cacerolazos seguían recorriendo el país, también en las provincias del norte.

En la capital tucumana se realizó una movilización en contra de la dirigencia política. Uno de los carteles que se vieron decía: “Cacerolazo pacífico, sin partidos políticos”. En la marcha se juntaron varias organizaciones pero al llegar a la Plaza Independencia los manifestantes convocados por el Poder del Pueblo se separaron de los integrantes del Polo Social. Por su parte, el Frente de Organizaciones No Gubernamentales de Tucumán que nucleaba a unas doscientos cincuenta instituciones, realizó una manifestación en la

Plaza Urquiza para que se cambie la administración de los planes sociales. También en la capital los trabajadores de la salud marcharon por las calles del microcentro y reclamaron la renuncia del titular del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), el pago de sueldos y la renovación de los contratos de los mil cincuenta empleados contratados. Temprano Izquierda Unida había realizado una protesta por las calles de la capital exclamando consignas contra la clase dirigente y la corrupción de los funcionarios. En la localidad de Lules los desocupados realizaron una nueva marcha frente a la Municipalidad en demanda de planes de empleo. En Banda del Río Salí, la Comisión Pro Defensa del Consumidor realizó una movilización hacia el Concejo Deliberante y después un escrache ante la casa del intendente, Víctor Lossi. Reclamaron una rebaja en las tasas municipales y exigieron una disminución de las remuneraciones del intendente, de los concejales y de los funcionarios municipales. Los vecinos de dicha ciudad se constituyeron en un foro, ante la falta de respuesta del Concejo Deliberante respecto del pedido de rebaja de tasas y de salarios del intendente y de los concejales. La organización promovía la realización de asambleas barriales. El dirigente del nascente foro señaló que *“tenemos que organizarnos entre nosotros ante la ausencia del Estado”*.

En Resistencia, Chaco, también se realizó un cacerolazo por las calles céntricas. Los manifestantes caminaron desde el Banco de Chaco, pasando por la plaza central y las casas de distintos funcionarios del Gobierno Provincial y políticos opositores de la UCR y el PJ respectivamente. Cuando la manifestación pasaba por el Diario Norte, dos manifestantes arrojaron piedras contra la redacción generando leves daños. Muchos de los manifestantes forcejearon con estos sujetos y lograron calmar la situación que no pasó a mayores.

En la capital de Salta se movilizaron distintas agrupaciones de jubilados y pensionados en defensa de sus derechos y sus haberes. Fueron recibidos por funcionarios del PAMI y del gobierno provincial a quienes les entregaron un documento con los reclamos del sector.

Por último, en Santiago del Estero, el SUOEM bandeño organizó una junta de firmas para pedir que los concejales reduzcan sus salarios en un cuarenta por ciento. Sólo en la primera hora habían recolectado alrededor de mil firmas y seguían circulando planillas en la plaza central y por distintos barrios de la ciudad. Los organizadores anunciaron que la junta de firmas continuaría hasta el mes de febrero.

Domingo 27 de enero

Luego de dos días de intensas discusiones, el Gobierno Nacional y las administraciones provinciales llegaron a un acuerdo que establecía un nuevo

régimen para el reparto de impuestos. Este arreglo y la sanción del Presupuesto anual eran los dos requisitos centrales que había planteado el FMI para encarar las negociaciones con la Argentina, para lograr una asistencia financiera internacional en el marco de la crisis.

A pesar de los acuerdos entre los gobiernos, en las provincias continuaban las protestas. Esta vez en la provincia de Tucumán. Por un lado en la comuna de El Talar, los empleados municipales nucleados en SEOM tomaron el edificio comunal de forma pacífica. Pedían por la reincorporación de compañeros cesantes y el pago de salarios adeudados, además de la reducción del gasto público. Por otro lado, en la capital tucumana se realizó un cacerolazo en la Plaza Independencia. Los ciudadanos convocados por la entidad civil Poder del Pueblo sufrieron la agresión de personas que respondían al dirigente sindical Juan Jesús Soria y a hombres a quienes diversos testigos identificaron como posibles integrantes de la Asociación de Remiseros Unidos de Tucumán (ARUT), gremio que nuclea a los remiseros de la capital provincial. La policía intervino reprimiendo a los atacantes y custodiando a los manifestantes. Antes de desalojar la zona éstos anunciaron que instalarían una carpa en el paseo céntrico para protestar contra la dirigencia política y que el viernes volverían a la Plaza Independencia para “*protestar pacíficamente en el marco de la convocatoria nacional de cacerolazos*”.

“¡Piquete y cacerola la lucha es una sola!”

Lunes 28 de enero

En la Capital Federal se llevó a cabo una multitudinaria marcha de distintas organizaciones piqueteras, la CCC, la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), el Polo Obrero y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón, entre otras. La particularidad de esta manifestación consistió en el apoyo y la participación de sectores medios y de las incipientes asambleas barriales que acompañaron y se solidarizaron con el reclamo de los desocupados, cristalizándose esta situación en la consigna “*Piquete y Cacerola, la lucha es una sola*”. Ese mismo día en la sede del FMI, el director gerente de dicho organismo, Horst Köhler; el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, coincidieron en su preocupación por la gravedad de la situación argentina y decidieron sacar un comunicado conjunto donde hablaban por primera vez sobre un nuevo paquete de ayuda económica para el país. Este anuncio estaría relacionado con el acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las provincias y la próxima aprobación del presupuesto anual en el Congreso Nacional.

Mientras tanto continuaron las protestas en el interior del país. En la provincia de Santa Fe el personal del Hospital Central de Reconquista encabezó una movilización en defensa de ese centro sanitario ya que atravesaba por graves problemas financieros y falta de insumos.

En Neuquén los gremios estatales realizaron una marcha pidiendo la libertad del único dirigente gremial que continuaba detenido (los otros tres habían sido liberados el 26 de enero) y acusaron al juez y al gobernador Jorge Sobisch de realizar una persecución gremial y política contra los dirigentes sociales. Por otro lado los desocupados que mantenían cortada la ruta en la localidad de Centenario levantaron la medida de protesta luego de ocho días consecutivos de corte. La medida se levantó debido a un acta firmada por las autoridades en la que se comprometían a conseguir planes laborales para quienes no los recibían y la entrega de bolsones de alimentos para los piqueteros que mantuvieron el reclamo.

La CTD de Cipolletti, provincia de Río Negro, continuaba con su reclamo frente al municipio, mientras que desocupados de la CCC, cortaron la Ruta N° 22 en dicha localidad, en reclamo de planes sociales, becas de estudio y alimentos. A su vez, en Paraná, Entre Ríos, los desocupados de la CCC también se movilizaron hasta la Secretaría de Trabajo para reclamar la pronta implementación de los planes de trabajo y la flexibilización de los requisitos para conseguirlos.

En Santiago del Estero, tanto los trabajadores municipales de la ciudad capital como los de Quimilí se encontraban protestando por el retraso en el pago de los salarios. Los primeros se manifestaron violentamente provocando destrozos en la Casa de Gobierno. También volcaron en la calle una camioneta del municipio, arrojaron basura y quemaron cubiertas frente a la Municipalidad. Por su parte en Quimilí los trabajadores municipales en huelga desparramaron basura por las calles céntricas de la ciudad, mientras continuaban apostados frente al edificio municipal.

La Plaza Independencia fue nuevamente el lugar de encuentro en San Miguel de Tucumán, donde esta vez se reunió la asamblea popular convocada por la asociación civil Poder del Pueblo, al cumplirse veinticuatro horas de que una patota ligada a dirigentes sociales y políticos agrediera a los manifestantes. La asamblea se realizó sin cortes de calles, con poca gente y escasa vigilancia policial. En el mástil principal se reunieron más de cien personas que elaboraron un borrador con propuestas para elevar a las autoridades

Martes 29 de enero

Esta vez los cacerolazos dieron lugar a los cortes de rutas, los que se realizaron en las provincias del norte y sur del país.

En Chaco, la ciudad de Resistencia permaneció aislada por veinticuatro horas ante la instalación de nueve piquetes en las Rutas N° 11 y N° 16, en Fontana y Barranqueras. El corte fue realizado por desocupados y agrupaciones de izquierda que reclamaban la participación en la administración tanto de los planes de trabajo como de la asistencia alimentaria. Entre los grupos que participaron estaban el MTD 17 de Julio, Barrios de Pie, el MTL (Movimiento Territorial Liberación), la CCC, el PC, la Multisectorial de Fontana y dirigentes de pueblos originarios. *“Hoy todos los desocupados dejamos de lado nuestras diferencias y nadie se quedó en su casa. Nos dimos cuenta que los desocupados tenemos peso político propio y por eso queremos debatir las cosas de igual a igual, no en esos comités de crisis donde todo ya está arreglado de antemano”*, afirmó Emerenciano Sena, dirigente del MTD 17 de Julio. Estos cortes también se realizaron en apoyo a la movilización de desocupados que se trasladó desde el barrio La Matanza a Plaza de Mayo, en Buenos Aires.

En Salta, los desocupados realizaron un corte en la Ruta Nacional N° 34 en la localidad de General Mosconi. Reclamaron contra las empresas petroleras exigiéndoles que retomaran su ritmo habitual de trabajo y contrataran empresas y trabajadores de la zona. Los referentes de la UTD, Oscar “Piquete” Ruiz y José “Pepino” Fernández encabezaron el reclamo y cortaron la ruta de acceso a Refinor. Exigieron también que se asegure la contratación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) locales para brindar servicios a las empresas petroleras, mayor inversión por parte de las multinacionales y planes sociales y bolsones alimentarios para la población. La barricada en la ruta fue armada con maquinaria pesada perteneciente a algunas PYMES locales.

En Río Negro los desocupados de la CCC continuaron con el corte de la Ruta N° 22 en la localidad de Cipolletti. En el reclamo participaron también desocupados de otras localidades cercanas como General Roca, Mainqué, Huergo, Bariloche, Cervantes y Lamarque. Por otro lado la CTD levantó la medida de protesta al conseguir la promesa de entrega de los cupos de planes laborales solicitados y la entrega de bolsones de mercadería. Una vez levantada la protesta, otro grupo de desocupados se apostó frente al municipio en reclamo de cuarenta puestos en los planes laborales, cortando uno de los carriles de la calle frente al edificio comunal.

En la ciudad de Córdoba las cámaras y entidades que agrupan a distintos profesionales realizaron una nueva marcha para solicitar al gobernador José de la Sota gestiones ante la Nación para una flexibilización de las normas financieras englobadas en el corralito. Al llegar a Casa de Gobierno entregaron un petitorio al gobernador.

Los trabajadores de la construcción nucleados en la UOCRA se movilizaron por el centro de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, para solicitar la

reactivación del sector. Primero presentaron un petitorio en la sede del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) solicitando el reinicio de las obras paralizadas y que los fondos del FONAVI sean utilizados para sus fines específicos. Luego, se dirigieron hasta la Casa de Gobierno, donde fueron recibidos por el Ministro de Gobierno, Enrique Carbó.

En Santa Fe obreros y desocupados de CCI Construcciones quemaron cubiertas y cortaron media calzada en el extremo sur de la costanera de la ciudad capital. Los trabajadores protestaron por la falta de pagos y de respuestas en relación a los haberes adeudados a los empleados despedidos durante el último mes. Afirmaron que la paralización de la obra y las protestas callejeras continuarían hasta que se pague lo adeudado. Simultáneamente grupos de desocupados y otros sectores sociales se concentraron en la Plaza del Soldado donde se concretó el cabildo abierto y realizaron una asamblea. Uno de los objetivos fue fijar ese centro como lugar de encuentro periódico. Del encuentro participaron representantes de la CTA, el FRENAPO, la APYME, Coordinadora por la Memoria y varias corrientes de izquierda. Pidieron por una política de planes de empleo y se acordó participar de otras movilizaciones. Por su parte la APYME realizó otra movilización por el centro de la ciudad. Repudió la privatización del Banco de Santa Fe y exigió mayores plazos para cumplir las obligaciones tributarias. La marcha tuvo la adhesión de gremios y de desocupados. Los mayores reclamos se dieron frente a los bancos donde arrojaron huevos y basura y frente a la Administración Provincial de Impuestos (API). Además la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) realizó concentraciones simultáneas frente a los 16 juzgados de distrito de toda la provincia. Se presentó una acción judicial en defensa de las horas de nivel superior que se pretenden suprimir, “*para rechazar la política provincial de ajuste permanente en educación*”. El gremio declaró también que esta medida era “*ilegítima e inconstitucional*”.

Por último, en Santiago del Estero, el SUOEM capitalino volvió a marchar desparramando basura en reclamo de los haberes atrasados. Mientras que en la vecina provincia de Tucumán las fuerzas vivas de la ciudad de Tafí Viejo realizaron una marcha hacia el Concejo Deliberante en la que entregaron una nota por medio de la cual solicitaron la renuncia de funcionarios que cumplen con tareas incompatibles. También reclamaron que se esclarezca la aparente concesión, sin llamado a licitación, de la Hostería Municipal.

Miércoles 30 de enero

En el marco de la crisis nacional, la Mesa de Diálogo Argentino, que había sido convocada por el presidente Eduardo Duhalde y que contaba con la participación de la Iglesia, sindicatos y organizaciones sociales, entre otros, formuló una contundente advertencia a los bancos y empresas privatizadas, a

quienes instó a “*asumir su responsabilidad*” frente a la crisis. También reprocharon la falta de “*autocrítica*” de la dirigencia política incluyendo también a los jueces, sindicalistas y medios de comunicación, a quienes les pidieron además que “*escuchen el masivo reclamo de los ciudadanos*”. Mientras tanto en varias provincias, continuaban los cortes de rutas, saqueos y cacerolazos.

En Chaco los cortes de ruta fueron protagonizados en este caso por diferentes sectores y organizaciones sociales de Villa Berthet y Quitilipi, como la APROCHA, Unión de Campesinos Poriajhú y desocupados del Movimiento 20 de diciembre. Estas organizaciones cortaron la Ruta N° 16 reclamando el pago de subsidios a productores agrícolas y subsidio a jefes de familias desocupados. Los desocupados que mantenían la olla popular en la plaza central de Quitilipi también se trasladaron al corte en apoyo al resto de las organizaciones. Simultáneamente en la localidad de Sáenz Peña la APROCHA y grupos de desocupados, que resultaron claves para reforzar numéricamente la protesta que no contaba con la masiva participación de las bases de la asociación de productores, cortaron también la Ruta N° 16 en reclamo del pago de subsidios a los productores y aumentos en los cupos de los planes sociales para los desocupados. Por su parte continuó en las afueras de Resistencia el corte de la Ruta Nacional N° 11 por parte del Movimiento Barrios de Pie, el MTD Almafuerte y el MTD General San Martín que reclamaban ser atendidos por las autoridades provinciales, además de la entrega de más planes sociales, así como el control y la administración de la asistencia alimentaria por parte de las organizaciones de desocupados.

En Río Negro la Policía Provincial desalojó sin incidentes a los desocupados de la CCC que mantenían el corte de la Ruta N° 22 a la altura de la localidad de Cipolletti. Con una presencia policial de más de ciento cincuenta efectivos intimidaron a los piqueteros que en vista de la cantidad de policías, decidieron retirarse hasta una calle cercana a la ruta.

En la provincia de Neuquén los ceramistas de Zanón cortaron durante la mañana y en forma parcial la Ruta N° 22 en reclamo de la estatización de la fábrica bajo control de los trabajadores. Al mediodía una gruesa columna de trabajadores de la construcción nucleados en la UOCRA, llegó hasta el lugar y comenzó un corte total de la ruta en reclamo de puestos de trabajo y subsidios laborales. Frente a esto los trabajadores de Zanón decidieron retirarse. La protesta de los trabajadores de la construcción continuó hasta horas de la tarde cuando llegaron a un acuerdo con funcionarios provinciales por el cual recibirían subsidios en los días siguientes.

También en Santiago del Estero los trabajadores de la UOCRA se movilizaron hacia la Casa de Gobierno solicitando la reactivación de la industria de la construcción y exigiendo un llamado urgente a licitación para la construcción de mil quinientas viviendas en la provincia.

Mientras, en las provincias del norte, vecinos de Jujuy y Tucumán se manifestaban por demandas particulares. Como fue el caso de un centenar de vecinos de La Quiaca, Jujuy, que se movilizaron a la capital provincial para pedir por la libertad de los detenidos en los incidentes de los días 17 y 18 de enero y para que cese el “terror” en la localidad. Una comitiva con representantes de la Prelatura de Humahuaca, familiares de detenidos y la Coordinadora de Derechos Humanos se reunieron con el gobernador Fellner. Por otro lado, en la zona de Villa Urquiza, ciudad de San Miguel de Tucumán, más de un centenar de vecinos haciendo sonar sus cacerolas se movilizaron por la tarde para exigir más seguridad y el esclarecimiento de un hombre asesinado de un balazo por delincuentes que quisieron asaltarlo en su vivienda.

En Mendoza se produjo un saqueo en un supermercado de Las Heras llevado a cabo por un reducido grupo de mujeres solas que después de llenar cinco changuitos con artículos de primera necesidad esquivó las cajas y logró escapar de los empleados del supermercado gracias a la ayuda de un grupo de hombres que las esperaba afuera.

En tanto el conflicto docente salió a la luz en Santa Fe, donde docentes de toda la provincia, nucleados en AMSAFE marcharon en la ciudad capital contra el ajuste en la educación. La consigna principal fue “Educa-ción pública”, como una garantía para los sectores más postergados. Entre los participantes se encontraban, además de los gremios docentes, estudiantes, desocupados y gremios estatales (Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la ATE.

Jueves 31 de enero

En Neuquén los ceramistas de Zanón volvieron a cortar parcialmente la Ruta N° 7, en reclamo de la estatización de la fábrica bajo control de los trabajadores y la defensa de los trescientos treinta puestos de trabajo recuperados.

También en la provincia de Salta continuaron los cortes de ruta en distintas localidades del interior: Aguaray, Tartagal, Mosconi, Embarcación, Pichanal e Irigoyen. Los desocupados organizados por la UTD y otras organizaciones de desocupados solicitaron trabajo genuino, planes sociales, subsidios jefas y jefes de hogar, construcción de viviendas y la realización de obras públicas. En Mosconi exigieron además la renuncia de los jueces federales Miguel Medina y Abel Cornejo y el desprocesamiento de Iván Dorado. En esa localidad protestaron conjuntamente los desocupados y algunas PYMES. Simultáneamente en la capital salteña marcharon grupos de vecinos, gremialistas, afiliados de sindicatos, integrantes de la CTA, profesionales, jubilados, desocupados y simpatizantes del Polo Obrero, la CCC, Patria Libre, PH y la Democracia Cristiana. Reclamaron a la dirigencia política una reducción en

sus gastos y un aumento en los de asistencia alimentaria y sanitaria. Reclamaron a las entidades bancarias porque “*hundieron a la gente*”. Los vecinos que los acompañaron pidieron por la restitución de los servicios de agua y luz –por lo que marcharon hasta la sede de la Empresa de Electricidad de Salta (EDESA)– y fuentes de empleo. A su vez participaron también asociaciones de profesionales: médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, farmacéuticos, prestadores de salud y representantes de la cámara inmobiliaria que ocupaban la parte posterior de la formación. A su paso los comerciantes y los vecinos los recibían con aplausos y cacerolas. Luego de rechazar el “corralito financiero” y repudiar a los banqueros realizaron una asamblea popular en la plaza para debatir.

En Río Negro se realizó una nueva acción coordinada en distintas localidades de la provincia. Alrededor de las 11:00 horas un centenar de manifestantes de la Multisectorial de General Roca escracharon a diferentes entidades bancarias del centro de la ciudad. Simultáneamente en Cipolletti unos ciento cincuenta manifestantes escracharon a las empresas privatizadas. Por su parte un grupo de más de cien jubilados realizó su propio cacerolazo y cortaron el tránsito para reclamar por el buen funcionamiento del PAMI. En Cinco Saltos un centenar de vecinos, desocupados, trabajadores y organismos de Derechos Humanos realizaron por la noche un ruidoso cacerolazo.

En la localidad de Famaillá, provincia de Tucumán, se sucedieron dos manifestaciones convocadas con motivos contrapuestos en idéntico horario y a solo 50 metros de distancia. El legislador José Fernando Orellana convocó frente a su casa a un acto en respaldo de su gestión y de la administración de su hermano mellizo, el intendente Juan Enrique Orellana. A media cuadra, en la plaza distintas organizaciones de esa ciudad concretaron una numerosa marcha, en contra de los hermanos Orellana con una fuerte custodia policial. Reclamaron también insumos para el hospital y que los planes sociales no sean manejados por los políticos. En la ciudad de San Miguel de Tucumán se realizaron dos manifestaciones paralelas que finalizaron también sin incidentes. Las columnas del cacerolazo y la de las 62 organizaciones no se cruzaron en ningún momento. A las 21:00 horas llegó a la Plaza Independencia el grupo del cacerolazo encabezado por los dirigentes de izquierda Héctor Manfredo del PC, Daniel Blanco del Partido Obrero (PO) y Oscar López del Peronismo Revolucionario. Ante la advertencia de la policía de que se acercaba la columna de las 62 organizaciones, los manifestantes decidieron abandonar el lugar para que no se generaran incidentes.

En la capital de Mendoza los comercios de la zona céntrica aparecieron con carteles de “*remate*”. Pero no tenían que ver con espectaculares ofertas en los precios, sino con la asfixiante situación económica de los comerciantes de la zona. La idea, que fue motorizada por los pequeños empresarios de la cuadra y ya estaba extendiéndose varias manzanas alrededor, apuntaba a

llamar la atención de clientes, políticos, empresas de servicios y locadores. Lo que pedían era una rebaja del cincuenta por ciento por un plazo mínimo de seis meses en alquileres, tarifas, impuestos y tasas municipales. *“Aún con ese descuento nos costaría pagar, pero al menos de ese modo podríamos tener un poco de oxígeno para seguir aguantando”*, explicó Irene Nadal, una de las impulsoras de la singular protesta. Según otros locatarios de la zona, la medida era como una especie de cacerolazo del comercio. *“Algunos piensan que no vamos a lograr nada, pero los que estamos en esto creemos que si hay que morir, hay que hacerlo con dignidad, peleando por lo que nos pertenece”*, dijo el dueño de una casa de ropa, comparando el cierre definitivo de su negocio con la pérdida de la propia vida. *“Tenemos que entender que nunca estuvimos en el primer mundo. Si acá no se crea la conciencia seguirán cerrando los negocios y tendremos que empezar nuevamente de cero, comprando todo en el almacén del barrio”*, señaló apenada Nadal.

Siglas

ADEP: Asociación de Educadores Provinciales.
 ADIUNJU: Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy.
 ADUL: Asamblea de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral.
 ADUNSE: Asociación de Docentes de la Universidad de Santiago del Estero.
 AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos.
 AFJP: Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
 AGMER: Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.
 AMSAFE: Asociación del Magisterio de Santa Fe.
 ANSES: Administración Nacional de la Seguridad Social.
 API: Administración Provincial de Impuestos.
 APROCHA: Asociación de Productores Chaqueños.
 APUAP: Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública.
 APYME: Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios.
 ARUT: Asociación de Remiseros Unidos de Tucumán.
 ATE: Asociación de Trabajadores del Estado.
 ATEN: Asociación de Trabajadores de la Educación Neuquinos.
 ATECH: Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco.
 ATILRA: Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera.
 ATSA: Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina.
 BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
 CCC: Corriente Clasista y Combativa.
 CEDEMS: Docentes de Enseñanza Media y Superior.
 CGT: Confederación General de los Trabajadores.
 CONADU: Confederación de Docentes Universitarios.
 CTA: Central de Trabajadores de la Argentina.
 CTD: Coordinadora de Trabajadores Desocupados.

EDESA: Empresa de Electricidad de Salta.
 EDET: Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán.
 EPE: Empresa Provincial de la Energía.
 FAA: Federación Agraria Argentina.
 FATUN: Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales.
 FESTRAM: Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales.
 FMI: Fondo Monetario Internacional.
 FONAVI: Fondo Nacional de Vivienda.
 FOTIA: Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera.
 FTV: Federación de Tierra y Vivienda.
 FRENAPO: Frente Nacional contra la Pobreza.
 IAPV: Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda.
 IOSPER: Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos.
 IPPIS: Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas.
 IPS: Instituto Provincial de Salud.
 LADH: Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
 MML: Movimiento Agrario de Mujeres en Lucha.
 MODEFRI: Movimiento de Desocupados de Frías.
 MPA: Movimiento Paranaense Autoconvocado.
 MST: Movimiento Socialista de los Trabajadores.
 MTD: Movimiento de Trabajadores Desocupados.
 MTL: Movimiento Territorial Liberación.
 PAM: Programa de Asistencia Médica Integral.
 PC: Partido Comunista.
 PCR: Partido Comunista Revolucionario.
 PEN: Poder Ejecutivo Nacional.
 PH: Partido Humanista.
 PJ: Partido Justicialista.
 PO: Partido Obrero.
 PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas.
 SAMCO: Servicio de Atención Médica para la Comunidad.
 SAMEEP: Servicio de Agua y Mantenimiento-Empresa del Estado Provincial.
 SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
 SEOM: Sindicato de Empleados y Obreros Municipales.
 SEP: Sindicato de Empleados Públicos.
 SIPROSA: Sistema provincial de Salud (Tucumán).
 SITRAM: Sindicato de Trabajadores Municipales.
 SUOEM: Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales.
 UATRE: Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores.
 UCR: Unión Cívica Radical.
 UNSE: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
 UNTER: Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
 UOCRA: Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.
 UPCN: Unión del Personal Civil de la Nación.

Universalismo pequeño N°2

• 111

UPCP: Unión del Personal Civil de la Provincia.

UTA: Unión Tranviarios Automotor.

UTD: Unión de Trabajadores Desocupados.

UTM: Unión de Trabajadores Municipales.

UTN: Universidad Tecnológica Nacional.

YPF: Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

La rebelión de 2001: protestas, rupturas y recomposiciones

Norma Giarracca y Miguel Teubal¹⁹

A Ema Teubal, porque la vida y la ternura insisten

1. Introducción

Durante los meses posteriores al 19 y 20 de diciembre de 2001, aparecieron un sinnúmero de trabajos con diversas interpretaciones sobre los hechos ocurridos. Los partidos de izquierda hablaban de una situación pre-revolucionaria o de un “argentinazo”, mientras los sectores más conservadores marcaban la falta de alternativa política de un movimiento que, justamente, recusaba “a los políticos”. A partir de “estas rebeliones” –como las caracterizó el politólogo Ariel Colombo–, se puso en evidencia que, en la década anterior, había comenzado un ciclo de protestas y que las provincias le habían otorgado el principal escenario. Para algunos analistas, después de ese período, el país entero se levantó en una gran insurrección, siendo la de Buenos Aires la última gran pueblada después de Santiago del Estero, Cutral-Có, Mosconi, Tartagal, etcétera.

En este libro, precisamente, quisimos volcar los resultados de nuestras propias investigaciones acerca de qué estaba pasando en las provincias mientras la ciudad capital sonaba sus cacerolas o armaba sus asambleas barriales. Para poder armar el mapa social de protestas, rebeliones, acciones colectivas y saqueos fue necesario no sólo trabajar el material de aquellos meses sino haber transitado por la información de la década, tanto en la gran ciudad como en las regiones provinciales. Aquí nos proponemos exponer esa información de modo resumido para que el lector pueda comprender “la trama” de la protestas en las provincias.

Los días previos a la jornada del miércoles 19 de diciembre de 2001 habían sido desesperantes. Hubo una gran variedad de protestas pero las más

¹⁹ Este trabajo está basado en un artículo que realizamos en 2002 y publicamos en 2003 como “*Que se vayan todos: Neoliberal Collapse and social protest in Argentina*”, en el libro *Good Governance in Era of Global Neoliberalism*, editado por Jolle Demmers, Alex Fernández y Bárbara Hogenboom, Editorial Routledge. La presente versión en español está resumida y actualizada en varios apartados. Norma Giarracca es socióloga, coordinadora del GEMSAL y Miguel Teubal es economista, profesor e investigador CONICET.

notorias y extendidas fueron los saqueos a los supermercados. Si existe la sospecha de que el aparato del Partido Justicialista estimuló los saqueos, lo cierto es que la gran población comenzaba a estar masivamente desocupada, sin recursos y propensa a procurarse los alimentos de cualquier manera. En el atardecer de ese día, el presidente Fernando De la Rúa declaró el estado de sitio.

La respuesta al mensaje presidencial emitido por cadena radiofónica nacional fue inmediata. Desde los balcones y ventanas comenzó a sonar espontáneamente el ruido de cacerolas de un modo rítmico y continuo. Los medios, que acababan de transmitir el mensaje presidencial, siguieron difundiendo lo que ocurría en distintos puntos de la ciudad y se convirtieron en un enlace importante del gran evento que empezaba a gestarse. Los porteños ganaron las calles, los vecinos de un mismo barrio convergían en las esquinas y las plazas; todos con vestimentas informales, las mujeres cargando a los niños y empuñando los más creativos implementos hogareños para hacer sonar la disconformidad y el hartazgo. Espontánea y simultáneamente, aparecían los primeros “Que se vayan todos”.

El grueso de la clase política fue repudiado: desde De la Rúa hasta Carlos Menem, Domingo Cavallo, Carlos Ruckauf, Raúl Alfonsín, Eduardo Duhalde e incluso el ex vicepresidente Carlos Álvarez. El sentimiento de rechazo no sólo cayó en los políticos sino también en los jueces de la Corte Suprema y los ex funcionarios sospechados de corrupción en anteriores gobiernos. Esa noche, la policía no intervino en los barrios ni en el punto de convergencia después de la medianoche: la Plaza de Mayo.

Muchos permanecieron toda la noche en la plaza, en una demostración pacífica de desobediencia civil. En las primeras horas del día 20, Cavallo renunció y De la Rúa quedó libre para negociar con el Partido Justicialista. A los que permanecieron en la plaza se les sumaron, por la mañana, oficinistas, trabajadores y jóvenes que se acercaban desde el Gran Buenos Aires. A media mañana llegaron los organismos de derechos humanos, entre ellos las Madres de Plaza de Mayo con sus inconfundibles pañuelos.

A mediodía se desataba ya la feroz represión, primero en la plaza y luego en las proximidades. Después se supo que gran parte del Gran Buenos Aires sufrió casi una masacre. Aún cuando ya ha comenzado el juicio a los responsables, no quedan claras las razones políticas que llevaron al gobierno de la Alianza a actuar de este modo. Unas 10 personas murieron en el centro y más de 30 en otras zonas, pero la mayoría cayó en el fatídico Gran Buenos Aires. Fue la peor represión durante un gobierno elegido democráticamente:

en pocas horas, más de 40 personas, casi todos jóvenes, fueron asesinados a la vista de toda la población.²⁰

El Gobierno dimitió luego de algunos intentos para conseguir el apoyo justicialista. De la Rúa huyó en un helicóptero, frente al repudio de la población anonadada por el comportamiento de un Gobierno que había prometido cambiar el rumbo neoliberal y despótico de Carlos Menem. Ante la crisis institucional, la principal oposición elevó interinamente al cargo presidencial a Adolfo Rodríguez Saa, del Partido Justicialista de San Luis, quien se mantuvo sólo una semana en sus funciones. Después de varias tentativas, Eduardo Duhalde, el hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires, fue investido por la Legislatura como presidente provisional.

Como decíamos antes, muchos procesos ayudan a comprender estos acontecimientos. Comenzaremos por la crisis económica, que sobredetermina un estado de conflictividad social que venía manifestándose en la década anterior. Pasaremos luego a presentar los principales datos de la protesta de los noventa para regresar a los hechos del 19 y 20 y preguntarnos qué pasó después.

La crisis en 2001 y 2002

La primera gran crisis del nuevo milenio, que alcanza su punto álgido en 2001/2002, constituye una de las más importantes de nuestra historia, incluso más que la de los años treinta.

Si bien, como ocurre con todas las crisis, ésta contiene aspectos sociales, económicos, culturales, políticos e institucionales, en lo esencial puede considerarse una crisis del neoliberalismo, del modelo socioeconómico implantado a rajatabla en nuestro país, fundamentalmente en la década de 1990.

Este modelo tuvo dos antecedentes importantes:

- a. el golpe militar de 1976, que instauró una suerte de “estado burocrático autoritario” (O’Donnell, 1979); y
- b. el denominado “golpe económico” de 1989, que derivó en las hiperinflaciones del período 1989-1991.

Ambos “golpes” pueden ser visualizados como mecanismos de “disciplinamiento” de la sociedad argentina en su conjunto, preparatorios del “marco institucional” necesario para la plena implantación de los ajustes estructurales instrumentados en los años noventa.

²⁰ Recordemos que el Partido Radical tenía en el siglo XX el triste récord de “la semana trágica” (1919) y de “la Patagonia rebelde” (1921), dos históricos hechos de levantamientos populares reprimidos salvajemente con gobiernos elegidos por elecciones.

Uno de los condicionantes de esos ajustes estructurales fue el denominado “Plan de Convertibilidad”, de abril de 1991. Este plan estableció un nuevo sistema cambiario, fijándose el peso en una relación de uno a uno con el dólar. Asimismo, se decretó la plena liberalización de las transacciones financieras desde y hacia el exterior y se prohibió toda creación monetaria que no fuera respaldada por reservas de divisas del Banco Central, así como el flujo de capitales desde el exterior o nuevo endeudamiento externo. Presumiblemente, con esas disposiciones se eliminaría toda discrecionalidad del Gobierno con relación a la política monetaria y cambiaria y se establecería en el país una suerte de sistema patrón dólar.²¹

Tales medidas tuvieron como objetivo manifiesto reducir las expectativas inflacionarias basadas en las devaluaciones del tipo de cambio que habían desatado las hiperinflaciones del período 1989-1991, prohibiéndose por ley toda indexación del aumento de precios.²²

En términos generales, el objetivo de Domingo Cavallo, quien instituyó este régimen cambiario y monetario siendo ministro de Economía de Menem, era establecer en el país un sistema duradero que habría de estabilizar la economía, abriéndose el camino para la implantación de un severo programa de *ajuste estructural*.

Entre las medidas adoptadas en el marco de este plan, pueden mencionarse:

- a. Un programa radical de privatizaciones: en menos de tres años, se desbarató por completo el sistema empresario estatal con la privatización de más de treinta empresas públicas, tan diversas como teléfonos y comunicaciones, compañías aéreas, empresas petroquímicas, el petróleo, los ferrocarriles y otros sistemas de transporte, 10 000 km de caminos, el sistema de distribución del gas natural, la electricidad, el agua, las industrias del hierro y el acero, una serie de empresas incorporada al área de defensa, represas hidroeléctricas y otros ítems variados, como canales de televisión, hoteles, puertos, silos e hipódromos. Si bien se trató de un programa drástico, no incluyó la institucionalización de los mecanismos de regulación que caracterizan a las privatizaciones aplicadas en el primer mundo. Muchas de estas operaciones fueron cuestionadas debido a su endeble base legal o a la corrupción relacionada con su implementación;
- b. Una política de desregulaciones extremas y de apertura casi irrestricta hacia el exterior. Se eliminaron todas las restricciones cuantitativas apli-

21 Se trata de un sistema generalmente en desuso desde los años 30, sólo aplicado por países como Hong Kong, Bermudas, las Islas Caymán, Estonia y Argentina. Un análisis crítico de estos regímenes se presenta en Eigengreen, Barry (1966: 139, 184).

22 Como excepción a esta prohibición, puede señalarse el alza de las tarifas de los principales servicios públicos, los que, una vez privatizados, fueron indexados por el índice de precios mayoristas de los EE.UU. (véase Teubal, 2007).

- cadadas a las importaciones y se redujo significativamente el nivel arancelario de éstas. Iguales medidas fueron impuestas a la movilidad del capital, en particular, extranjero. Estas normas se correspondían con la eliminación de los regímenes de promoción industrial del interior del país y el programa “Compre nacional” aplicable a las compras estatales de bienes y servicios. Además, en el marco del Decreto de desregulación de 1991, se desregularon aspectos esenciales de la política agraria y se eliminaron los organismos que regulaban la actividad agropecuaria desde los años treinta. Con el correr del tiempo, fueron introduciéndose medidas desregulatorias importantes en el mercado laboral, que tendían a su “precarización”. Este aspecto del sistema culminó con la sustancial privatización del sistema de seguridad social. Y nuestro país se transformó en uno de los más desregulados del mundo, sujeto como ningún otro a los vaivenes de la economía mundial;
- c. La entrada al Plan Brady, que contó con el beneplácito de la comunidad financiera internacional y que regularizó plenamente los pagos de los servicios de la deuda externa. En parte, esto fue posible gracias a los recursos provistos por el programa de privatizaciones. A partir de entonces, el sistema de ajuste estructural se sustentó en el continuo endeudamiento externo que se vio obligado a realizar el Gobierno ante la tendencia creciente del déficit de la balanza de pagos. Si bien, en un primer momento—hasta 1995 aproximadamente—, el Plan de Convertibilidad y los ajustes fueron acompañados por un sustancial ingreso de capitales desde el exterior, la *crisis del tequila* (México, 1995) revirtió esta situación. Así también, la fuga de capitales fue uno de los determinantes esenciales de la posterior crisis de comienzos del milenio;
 - d. Programas de ajustes fiscales severos, requeridos por el FMI como condicionante para la obtención de nuevos préstamos provenientes del exterior. La exigencia de que se lograran superávits fiscales y de la balanza de pagos fue considerada necesaria para acumular fondos destinados al pago de la deuda externa. Se hicieron corrientes las visitas de los técnicos del FMI al país y los consiguientes acuerdos, exigidos por ese organismo para promover, supuestamente, la confianza de los “inversores extranjeros”, en especial, aquellos vinculados con el sector financiero internacional. Gran parte de estos ajustes incidieron directamente sobre los gastos de salud, educación y otras necesidades básicas de la población en general y, en particular, de los más necesitados.

Hacia la profundización de la crisis económica y financiera

Entre 1998 y 2004 (año éste en que fue superada la debacle de 2001/2002), la economía argentina dejó de crecer. Tal estancamiento presagiaba una tendencia hacia la recesión, depresión que fácilmente podía desembocar en una crisis. A partir de entonces, también se intensificó la protesta social. Pese al cambio, en el clima político-social que había llevado a la derrota al candidato presidencial Eduardo Duhalde en 1999, el nuevo gobierno de De la Rúa, traicionando sus promesas electorales, continuó aplicando aquel severo ajuste estructural. Se aumentaron los impuestos, se redujeron los salarios y se sancionaron leyes adicionales para la “flexibilización” del mercado laboral. Ninguna de estas medidas tuvo efectos “contra cíclicos”. Todo lo contrario: contribuyeron significativamente a que se profundizara la crisis.

Los ministros de Economía de la Alianza en el poder fueron incapaces de abordar la crisis que comenzaba a manifestarse. Tanto José Luis Machinea, con su “blindaje financiero”, como Ricardo López Murphy, con sus ajustes extremos, o Domingo Cavallo, a quien se le dio poderes especiales para “salvar” a la Argentina de la debacle que se avecinaba, adoptaron estratagemas presumiblemente destinadas a crear “confianza” entre las organizaciones financieras internacionales pero que sólo empeoraron la situación. El camino hacia la crisis estaba plenamente allanado: parecía que nada podía parar la corrida sobre los bancos y la fuga de capitales hacia el exterior. En realidad, el Gobierno y sus ministros de Economía estaban empeñados en evitar el *default* de la deuda externa y el fin de la convertibilidad, aún a costa de enormes penurias sociales, que son las que finalmente primaron. Se preocuparon únicamente por lograr la confianza de los círculos financieros internacionales y por el “riesgo país”, que generaría tasas de interés internacionales cada vez más altas. Pero no pudieron –o no quisieron– lidiar eficazmente con la corrida bancaria, la fuga de capitales y el drenaje de divisas. Entre febrero y noviembre de 2001 (cuando se creó el “corralito” para restringir el retiro de depósitos de los bancos), los pocos fondos del sistema bancario que quedaban –y que pertenecían fundamentalmente a los medianos y pequeños ahorristas– se redujeron a 16 300 millones de pesos/dólar. El drenaje continuó sin pausa: entre diciembre de 2001 y marzo de 2002, hubo una fuga de depósitos de 12 700 millones de dólares. Esta fuga total de 29 000 millones representa el 34 % de los depósitos que el sistema bancario poseía en febrero de 2001. En ese mismo año, las reservas de divisas del Banco Central descendieron 19 000 millones de pesos/dólar.

La crisis apareció, como todas, como una crisis financiera y, también como todas, tuvo consecuencias nefastas sobre la actividad económica y la población en general. Con la corrida sobre los bancos y la fuga de capitales y divisas se rompió el crédito y la cadena de pagos. Ante el cierre de negocios y fábricas, la recesión se transformó en una crisis de enormes proporciones. La única salida que vislumbró el Gobierno para evitar la quiebra de algunos bancos fue la implementación del corralito (luego “corralón”). Sin embargo, al congelarse el retiro de fondos de los bancos, quedó totalmente deslegitimado el sistema bancario y se potenció el colapso del sistema económico en su conjunto.

A esa altura, estaba claro para la mayoría de la población que la crisis era resultado de las políticas neoliberales que la habían empobrecido, arruinando a la industria y robando a los ahorristas que habían depositado sus peculios de buena fe en los bancos. No era de extrañar que los ciudadanos salieran a la calle con la sensación de que todos habían sido saqueados: no sólo los desocupados, los trabajadores, los pensionados y jubilados, a quienes les robaron sus empleos, sus sueldos, sus pensiones y jubilaciones, sino también las clases medias y trabajadoras, a quienes despojaron de sus ahorros. Era razonable que los fundamentos mismos del sistema fueran cuestionados.

Resultados y consecuencias

¿Cuáles fueron las consecuencias económicas y sociales de los programas de ajuste estructural aplicados en forma drástica en la década de 1990? ¿Cómo incidieron, en última instancia, en la crisis económica de 2001/2002?

Hasta que comenzó a manifestarse la crisis del tequila, en 1995, el caso argentino era considerado en los foros internacionales como uno de los modelos a seguir, conjuntamente con el chileno y el mexicano (antes de Chiapas). Las medidas implementadas por el gobierno de Menem habían cambiado sustancialmente las reglas de juego de la economía argentina. El “mercado” comenzaba a reinar en forma inusitada y los grandes intereses internos e internacionales festejaban por la rentabilidad alcanzada en sus negocios. Lógicamente, el ministro de Economía Domingo Cavallo era muy bien visto en los círculos financieros internacionales.

Paulatinamente, se fue instaurando en el país un nuevo “régimen de acumulación”, dejándose de lado el anterior proceso de industrialización por sustitución de las importaciones. Se manifestó como nunca la hegemonía alcanzada por los grandes grupos económicos, en particular, los intereses financieros. En este contexto, una de las marcas esenciales del modelo neoliberal fue el drástico proceso de desindustrialización que se manifestó en el país.

El conjunto de medidas de ajuste estructural tendiente a favorecer al mercado significó una enorme transferencia de ingresos, riqueza y poder hacia el grupo dominante socioeconómico y político y, en particular, hacia grandes corporaciones económicas nacionales y extranjeras. En este sentido, no se trataba sólo de programas económicos, también se requería el ajuste de las instituciones para adecuarlas al funcionamiento del mercado, o sea, a favor de los grandes intereses asociados al establishment.

Pero esta concentración del poder y la riqueza tuvo como contrapartida la devaluación de todo lo que tuviera que ver con lo social y, por consiguiente, la marginalidad y la exclusión de la mayoría de la población. Como se señala con frecuencia, los ajustes estructurales aplicados en nuestro país implicaron una mayor regresividad en la distribución del ingreso, la desocupación en todas sus variantes y una reducción en los salarios e ingresos reales de los sectores de bajos recursos, tanto directos como indirectos. Implicaron también un aumento de las diferentes formas de pobreza e indigencia.

Se plantea esta perspectiva frente a aquella presentada por los defensores de las políticas de ajuste, que sostienen que el modelo:

- a. no iba a ser altamente regresivo, en términos de sus consecuencias sobre la distribución de los ingresos y la riqueza;
- b. iba a conducir a un crecimiento y desarrollo sostenido de la economía en el tiempo; y
- c. no era un modelo que hiciera altamente vulnerable la economía a los shocks externos e internos (lo que finalmente trajeron a la luz los acontecimientos de estos años).

De más está decir que estas características están entrelazadas entre sí: el Plan de Convertibilidad juntamente con las privatizaciones y los demás elementos que conformaron los ajustes estructurales en los años noventa contribuyeron de diferente modo a la (regresión) retracción en la distribución de la riqueza y los ingresos y tuvieron un efecto determinante sobre la crisis y la protesta social.

Los datos de la crisis en 2001 y 2002

Decíamos que la crisis comenzó en 1998. En 2002, el PBI había caído un 19,5%. La curva descendiente comienza con una baja del 3,4% en 1999, seguida por una del 0,8% en 2000. En los dos años siguientes, cae un 4,4% en 2001 y un 10,9% –casi un récord histórico– en 2002. Tal indicador refleja el colapso de la actividad económica. En los primeros meses de 2002, la actividad industrial cayó más del 18% (como ejemplo, la producción automotor descendió el 55%).

No sorprende, entonces, que aumentara la desocupación en el país. Hacia junio de 2002, la tasa de desempleo de la población económicamente activa alcanzó el 23% (se había fijado en 14,7% en 2000), mientras que otro 22% se consideraba subocupado. Diversas formas de desocupación y de ocupación altamente precaria se habían hecho endémicas en la Argentina de los años noventa.

Los ingresos reales empeoraron para la población, excepto para aquellos que poseen el 10% de las rentas más altas del país. Como consecuencia, la distribución de la riqueza alcanzó niveles inusitados de regresividad. En 1974, el 10% de la población con ingresos más bajos recibía un 2,3% del PBI, mientras que el 10% con ingresos más altos recibía el 28,2% del PBI, o sea, 12,3 veces más que aquellos. Para el año 2002, la brecha entre el 10% de la población más pobre y el 10% más rica se había ampliado a 33,6 veces.

Naturalmente, en este contexto, aumentaron los índices de pobreza e indigencia. El proceso de empobrecimiento en este período fue uno de los más rápidos e intensos en el mundo, alcanzando en 2002 niveles escandalosos. A comienzos de la década de 1990, el 15% de la población tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza. En el año 2000, esta relación había alcanzado el 30%. Entre enero y mayo de 2002, el número de personas que cayeron por debajo de la línea de pobreza aumentó en 3,8 millones, o sea, 762 000 personas por mes, 25 000 por día. En junio de ese año, más de la mitad de la población (18 millones de personas) era “pobre”, mientras que el 22% (7,7 millones) era indigente, o sea, tenía ingresos que no le permitían comprar una canasta de bienes alimenticios básicos. Se estimaba que el 58% de los 9,8 millones de personas menores de 14 años era pobre, y el 28% era indigente. Como lo señalaba en su momento Claudio Lozano, de la CTA: “La Argentina es un país en el que la mayoría de los pobres son jóvenes y la mayoría de los jóvenes son pobres” (Lozano, 2002). Esta penuria alcanzó también a los de mayor edad. Un gran porcentaje de jubilados y pensionados –quienes, de por sí, recibían ingresos muy bajos y engrosaban el grupo de los “nuevos pobres”– cayó a la categoría de indigente. Cabe destacar que 1,8 millones de trabajadores en actividad eran también indigentes. Según informes periodísticos, entre mayo de 1998 y mayo de 2002, los indigentes con trabajo aumentaron un 70%, lo cual refleja la paupérrima calidad de la mayoría de los empleos en la Argentina.

El grado de empobrecimiento que se alcanzó durante la crisis de 2001/2002 se manifiesta en los indicadores de desnutrición infantil. En La Matanza, en el Gran Buenos Aires, más del 58% de los niños se encontraba desnutrido; en la provincia de Misiones, más del 60% tenía algún tipo de anemia, debido a que el Gobierno había cortado la provisión de alimentos a las escuelas. La situación nutricional en el país resultó –y sigue resultando–

escandalosa, dado que se produce lo suficiente como para alimentar adecuadamente a 300 millones de personas. La Argentina produce, entre otras cosas, 80 millones de toneladas de granos de todo tipo, más de 2 toneladas *per capita*. Sin embargo, en aquel momento, millones de personas padecían hambre (una proporción importante de la población sigue padeciéndolo, pese a la recuperación económica lograda desde entonces).

No sólo cundió el hambre en medio de la crisis. También se deterioraron como nunca los servicios sanitarios y educativos. En muchas provincias, los maestros y empleados públicos pasaban meses sin cobrar sus sueldos. Y comenzó la emigración masiva, en un país considerado históricamente como una patria de inmigrantes.

Una década de protesta

Si bien Carlos Menem y el Partido Justicialista ganaron las elecciones en 1989, se considera el año 1991 como el comienzo de una década signada por el neoliberalismo, que finalizaría con los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre. El período estuvo atravesado por la puesta en marcha de un plan económico que modificaría profundamente la fisonomía del país y por un “ciclo de protestas” en todo el territorio nacional.

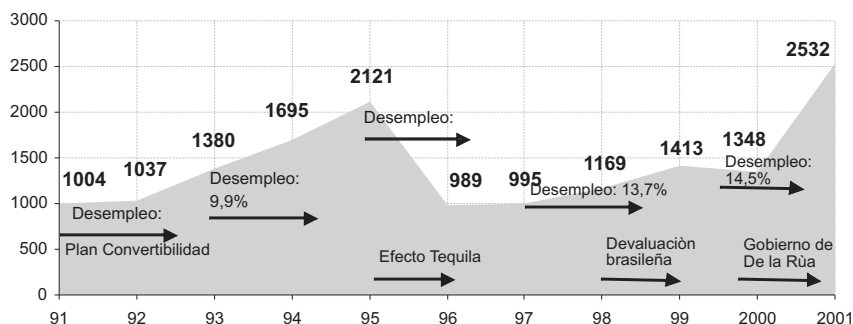
En los comienzos de la democracia, fueron las grandes centrales sindicales quienes habían jaqueado al gobierno de la Unión Cívica Radical mientras los movimientos por los derechos humanos no cesaron en sus reclamos por justicia y castigo a los responsables de la represión del período anterior. Pero las acciones de protestas que se iniciaron en la década de 1990 eran de un nuevo tipo y se expandieron rápidamente, sobre todo, del interior al centro del país. En efecto, son protestas territoriales tanto en sus orígenes como en sus expansiones. La ciudad de Buenos Aires siguió siendo un escenario privilegiado para los reclamos, pero, a diferencia de lo que ocurría en la década de 1980, las manifestaciones y los reclamos comenzaban en el interior y en muchas ocasiones se marchaba sobre Buenos Aires.

Una primera aproximación a estas protestas puede hacerse por medio de su cuantificación y, para ello, recurriremos a los datos de la Consultora de Investigación Social Independiente (CISI), que lleva un registro pormenorizado de las expresiones de conflictos a través de periódicos nacionales y provinciales.²³

23 Dicho seguimiento, según la consultora, fue realizado de manera exhaustiva y diaria, dando como resultado un conjunto de 16 000 protestas. Se contabilizan los registros por la “forma de lucha”, independientemente del actor que la lleva a cabo. Es decir, si un sindicato realiza consecutivamente una huelga y una marcha, para la CISI constituyen dos expresiones de protestas. Esto puede dar un número superior al que resultaría si la

Como vemos en el siguiente cuadro, las expresiones de conflicto registradas por la CISI no bajaron de mil por año durante toda la década, siendo 1995 el momento pico (año de la reelección presidencial de Carlos Menem). A partir de 1996, los registros bajan, y comienza un ascenso sostenido desde 1997 hasta el final de la década. Si en los ochenta la mayoría de las acciones de protesta fueron llevadas a cabo por organizaciones sindicales (con excepción de aquellas realizadas por los movimientos de derechos humanos), en la década de 1990, las protestas de nuevos actores sociales, como desocupados, vecinos, campesinos, etcétera, llegaron a constituir un porcentaje muy importante del total.

Gráfico I. Total de Conflictos durante el Plan de Convertibilidad. Período 1991-2001, y de los eventos económicos y políticos más importantes



Fuente: Consultora de Investigación Social Independiente (CISI), pág. 6

De 1996 a 1997, hubo un importante aumento (casi el 10%) en la participación de las protestas no sindicales. La desocupación y las tradicionales conexiones políticas del sindicalismo con el Partido Justicialista permiten comprender las razones de la disminución de las protestas de los asalariados organizados. Existían dos desprendimientos sindicales de la poderosa Confederación General de Trabajadores (CGT): la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). Ambas fueron las principales organizadoras de los paros, marchas, alertas y ocupaciones con base sindical. La participación de la CGT oficial fue muy baja.

protesta se registrara por "sujeto de la acción". No obstante, lo importante es la variación de una década y, en tal sentido, la metodología siempre fue la misma.

Según los datos de la CISI, los paros fueron la principal forma de la protesta sindical, acumulando el 35,4% de los registros; le siguieron las movilizaciones, con un 28,1%; luego, las declaraciones de alerta, las ocupaciones pacíficas, etcétera.

La protesta de tipo social (no sindical) creció exponencialmente en este periodo, pero la presencia de la lucha de tipo sindical también estuvo presente. La singularidad de la década reside, por un parte, en la presencia de gremios y centrales desprendidas de la CGT oficial y, por otra, en la falta de logros concretos de la lucha sindical (el 93% de las manifestaciones no tuvieron respuesta alguna por parte de los actores demandados, fueran estos el Estado o del sector privado).

Las principales causas de los conflictos de base sindical giraron alrededor de los salarios. Cuando estas causas se cruzan por “tipo de empleador”, las salariales se mantienen como primer motivo de conflicto y el demandante es el Estado, mientras que a los sectores empresariales se les demanda más por mantenimiento de la “fuente de trabajo” y por el “deterioro de las condiciones laborales”.

La lista de gremios con mayor registro de protestas está encabezado por los docentes y los trabajadores del Estado (ambos gremios pertenecen a la CTA). El viejo sindicato de los metalúrgicos, actor de primera línea en los conflictos sindicales de los años sesenta y setenta, aparece ocupando el octavo lugar y produciendo sólo algo más del 20% de los conflictos con base sindical.

La lucha por mantener la educación pública fue sostenida por los docentes, los estudiantes universitarios y los padres de alumnos. No obstante, la protesta del gremio de los maestros primarios –CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina)– fue significativa, pues se convirtió por más de dos años en la unidad simbólica de muchos reclamos. Los maestros instalaron una gran carpa frente al Congreso Nacional y mantuvieron grupos de maestros ayunando (durante tres o cuatro semanas cada grupo) con el apoyo de otros actores, de visitantes internacionales, músicos, artistas, periodistas, etcétera. La “carpa docente” se levantó cuando asumió el gobierno de la Alianza, en 1999, pues las nuevas autoridades habían estado muy comprometidas con las luchas de los docentes y habían prometido aumentar el presupuesto para la educación pública.

La “carpa” fue, tal vez, la protesta que mostró con mayor claridad cómo el reclamo sindical podía articularse con los nuevos movimientos sociales que estaban surgiendo. El periodo estuvo atravesado por esta nueva protesta, que se había iniciado en mayor medida en el interior. Fue una década de lucha por la defensa de derechos adquiridos, de patrimonios acumulados por generaciones –como los campos de los productores familiares– por la preservación de posiciones sociales que habían permitido una cierta educación, salud y vivienda.

A diferencia de la década de 1970, cuando la lucha social buscaba expandir derechos o modificar una sociedad que se consideraba injusta, la de los años noventa pretendía mantener los derechos y patrimonios que se poseían. El temor a las categorías pontificadas por el Banco Mundial –“excluidos” o “nuevos pobres”– se convirtió en un acicate para protestar, lo cual se ve claramente en la lucha de base sindical, donde los reclamos más frecuentes al sector empresario fueron por el mantenimiento de la fuente de trabajo. Pero también en los movimientos de base social se ve que reclamaban ya por trabajo (perdido o no encontrado), por no perder las casas, las tierras, etcétera.

Se protestó por muchas de las decisiones tomadas por el Gobierno, quien desreguló los espacios económicos y de la seguridad social, socavando instituciones generadas en las primeras décadas del siglo XX (son las que aparecen en el gráfico como causas “políticas”); también se protestó por decisiones de la Justicia, que se subordinó fuertemente al poder económico y político (“Justicia”); por las medidas económicas, que disminuyeron el presupuesto para el gasto social (“económicas”); por nuevas fuentes de trabajo o planes de trabajo para los desocupados (“trabajo”); por el mantenimiento de la educación pública (“educativas”); y toda la gama de reclamos de matriz cívica que son, quizás, las que intentaron la expansión de libertades, seguridades públicas y derechos (“sociales”).

Las nuevas protestas de base social se iniciaron en el interior del país; entre ellas consideramos al movimiento de desocupados, a los movimientos del sector agrario (al margen de los tradicionales corporaciones), a los movimientos de consumidores de servicios privatizados.

El movimiento de desocupados (ahora denominados “piqueteros”) se inició en 1996 en una provincia del sur del país: Neuquén. Los cortes se repitieron al año siguiente, en 1997, y desde entonces se expandió a otras provincias lejanas, ubicadas en el norte del país, hasta que en 2000 llegó a la provincia de Buenos Aires.

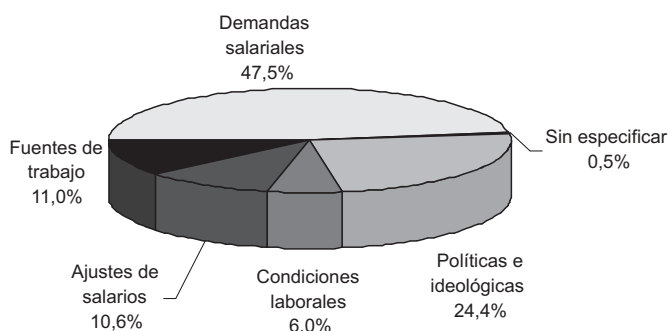
Los desocupados impusieron un género de protesta –los cortes de ruta– con unos actores centrales: “los piqueteros”. El montaje es siempre el mismo: se corta una ruta de importancia para la circulación de productos, con fogatas realizadas con cubiertas de vehículos o materiales similares; los hombres se turnan (sobre todo, durante la noche) y las mujeres se ocupan de conservar calientes la comida y la bebida. Son apoyados por otros actores de la región (docentes, empleados estatales, etcétera) y reciben apoyo de terceros (religiosos, periodistas y dirigentes gremiales y políticos). Generalmente, negocian la cantidad y la regularidad de los “planes Trabajar” con funcionarios provinciales o nacionales. En la provincia de Salta, desde 1997, se realizaron cortes de rutas casi todos los años y se ha logrado constituir una organización que incluye proyectos productivos de diversos tipos (véase Barbeta y

Lapegna, 2001). Los “piqueteros” de la provincia de Buenos Aires comenzaron los cortes de ruta en forma sistemática en el año 2000 y han mantenido la misma estética y *performance* de sus compañeros del norte del país.

Los movimientos de campesinos y *farmers*, así como los de campesinos indígenas, fueron muy importantes durante la década y lograron articularse con los movimientos de los sectores empobrecidos de las ciudades (véase Grupo de Estudios Rurales, 2001). La lucha se centró en la tierra:

1. para recuperarla, a través de una legislación que finalmente estableció reparaciones históricas para las poblaciones indígenas;
2. para acceder a ella, lucha que llevan a cabo los movimientos de campesinos de las regiones del norte del país; o
3. para no perderlas, que fue el caso de un grupo de mujeres que se opusieron a los remates de sus tierras endeudas (véase Giarracca y Teubal, 2001).

Gráfico II. Causas de los Conflictos 1993-2000



Fuente: Consultora de Investigación Social Independiente (CISI), pág. 76

En el interior, fueron muy importantes las luchas de vecinos de poblados de tamaño intermedio cuando se llevaron a cabo procesos de privatización. La más conocida es la realizada, desde 1995 a 1998, por poblaciones del sur de Tucumán, que terminó con la retirada de una gran empresa francesa que había ganado la licitación para privatizar el servicio de agua potable en la provincia (véase Giarracca y Del Pozo, 2002).

La profundización de la protesta y el levantamiento popular

A lo largo de aquellos años, las severas políticas de ajustes, el número creciente de pobres y la pelea sin cuartel para conseguir los planes sociales por parte de los desocupados fueron generando un clima de profundo rechazo hacia la clase política. A fines de noviembre de 2001, la medida conocida como “el corralito” exasperó a los ahorristas (la mayoría de ellos con ahorros inferiores a los diez mil dólares, con una clara inserción en los sectores medios urbanos)²⁴.

La semana que comenzó el lunes 17 de diciembre sumó diversas acciones y protestas, fenómenos de naturaleza muy distinta:

1. protestas en las provincias, del mismo tipo que describimos en el apartado anterior;
2. nuevas protestas de comerciantes y ahorristas de Buenos Aires pero como vimos en “la trama” también en todo el país, debido a la situación económica generada por el “corralito”
3. rebeliones contra autoridades municipales y provinciales por falta de pago; y
4. los saqueos a supermercados, en varias provincias, en busca de alimentos (ver “la trama”).

Es decir, hubo viejas y nuevas protestas y, además, hubo saqueos por parte de los sectores más desesperados.

Lo que más inquietó al gobierno de Fernando De la Rúa fue, justamente, el desorden generado por los saqueos, que algunas fuentes consideran que se venían dando desde varios días atrás. Esta situación se dio en muchas provincias y en la ciudad capital; en algunos casos, comenzaba con reclamos de grupos de desocupados y la intervención de autoridades nacionales y provinciales evitaba el saqueo, convenciendo a los dueños de los negocios de repartir bolsones de comida. En todos los casos, hubo represión y fuertes enfrentamientos entre “saqueadores” y fuerzas policiales, en las provincias de Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. El saldo fue de 40 muertos reconocidos (a medida que avanzan las investigaciones, se suman más), 140 heridos (de los cuales 76 eran policías) y 551 detenciones.

²⁴ La situación individual de los ahorristas guarda verdaderos dramas: se trataba de ahorros para afrontar enfermedades terminales, últimos ahorros de ancianos, ahorros transitorios de quienes habían vendido la casa y estaban por comprar otra, etcétera.

En la tarde del 19 de diciembre, el gobierno nacional informó que pondría en marcha un plan de emergencia alimentaria, pero se aprovechó este comunicación para denunciar “activismo” en el grupo de los saqueadores, lo cual preparó el terreno para el anuncio, horas más tarde, del estado de sitio. En efecto, a las pocas horas, el Presidente firmó el decreto del Poder Ejecutivo que establecía el estado de sitio por treinta días en todo el territorio nacional. La respuesta de la población fue inmediata: el desconocimiento de la medida.

A nuestro juicio, lo que sucedió a partir de ese momento marca un quiebre con aquello que se venía dando desde comienzos de la semana, por muchas razones. En primer lugar, es el producto de una acción colectiva particular, la desobediencia civil, en tanto se desconoció una de las medidas que más atemorizaron en otras épocas a la población civil: el estado de sitio. En segundo lugar, la salida de los vecinos de Buenos Aires no se hizo por reclamos sectoriales, como había ocurrido durante todo el día (los ahorristas, los comerciantes, los maestros que no habían cobrado, etcétera) sino que se clausuraba cualquier reclamo sectorial y cualquier identidad social: salieron todos a la calle espontáneamente, desde el espacio privado, para encontrar en el transcurrir de esa noche la consigna que les daría nuevamente una identidad colectiva: “Que se vayan todos”. Con ese grito se dramatizaba aquello que marcó el carácter disruptor de la marcha: una falla en el sistema de representación político, cuyas consecuencias en aquel momento resultaban impredecibles.

La jornada posterior, la del 20 de diciembre, estuvo signada por la impotencia de un Gobierno desobedecido y deslegitimado, que a lo único que atinó fue a la violencia más extrema, cobrando un fatal número de víctimas. El gobierno provisional de Rodríguez Saa, elegido por la Asamblea Legislativa, renunció la semana siguiente después de otras marchas de características semejantes a las del 19 a la noche. El 1° de enero de 2002, se hizo cargo de la conducción del país Eduardo Duhalde, quien gobernó hasta el 25 de mayo de 2003, fecha en que asumió como presidente electo Néstor Kirchner.

Las asambleas barriales

Después del 19 y 20 de diciembre, se sucedieron varias marchas con “cacerolazos”. La primera fue a la semana de asumir Rodríguez Saa y el desencadenante fue la presencia en el gabinete de un ex intendente de Buenos Aires y sus reiteradas apariciones en público haciendo alarde de su pasado como dirigente corrupto y cuestionado. Los porteños volvieron a salir a la calle, indignados con el nuevo Gobierno. Esa misma noche se conoció la dimisión del personaje cuestionado. A los dos días, renunciaba el propio Rodríguez Saa.

Estos dos momentos de la movilización popular –la que logró la renuncia de De la Rúa y la que empuja al ex intendente y luego al nuevo presidente a renunciar– consolidaron la idea de que la gente en las calles, movilizada y reclamando, recuperaba el poder que antes había entregado a sus representantes y podía generar cambios en el ámbito del Estado. Los porteños descubrieron su poder destituyente y se plantearon su capacidad instituyente.

Desde los primeros días de enero, paralelamente al estreno del tercer gobierno, comenzaron a discutirse estas cuestiones y a generarse tres nuevas formas de acción derivadas del 19 y 20 de diciembre:

- a. las asambleas vecinales,
- b. el reclamo semanal para que renunciara la Corte Suprema de Justicia, y
- c. una marcha –“cacerolazo”– semanal bajo la consigna “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Tanto el “cacerolazo” semanal como el reclamo frente a los Tribunales de la Nación para que renunciara la Corte Suprema se volvieron rutinarios como formas de manifestación y se agotaron al terminar el verano. Constituyeron *performances* basadas en repertorios tradicionales de los argentinos: la marcha y la gran concentración. No obstante, se le sumaban nuevas estéticas aportadas por jóvenes artistas, desde las murgas (expresiones de ritmos populares usadas en los carnavales) hasta verdaderas representaciones teatrales.²⁵ Los primeros actos contra la Corte Suprema fueron convocados por la Asociación de Abogados Laboralistas y concentraron una importante cantidad de gente. Las manifestaciones tenían la clara demanda de que renunciaran los nueve miembros de la Corte que habían sido nombrados por los distintos gobiernos democráticos y que actuaron de modo dependiente y al servicio de las necesidades del gobierno de turno, sumando, además, hechos de corrupción. Este proceso derivó en un pedido de “juicio político” por parte del Poder Legislativo, y la destitución de varios ministros de la corte.

De estas tres acciones derivadas de las jornadas de diciembre, la formación de las “asambleas vecinales” es la que trajo consecuencias más interesantes. En efecto, desde las primeras semanas de enero, los vecinos se constituyeron en asambleas por barrios en casi toda la ciudad de Buenos Aires y en algunas zonas del Gran Buenos Aires. Estas se generaron en forma espontánea y, poco después, comenzó a funcionar una gran asamblea interbarrial (asamblea

²⁵ En una de las concentraciones y marchas contra la Corte Suprema, nueve jóvenes artistas disfrazados de presidiarios, portando carteles con los nombres de los ministros de la Corte, parodiaron un juicio en las escalinatas del edificio.

de asambleas) en el Parque Centenario de la ciudad de Buenos Aires. Hasta allí llegaban representantes rotativos de cada barrio, con las propuestas consensuadas. Al final de cada domingo, se votaban las propuestas del día y aquellas que lograban ser aprobadas se constituían en mandatos para el conjunto de las unidades participantes.

Estos grupos deliberativos eran tan variados como lo son los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Desde enero de 2002, se trataron y discutieron temas muy diversos y generales que con el correr de los meses se abandonaron o se dejaron como consignas constantes y se abordaron otro tipo de cuestiones, relacionadas con problemas que emanaban de la crisis de las instituciones del Estado. En efecto, en las primeras semanas fue habitual que se votaran propuestas tales como “No pagar la deuda externa” o “Que se vaya Duhalde”. Con el tiempo, cada asamblea o conjunto de asambleas generó discusiones acerca de estos temas, pero se orientaban cada vez más a resolver problemas referidos a la salud, el consumo, el pago de los servicios, etcétera.

El aspecto más interesante de las asambleas, a nuestro juicio, es la implementación de otro modo de pensar la política: ya no sólo como la delegación de poder que se efectúa en cada sufragio para que un gobierno tome decisiones en nombre de “una mayoría” sino como una participación permanente en el espacio público, convirtiendo a éste en el lugar de la deliberación, el encuentro, la toma de decisiones, el rechazo de acciones gubernamentales. Las asambleas se organizaron de modo horizontal en tanto existía un rechazo a las formas tradicionales de representación. Con el tiempo y la participación de los partidos de izquierda, esa horizontalidad se diluyó y comenzaron las prácticas tradicionales.

En los comienzos –los primeros cuatro meses, más o menos–, la palabra circulaba por rigurosos turnos y la participación se establecía por la mera presencia, clausurando identidades que pudieran establecer cualquier forma de jerarquía. En muchas asambleas se discutieron los criterios de reunión y ni siquiera se establecieron claras marcas territoriales (por barrio). Una persona o familia podía encontrarse en un barrio que no fuera el suyo y participar en otra asamblea. Las representaciones fueron transitorias (para las interbarriales) y la idea de la vieja organización con dirigentes fue suprimida.

La presencia de los partidos de izquierda generó fuertes tensiones dentro de las asambleas y, sobre todo, dentro de la “interbarrial” de Parque Centenario. Con algunas excepciones, todos los partidos de izquierda tomaron a las asambleas y a las organizaciones de desocupados como espacios de militancia política, tratando de darles una “dirección” (que ellos evaluaban que les faltaba). Muchas asambleas rechazaron abiertamente estas actuaciones y otras fueron más tolerantes.

Las asambleas fueron las nuevas expresiones políticas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. En el interior del país, como vimos

en “la trama” fue un fenómeno menos difundido. No obstante, en el mes de setiembre de 2002, hubo dos grandes marchas en las provincias del norte bajo la consigna “Que se vayan todos”; una de ellas, en la provincia de Jujuy, reprimida con una intensidad que nuevamente superaba los límites del sistema democrático. A nuestro juicio, esta experiencia política que comienza el 19 de diciembre con el telón de fondo de la década, cubre la experiencia asamblearia, las multisectoriales provinciales, etc. y se clausura con la muerte de los dos jóvenes piqueteros (Maximiliano Kosticky y Darío Santillán) en junio de 2002 y el desesperado llamado a elecciones de Duhalde.

Los ecos del 19 y 20, cinco años después

Cuando escribimos la última versión del artículo para este nuevo libro, han pasado ya cinco años y varios meses desde aquellas jornadas del 19 y 20. Néstor Kirchner está terminando su mandato de cuatro años con una reelección asegurada (que recaerá sobre él o sobre su esposa, la senadora Cristina Fernández). Las pocas asambleas que han perdurado tienen las semblanzas de organizaciones barriales preocupadas por asuntos concretos. El movimiento piquetero, que fue el centro de las protestas en 2002, 2003 y 2004, se encuentra fragmentado: quedan algunos grupos con poca presencia pública, manejados por partidos o militantes de izquierda que le dieron forma, y otros que trabajan para el gobierno nacional. Los llamados grupos autónomos subsisten, muy reducidos, en la provincia de Buenos Aires y la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, pionera en esta categoría, se retuerce en la tensión entre la autonomía y la posibilidad de que uno de sus miembros participe en las elecciones municipales de 2007 con el partido gobernante.

Muchos consideran que esta “governabilidad” conseguida con los viejos actores de la protesta es un triunfo del grupo que rodea al presidente Kirchner por su gran capacidad de generar hegemonía y consenso. Lo han logrado con elementos disciplinantes y sin distribuir ingresos más allá de los múltiples programas sociales efectuados de modos distintos a la etapa anterior. En efecto, si bien los índices de pobreza e indigencia se redujeron drásticamente después de la subida de 2002 y 2003, siguen existiendo 10 millones de pobres y, de ellos, 3,3 millones por debajo de la línea de indigencia. El nivel de polarización social fluctúa sin bajar demasiado: el 10% más adinerado del país lo es 31 veces más que el 10% más pobre. Es decir, esta aparente “governabilidad” (para usar el término de los gobernantes) está lograda sin una política de distribución del ingreso que salpique a los sectores subalternos. Simplemente, las políticas asistencialistas se aplican con mayor eficiencia en sus dos sentidos: paliar la miseria y producir un eficiente control social de los sectores más afectados. No obstante hay que remarcar que esto último

se logra con gran despliegue de técnicas, coordinadores provenientes de grupos sociales, de un modo donde el control se transforma en “autocontrol” o “autodisciplinamiento” (véase el sugerente artículo de Raúl Zibechi, 2007).

Los sectores de medianos y altos ingresos han recompuesto sus ingresos y riquezas respectivos y gozan de la prosperidad que puede lograrse con una tasa de crecimiento económico que no baja del 8% anual. La ciudad capital, como casi todas las capitales provinciales, goza de la prosperidad que dejan el turismo y la reactivación del consumo. Un ejemplo elocuente es que nuevamente ha subido el consumo suntuario a niveles mayores que los de fines de la década de 1990.

Como decíamos antes, tampoco hubo grandes represiones (como en el gobierno de la Alianza)²⁶ pero sí formas particulares de disciplinamiento y control social. En las manifestaciones hubo numerosos detenidos y la mayoría de los activistas está procesada y tiene por lo menos una causa judicial en su contra. Las Mujeres Agropecuarias en Lucha, por ejemplo, organizadas en 1996, que pararon quinientos remates de sus tierras antes de la llegada del gobierno de Kirchner, fueron detenidas y procesadas por primera vez en setiembre de 2003, es decir, cuatro meses después de que se estrenaran las actuales autoridades, y en marzo de 2007, llegaron a los tribunales de Mercedes en un juicio por “desacato a la autoridad y lesiones leves”. Finalmente fueron absueltas. El juicio a los manifestantes que actuaron frente a la legislatura porteña, en 2004, fue paradigmático en este sentido. Los desalojos de campesinos e indígenas de sus tierras, en el interior, lejos de las cámaras de televisión, son llevados a cabo con mucha más violencia policial que la que se usaba en la década de 1990. No se respetan legislaciones nacionales ni internacionales; sin embargo, el costo interno es muy bajo. Los antropólogos han comenzado a hablar de “etnocidio”.²⁷

El interrogante que nos planteamos, entonces, es ¿por qué? ¿Por qué las protestas vuelven a ser de importancia regional y la opinión pública nacional (medios, intelectuales) no las levantan como elementos importantes del presente político? ¿Por qué los ecos del 19 y 20 se oyen y se sienten tan lejanos en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué se ha logrado construir tal consenso alrededor de este Gobierno y su modelo general de país?

La respuesta es muy compleja y difícil. En primer lugar, existe un clima continental que recupera a los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, y los califica de “progresistas”. Son administraciones que se basan en una retórica “antineoliberal”, aunque generan sistemáticas condiciones para

26 En abril de 2007, en Neuquén las fuerzas represivas asesinan a un maestro en huelga.

27 En un programa de televisión, “Los Mansos” (TN), sobre los tobas, los antropólogos entrevistados del equipo de Morita Carrasco caracterizaron la situación actual como etnocidio. En tal sentido, el último informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, 2006) muestra muy bien a qué se refieren los especialistas.

la profundización de la economía neoliberal de esta etapa del siglo XXI: entrega de los recursos naturales, arreglos bilaterales con EE.UU. y la Unión Europea, sometimiento a la política financiera internacional, etcétera. Pero vuelven a instalar “el mito del desarrollo”, la idea de un país productivo, con inversiones, con fuentes de trabajo.

Las nuevas protestas son las de los pobladores de las pequeñas ciudades del interior, campesinos e indígenas, por la defensa de los bienes naturales (Giarracca, 2007). En efecto, la asamblea de Gualaguaychú, las asambleas de autoconvocados por el “No a la minería” y la lucha de las comunidades indígenas y de los campesinos para que no les arrebaten sus tierras no han cesado y se han incrementado en toda esta década. Como ocurría en los años noventa, sólo algunas (Gualaguaychú) concentran la atención de Buenos Aires; el resto pasa desapercibido o, mejor dicho, bajo la indiferencia de la gran ciudad, que otra vez vive el mito de un desarrollo que temporalmente la favorece (como el Plan de Convertibilidad en su momento).

Por otro lado, el gobierno de Kirchner se abocó desde un comienzo a una causa muy cara a la sociedad argentina: la justicia y los derechos humanos, referidos a las atrocidades cometidas por el Estado nacional en la última dictadura militar. En este tema, desarrolló una política clara, firme y decidida y logró el respaldo de todo el espectro de organismos de derechos humanos y del “sector de movimiento” que los rodea. Este hecho influyó mucho en el apoyo de los intelectuales (sobre todo, los mayores de 50 años, o sea, la generación del Presidente y su esposa), de muchos periodistas (de los que se esperaban mayores críticas) y de gran parte de la población de sectores medios, que ha sido sensibilizada durante estos veinticuatro años acerca del sufrimiento de la generación del 70.

Para comprender la relación que tienen estos logros del Gobierno con los acontecimientos del 19 y 20, tenemos que preguntarnos qué otras posibilidades se jugaban en aquellos momentos. La rebelión y las asambleas duraron, como política en las calles, más de lo esperable. Pero ¿cómo mantenerse en las calles? ¿Cómo mantener esa capacidad destituyente-instituyente que tuvieron las primeras semanas? ¿Cómo conservar en las bases ese poder que se sustrajo del poder ejecutivo? ¿Cómo lograr que los otros poderes –legislativo y judicial– comprendieran estas nuevas expresiones políticas? Todo el andamiaje de la vieja política –izquierda, centro y derecha– se afanó para que la única salida posible fuera la del Estado, la de los partidos y la de las instituciones conocidas en el orden económico, social, educativo, cultural, etcétera. El fuerte espíritu institucionalista le propuso a la rebelión plebeya y anárquica volver a un orden y procuró asustarla diciéndole que el caos era peligroso, que hombres y mujeres en las calles era una señal sumamente inquietante.

Zygmunt Bauman (2005) utiliza dos conceptos, *societas* y *comunitas*, para referirse a la tensión siempre presente entre orden, jerarquías, estructuración, por un lado, y la espontaneidad, creatividad, autoorganización, fraternidad y rebeldía caótica, por el otro. En el análisis de estos últimos aspectos, siempre posibles en los grupos humanos, desde el orden (*societas*) aparecen como el reinado de la anarquía. No obstante, agrega el autor, la posibilidad de la *comunitas* depende de la imaginación humana, de su inventiva y coraje para romper la rutina (lo sedimentado) y aventurarse por caminos inexplorados. Tanto el mercado como el Estado invaden y colonizan la *comunitas*, por lo que ésta implica para la rutina asistida por el poder y por su escandalosa capacidad productiva y potencial autosuficiencia. Son espacios que mercado y Estado despojan de todo valor; los corren de la atención pública, los inferiorizan.

Cuando la *comunitas*, la política en las calles, los puentes y las plazas logran subsistir por mucho tiempo, los antiguos actores se preocupan y aparecen las viejas instituciones “para poner orden”. Los mecanismos son múltiples: se les resta apoyo a aquellos, se los aísla, se los reprime y judicializa. Se les buscan “direcciones revolucionarias” o partidos de “centro-izquierda” o de “izquierda independiente” para encauzarlos. Si lo que está en cuestionamiento son las dos instituciones básicas de esta sociedad, Estado y mercado, aparecen mecanismos inesperados para volver al orden y recordarnos que otros “desarrollos” económicos u otros Estados más amistosos son siempre posibles. Por eso es interesante observar cómo se logró encauzar el cuestionamiento radical al Estado del 19 y 20. Como dice Badiou (2003), cuando “el movimiento” se opone peligrosamente “al estado” (el autor juega con la dualidad de sentidos de los términos), ¿cuál es el mejor modo de terminar con el movimiento? Las elecciones. La vieja política siempre gana las elecciones porque están hechas para ella, dice el autor.

En la actualidad, aparecen otros cuestionamientos fuertes, pero esta vez a otras instituciones además del Estado: a las actividades económicas basadas en los recursos naturales (véase Giarracca, 2007). A nuestro modo de ver, aquí reside la continuidad más fructífera entre aquellos momentos de la rebelión y el presente: las asambleas que ya no están en las plazas porteñas sino en Esquel, Catamarca, San Juan, Gualeguaychú, luchando contra la economía extractiva y depredadora, luchando contra el mercado de esta etapa del neoliberalismo y denunciando al Estado como socio (como también lo fue de las privatizaciones en los noventa). Lo hacen con tenacidad y permanencia y ponen el tema del desarrollo (la gran “tragedia del desarrollo”) en la agenda pública.

Los significados y consecuencias (intervenciones) políticas de los cuestionamientos radicales que se hacen esporádicamente al Estado, al mercado y a las viejas instituciones en general, tanto en la Argentina como en muchos

otros países de América Latina y del mundo, no son de fácil comprensión. Es difícil pensarlos y entenderlos desde los paradigmas epistemológicos y sociales que, a pesar de sus agotamientos, tienen vigencia. Los nuevos aportes teóricos como el de la “colonialidad del poder y del saber” (Quijano, 2000), los desafíos que ofrecen otras epistemologías del conocimiento, de “frontera” (Gerfoguel, 2006), las deconstrucciones de los conceptos de “progreso”, “desarrollo”, “mercado”, “educación”, “tecnociencia” (Illich, 2006; Esteva, 2002, Sibylla, 2006) y otros modos de pensar la política (Badiou, 2003) se encaminan al esfuerzo de descifrar estos fenómenos que irrumpen desde las márgenes y que periódicamente conmueven al mundo.

Bibliografía

AZPIAZU, Daniel (1998), *La concentración en la industria argentina a mediados de los noventa*, Buenos Aires, Flacso-Eudeba.

AZPIAZU, Daniel et al. (1986), *El nuevo poder económico en los años 80*, Buenos Aires, Legasa.

BADIOU, Alain (2003), “Conferencias en Buenos Aires”, en *Acontecimiento*, Edición Escuela Porteña, Buenos Aires.

BARBETTA, P. y LAPEGNA, P. (2001), “Cuando la protesta toma forma: los cortes de ruta en el norte salteño”, en Giarracca, N. y colaboradores, *La protesta social en la Argentina*, Buenos Aires, Alianza Editorial.

BASUALDO, Eduardo (2000), *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa*, Buenos Aires, FLACSO, IDEP, Universidad Nacional de Quilmes Ediciones.

BASUALDO, Eduardo et al. (2002), *El proceso de privatización en Argentina. La renegociación con las empresas privatizadas*, Buenos Aires, *Página/12* y Universidad Nacional de Quilmes Ediciones.

BRIONES, Claudia et al. (2002), “Ruidos que hablan broncas. El decir y el hacer de las cacerolas en Argentina”, Tercer Encuentro Anual de “Performance y políticas en las Américas. Globalización, migraciones y espacio público”, Lima.

COLOMBO, Ariel (2002), “Estas rebeliones”, disponible en Web: <http://www.forodesobedienciacivil.com>

COLECTIVO SITUACIONES (2002), *19 y 20. Apuntes para el nuevo pensamiento social*, Buenos Aires, Ediciones de Mano en Mano.

CHERESKY, Isidoro (2002), “Autoridad política debilitada y presencia ciudadana de rumbo incierto”, en *Nueva Sociedad*, N° 179, mayo-junio, Caracas.

ESTEVA, Gustavo (2000), “Desarrollo”, en Sachs, W., *Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder*, México, Galileo Editorial.

GIARRACCA, Norma y colaboradores (2001), *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Buenos Aires, Alianza Editorial.

GIARRACCA, N. y TEUBAL, M. (2001), "Crisis and Agrarian protest in Argentina. The Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha", en *Latin American Perspectives*, Vol. 28 N° 6, Sage Publications, EEUU.

GROSFOGUEL, Ramón (2006), "La descolonización de la economía política y los estudios poscoloniales. Transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global", en *Tábula Rasa*, N° 4, enero-junio, Colombia.

CISI (Gonda, Alejandro) (2000), "El Conflicto Social dentro del plan de convertibilidad. Argentina 1991-2001", Informe de la Consultora de Investigación Social Independiente.

HARDT, M. y NEGRI, T. (2002), *Imperio*, Buenos Aires, Paidós.

HERSHBERG, Eric (2002), "Why Argentina crashed - and is still crashing", in *Nacla*, Vol. XXXVI, N° 1, July/August, USA.

ILLICH, Iván (2006), *Obras reunidas*, México, Fondo de Cultura Económica.

LOZANO, Claudio (2002), *Catástrofe social en Argentina. La situación a junio del 2002*, Buenos Aires, Instituto de Estudios y Formación de la CTA.

LEWKOWICZ, Ignacio y asociados (2002), *Sucesos Argentinos*, Buenos Aires, Notas ad-hoc.

QUIJANO, Aníbal (2000), "Colonialidad del poder: eurocentrismo y América Latina", en *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*, Buenos Aires, CLACSO.

PETRAS, J. y VELTMEYER, H. (2002), *Argentina: entre la desintegración y la revolución*, traducción de Jorge Capelán y Raúl García, extraído de: asambleau-ba@gruposyahoo.com.ar

ROCK, David (2002), "Racking Argentina" en *New Left Review*, 17, sep-oct., U.K

SCHUSTER, Federico et al. (2002), "La Trama de la Crisis", Informe de Coyuntura N° 3, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.

SCRIBANO, Adrián (1999), "Argentina "cortada": cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste" en López Maya, M., *Lucha popular, democracia, neo-liberalismo: protesta popular en América Latina en los años del ajuste*, Caracas, Nueva Sociedad.

SIBILIA, Paula (2005), *El hombre postorgánico: cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

TARROW, Sidney (1997), *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza Universidad.

TEUBAL, Miguel (2000/2001), "Structural Adjustment and Social Disarticulation: The Case of Argentina", en *Science & Society*, Vol. 64, N° 4, winter, New York.

TEUBAL, Miguel (2001b), "From Import Substitution Industrialization to the 'Open' Economy in Argentina: The Role of Peronism", en J. Demmers, A.E. Fernández

Jilberto and B. Hogenboom (Eds), *Miraculous Metamorphoses. The Neoliberalization of Latin American Populism*, London, New York, Zed Books.

ZIBECHI, Raúl (2003), *Genealogía de la revuelta*, Buenos Aires, Letra Viva.

ZIBECHI, Raúl (2007), “El arte de gobernar los movimientos”, presentación al seminario “Telón de Fondo II”, Buenos Aires, 27, 28, 29 de abril.

La trama: una propuesta metodológica

Daniela Mariotti

“...Una acción es un comienzo sólo en una historia que ella inaugura”

Paul Ricoeur

I

Desde hace más de diez años, los miembros del Grupo de Estudios Rurales venimos registrando y analizando las acciones colectivas de protesta en el mundo rural, protagonizadas por aquellos sujetos que se sintieron excluidos, agraviados y desterritorializados desde la última década del siglo pasado. Estas acciones colectivas de protesta llevadas a cabo por desocupados, trabajadores estatales, docentes, campesinos, medianos productores, gremios rurales, comunidades indígenas, entre otros, se fueron intensificando a medida que las consecuencias del modelo económico aplicado por la administración Menem-Cavallo, se pusieron de manifiesto. Reclamaban mayormente la acción del Estado como algo exterior al modelo económico vigente y *a posteriori*, cuando algo había “fallado”.

La intensificación de la desigualdad social, unida a un incremento de la pobreza y de la polarización social, y la degradación de la educación y de los servicios de salud, diluyeron paulatinamente la capacidad del Estado para articular los intereses y demandas de los distintos grupos sociales. Esta situación, sumada a una fuerte crisis de representación, se plasmaron en el acontecimiento del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Los días previos a las jornadas de diciembre 2001, momento que supuso la maximización de la crisis económica y de la crisis de legitimidad del modelo basado en la valorización financiera (Basualdo, 2002) contuvieron diversas manifestaciones sociales tanto en Buenos Aires, como en las provincias. Las demandas laborales de tipo sindical y gremial (atrasos salariales, aguinaldos, planes de empleo, etc.) por fuentes de trabajo, por cambios en la política económica, por alimentos y asistencia básica fueron sostenidas por una multiplicidad de actores. Observábamos durante esos acontecimientos la persistencia y permanencia de los mismos sujetos que ya venían actuando en la escena pública y que continuaban sosteniendo los mismos reclamos puntuales y sectoriales. Pero por otro lado, éramos testigos de la emergencia de una voz, tanto en los actores tradicionales de la protesta como también por nuevos, que más que reclamar, expresaba el hartazgo y oprobio hacia la

política, los políticos y el modelo de vida colectivo sostenido durante más de una década.

Las expresiones de protesta en el interior del país, desde mediados de diciembre de 2001 fueron generando una dinámica en la que el reclamo local simbolizó un fuerte cuestionamiento a la legitimidad del modelo político, social y económico y que por ende los soportes espaciales de la cartografía de la protesta tradicional se desdibujaron para crear nuevos.

Decidimos, entonces trabajar en la reconstrucción de la Trama de la crisis de diciembre de 2001, como respuesta, entre otras cosas, a los nuevos interrogantes surgidos a la luz del análisis de una base de datos construida sobre las expresiones de protesta de doce provincias del país durante el mes de diciembre de 2001, enero, febrero y marzo de 2002. Ese instrumento que en otras oportunidades nos había permitido caracterizar los ciclos de protestas y sus movimientos, los protagonismos alternantes de los actores, las fases de latencia y demás aspectos de la protesta rural, no lograba para este periodo particular, más que marcarnos ritmos, momentos de atenuación o por el contrario momentos de intensificación de las expresiones de protesta. En un escenario altamente convulsionado en el que día tras día, aparecían nuevas subjetividades expandiendo la cartografía de los reclamos, de las necesidades, de la exclusión, así como de las potencialidades, se multiplicaban los indicadores y las variables de nuestra base, sin poder ordenar claramente las heterogeneidades.

Un primer elemento que trascendía las posibles conclusiones de la base de datos fue la categoría “sujetos de la protesta”, es decir los actores individuales o colectivos que manifestaban alguna demanda o reclamo en el espacio público, ya que más del 55% eran “vecinos” y “desocupados”. La categoría vecinos aludía a sujetos involucrados en movilizaciones, cacerolazos, saqueos, asambleas, entre otras acciones. “Vecinos”, nominación otorgada por los medios, se trataba unas veces de aquellos que realizaban saqueos demandando alimentos, otras veces protagonizaban cacerolazos para que se les devolvieran los fondos o pedían cambios en las políticas económicas e incluso “que se vayan todos”. Es decir en función del contenido de la demanda, el tipo de acción realizada y el actor demandado, pudimos observar que la denominación “vecinos” anunciaba sujetos cuyos componentes identitarios eran difícilmente homologables, podían o no pertenecer a una institución estatal o privada; podían o no, ser desempleados; pertenecer o no a un movimiento social o político. Sabíamos al menos que se trataba de la experiencia de una territorialidad compartida.

Un segundo problema surgió también en torno a la categorización de los “saqueos” como una acción colectiva de protesta. Los elementos que hacían discutible la incorporación a la base de datos o no de esta forma de protesta

tenían que ver con las explicaciones circulantes sobre este tipo de manifestaciones. Por un lado se afirmaba que eran resultantes de conspiraciones organizadas por los opositores al oficialismo actuante, por otro lado se los inquiría por su componente violento y delictivo y finalmente se los desacreditaba por ser tan sólo una expresión desesperada de una gran cantidad de personas. La intensa movilización popular que albergaron los saqueos se produjo porque las mujeres, los niños y los hombres que participaron tenían hambre; sin embargo, inferir que actuaron irracionalmente y en un marco de desorden absoluto implica no considerar que, aunque limitado en sus alcances, perseguían un objetivo, apelando para ello a modalidades específicas de organización. Si las características de una crítica situación económica contribuyeron a debilitar al gobierno, brindando un marco de “oportunidad” coyuntural inigualable, la importante expansión de la participación popular en los saqueos sólo puede comprenderse en el marco de la ausencia de sanción inmediata (Aguila y Viano, 2007).

Decidimos pensar entonces este tipo de acciones, en clave con Álvaro García Linera, para quien, las crisis estatales generales producen, de diversas maneras, procesos de auto-agregación social cuya expansión, densidad y eficacia acompañan a cada una de las etapas de esas crisis. Los saqueos, como procesos de auto-agregación, son expresiones de sujetos sin organización previa que convergieron en una acción disruptiva a la que no necesariamente dieron continuidad. Este tipo de acciones son, siguiendo al autor, fruto de procesos de modernización que han suturado “. . .una individuación vaciada de un desarraigo de las tradiciones sin sustituto cognitivo, de un porvenir cerrado, sin rumbo y sin más meta que el sobrevivir a como dé lugar. Esta muchedumbre es la coalición temporal y facciosa de individuos provenientes de los más diversos oficios que no le deben nada a nadie, ni al sindicato, ni al gremio ni a la junta de vecinos, y mucho menos a un Estado que los ha abandonado a su suerte o sólo existe para exaccionarlos. Son personas nacidas en la precariedad, la exclusión y el cierre a cualquier ascenso social planificable, y están presentes tanto en Los Ángeles como en El Alto, en Caracas como Buenos Aires, en La Paz o Santa Cruz” (García Linera, 2003:58). El principal rasgo de los saqueos sea tal vez la resistencia, la espontaneidad y su corta duración, pero por otro lado son el recurso político a la mano de los sujetos carentes de poder, no representados por las formas políticas tradicionales siempre disponible, que puede volver a surgir irrumpiendo de manera radical y manifestando su inconformidad contra lo existente (della Porta y Diani, 1999).

Otro elemento que comportaba a la heterogeneidad de las jornadas era la dinámica de las distintas formas de protesta en las provincias y entre los actores, es decir, mientras que el “cacerolazo del 19 y 20” se convirtió en

la forma simbólica de los vecinos que protagonizaron la rebelión en Buenos Aires, en las provincias fue empleada en otro tiempo, para manifestar otras demandas y así como los desocupados abandonaron temporalmente los cortes de ruta para sumarse a las movilizaciones y los saqueos. Lejos de encontrarnos con un escenario homogéneo, las expresiones de protesta nos enriquecían con una diversidad de repertorios de acciones cargados de simbolismos particulares (Mariotti y Wahren, 2005:475). Nos preguntábamos en ese entonces si las protestas de las provincias eran ecos que replicaban los acontecimientos de Buenos Aires, confluyendo en lo que algunos han denominado “el argentinazo”, o si se gestaron revueltas autónomas, con fueros propios, cuyas demandas y demandados respondían a lo cotidiano local y cuyo particularismo hacía inviable toda comprensión general.

Por otra parte, durante el mes de junio de 2002 salió publicado un trabajo del Equipo de Investigación que dirige el Prof. Schuster, denominado “*La trama de la crisis. Modos y formas de protesta social a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001*”. El mismo, muy próximo aún a los acontecimientos, se proponía a través del armado de una cronología, configurar un relato histórico de los hechos que precipitaron en la crisis de la Argentina. Focalizado en los vaivenes de la protesta social que se experimentó en Buenos Aires, durante aquellos días, aportó minuciosamente en la reconstrucción del contexto político e institucional y sobre todo nos inspiró con la perspectiva metodológica empleada, que no buscaba dar cuenta de la homogeneidad y unidireccionalidad del fenómeno de la crisis argentina de diciembre de 2001 si no por el contrario acompañar la vertiginosidad, heterogeneidad e irrupciones de los acontecimientos desde la narración. El enfoque teórico-metodológico empleado en el trabajo citado y que actuó como inspiración de este documento, consiste en demostrar que el discurso narrativo provee de elementos de inteligibilidad de la realidad histórica que resultan constitutivos de la propia comprensión humana del pasado y su presente (2002:2).

Dadas las preguntas surgidas una vez finalizada la base de datos y con el antecedente metodológico provisto por el trabajo mencionado, consideramos que la posibilidad de hilvanar una trama, de componer un relato, echaría luz al desenvolvimiento de los hechos en doce provincias del país.

II

Como bien señalan algunos estudios sobre hermenéutica y “narratología”, no puede comprenderse la conexión de acciones complejas sin la realización de un relato. Los acontecimientos de la vida, las experiencias, se tornan comprensibles, si se las ubica dentro de una *trama* o de la *intriga* de un relato (véase Ricoeur, 1996-2006). Trama significa en griego por un lado, historia

imaginaria y por otro, historia bien construida. Este último sentido toma Ricoeur, para resolver la cuestión del tiempo, en tanto que no se presenta como una estructura estática, sino por el contrario como una operación, un proceso integrador que sólo se realiza en el lector o en el espectador, es decir, en el receptor vivo de la historia relatada. Al hablar de proceso integrador, Ricoeur se refiere al trabajo de composición, de construcción, de creación, que confiere a la historia relatada una identidad que se puede llamar dinámica (1996-2006). A través de una trama se entretiene la historia de los múltiples incidentes que se suceden uno detrás de otro pero no como una simple enumeración, en un orden serial o sucesivo, sino como una estructuración que transforma esos incidentes y acontecimientos, en un todo inteligible. Se puede lograr una comprensión de esta composición por medio del acto de *seguir* una historia. Seguir una historia es una operación muy compleja, guiada sin cesar por expectativas acerca de la continuación de la historia, expectativas que corregimos o confirmamos a medida que se desarrolla la historia, hasta que coincide con la conclusión” (Ibidem, 1996:66-67).

Ricoeur parte de la noción aristotélica de trama, según la cual el argumento tiene una función estructuradora de la acción. La narrativa permite la comprensión del mundo que nos rodea de manera tal que las acciones humanas se entrelazan de acuerdo a su efecto en la consecución de metas y deseos. En otras palabras, si por un lado parece no haber comprensión del tiempo humano fuera de su inserción en un marco narrativo, por otro lado la narrativa sería la única forma cognoscitiva con que contamos para entender la causalidad en relación a las acciones de los agentes sociales.

Un relato, dentro de la propuesta teórica de Ricoeur, es creación de algo “...que presenta los trazos de composición y de orden que faltan en la vida cotidiana” (Balaguer, 2002:94).

La construcción de una trama, presupone entonces la selección y encadenamiento de los acontecimientos y de las acciones narradas; y la realización de una síntesis de lo heterogéneo, que surge de la disposición de los hechos en una historia, pues en la dinámica del construir la trama se extrae de “un polvo de acontecimientos un relato unificado” (Ricoeur, 1996:28). Lo que nos interesa subrayar de esta propuesta es el carácter de ensamblaje, de estructuración y de disposición de hechos que provee la trama, y que por ende se presenta como el paradigma adecuado para la representación y comprensión de las acciones (Balaguer, 2002:97).

Polletta sostiene que el punto central de la narrativa se encuentra en la lógica que impone la trama ya que hace comprensibles los eventos que anteceden a la conclusión de la historia. Sin la trama, los eventos serían meros momentos discontinuos y separados más que episodios en el desarrollo de una historia. La configuración temporal y las funciones evaluativas de la trama dan cuenta de que el rol de la narrativa no es sólo representar la realidad

sino más bien construirla (Polletta, 1998:421-422). Considera la autora, que nuestra tendencia a contar historias es básicamente para hacer inteligible aquello que es extraño y que potencialmente puede incomodarnos. Ellos son los momentos en los que la agencia desestabiliza la estructura, y aquello que no es dado se vuelve precario. Las vidas se interrumpen, los espacios se reacomodan, las relaciones que estructuran el mundo cotidiano se desvanecen, y los viejos cálculos de interés y riesgo de repente pierden su fuerza. En ese contexto, las narrativas sirven para contener la disrupción en un formato familiar, para trocar lo anómalo en la novedad (Ibidem, 423).

Finalmente una trama es una estructuración que transforma los incidentes y acontecimientos en historia. Estos acontecimientos, en el sentido de “momentos de novedad” (Birulés, en Aravena, 2005) no se deducen de sus antecedentes, sino por el contrario, son ellos los que iluminan los elementos que han cristalizado para generarlos, retrospectivamente y bajo la forma de relato. Es en el relato, en la creación de la intriga, donde finalmente va a constituirse la significación.

Una primera aproximación a la construcción de una trama, es en efecto, la reconstrucción de los acontecimientos tal cual podemos registrarlos en un periódico u otros materiales. Los periódicos son fuentes importantes para tal fin aunque no son los únicos y comportan sesgos que hay que controlar metodológicamente (buscar en varios periódicos, conocer las condiciones de producción de un diario, etc.). Los diarios utilizados para la realización tanto de la trama como de la base de datos fueron: La Gaceta (Tucumán), El Tribuno (Salta), El Liberal (Santiago del Estero), El Pregón (Jujuy), El Territorio (Misiones), Diario Norte (Chaco), El Diario de Paraná (Entre Ríos), La Voz del Interior (Córdoba), El Litoral (Santa Fe), Los Andes (Mendoza), El diario Río Negro (Río Negro y Neuquén), y los diarios nacionales. La selección de las doce provincias con las que hemos trabajado, estuvo ligada a la efectiva disponibilidad del material periodístico. En ese momento varias provincias no enviaban sus periódicos a Buenos Aires, ni los colocaban en el espacio virtual. Es decir, es una muestra altamente representativa del conjunto de las provincias argentinas.

La reconstrucción de los hechos nos permitió contar con una *cronología* que, en primera instancia, guarda cierta lógica de tiempo lineal. Esta información a simple vista resultó en una enumeración de sucesos que contienen personajes, situaciones, elementos de contorno. Sin embargo una vez generada la *cronología* de sucesos significativos y realizados los controles lógicos temporalmente, de coherencia entre sucesos, etc. hemos reconstruido el mentado proceso, en función de algunos criterios.

Toda narración significa una selección, y si la primera fue el tipo de fuentes, la segunda fue la temporal. La base de datos nos permitió constatar dos momentos de máxima expresión de la protesta. El primero en torno a

los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2001, que se calmó abruptamente en los días correspondientes a las “fiestas de navidad y año nuevo”, 24 y 25 de diciembre y 1 de enero de 2002. Y el segundo momento, el 16, 17 y 18 de enero de 2002, en el marco del endeble gobierno de Duhalde, que pretendía restablecer la “governabilidad”, en el contexto porteño signado por la ocupación casi permanente del espacio público con cacerolazos masivos, marchas semanales contra la Corte Suprema de Justicia, los “que se vayan todos” y la expansión de un “campo de experimentación social” que se desplegaba en las asambleas barriales, las fábricas recuperadas y los maridajes entre diversos sectores sociales. A partir de esos días, corroboramos un decaimiento paulatino en las expresiones de protesta. Estos cortes temporales finalmente nos fueron útiles a la hora de delimitar el período de tiempo de nuestra Trama. A partir del mes de febrero, momento en el que finalizamos nuestro relato, comenzó a transformarse el espíritu de estos acontecimientos que mezclaba potencia, ruptura radical de lo cotidiano, incertidumbre y por ende la excepcionalidad que caracterizó a la protesta de estas jornadas fue diluyéndose dando lugar a dos procesos antagónicos por un lado, la conformación de lo que hemos denominado “espacios de traducción” (De Sousa Santos, 2001), como aquellos en los que se propicia el encuentro entre actores sociales, y en los que se hacen inteligibles las luchas y demandas de aquellos que se articulan (Multisectoriales, “Piquete y Cacerola”, fábricas recuperadas, asambleas barriales, etc.). Esos espacios de traducción funcionan tanto en el nivel del discurso, como en el de la acción, puesto que requiere de prácticas solidarias que reconocen la lucha del otro como legítima e incluso como plausible de ser reapropiada y resignificada por todos los actores. Pero por otro lado, se dio de la mano de los viejos actores el proceso de re-institucionalización de un “país normal”.

Una narración como dijimos es organización pero es en parte interpretación y la selección que hemos hecho de los dispositivos que ordenan los hechos día por día, forman parte de esa interpretación. La trama de la protesta hace hincapié sobre el quién, el cómo de la acción, con quien, contra quien y por qué, pues de allí se pueden comprender los motivos, intenciones, circunstancias, resultados esperados, etc., es decir la red conceptual que provee de inteligibilidad a la acción.

El hacer narrativo resignifica al mundo, por ende esa inteligibilidad en la que hacemos hincapié, es “ampliación de la legibilidad”, en términos de Ricoeur, por la que enriquecemos la comprensión del mundo y sobre todo comprensión sobre nosotros mismos.

Bibliografía

- AGUILA, G. y VIANO, C. (2007), “Del Rosariazo a los saqueos: dos contextos de movilización social regional en perspectiva comparada”, en *Postales del Sur*, http://www.postalesdelsur.net/ver_archi.php?que_notas=notas9.
- ARAVENA, Pablo (2005), “Historia, Narración y Sujeto: conversaciones con Fina Birulés”, en *Alpha*, N° 21, Diciembre, Osorno.
- ARENDETT, Hannah (1998), *La condición Humana*, Barcelona, Paidós.
- BALAGUER, Vicente (2002), *La interpretación de la narración. La teoría de Paul Ricoeur*, Barcelona, EUNSA.
- BASUALDO, Eduardo (2002), *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.
- DELLA Porta, D. y Diani, M. (1999), *Movimientos Sociales. Una introducción*, Oxford, Blackwell Publisher.
- DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2001), *A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência*, San Pablo, Cortez Editora.
- GARCÍA LINERA, Alvaro (2003), *Crisis estatal y muchedumbre*, en *OSAL*, N° 10, Año IV, Enero-Abril, Buenos Aires.
- MARIOTTI, D y WAHREN, J. (2004), “Territorios y protestas: Las rebeliones del 2001-2002 en el interior”, en Giarracca, N. y Teubal, M. (Comp.), *El campo argentino en la encrucijada*, Buenos Aires, Alianza Editorial.
- POLLETTA, Francesca (1998), “Contending stories. Narrative in social movements”, en *Qualitative Sociology*, Vol. 21, N° 4, Human Sciences Press. Inc., EEUU.
- RICOEUR, Paul (1996), *Tiempo y narración III*, México, Editorial Siglo XXI.
- RICOEUR, Paul (1998), *La teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido*, Madrid, Editorial Siglo XXI.
- RICOEUR, Paul (2006), *Del texto a la acción. Ensayos de Hermenéutica II*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- SCHUSTER, Federico et al. (2002), *La trama de la crisis. Modos y formas de protesta social a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001*, Informe de Coyuntura N° 3, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA.
- TEUBAL, M. y Rodríguez, J. (2001), “Neoliberalismo y crisis agraria”, en Giarracca, N. y colaboradores, *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Buenos Aires, Editorial Alianza.

Anexo I. Metodológico

En este apartado deseamos presentar las principales distribuciones y cruces por provincias del banco de datos construido en el marco de la investigación UBACYT en el Instituto Gino Germani. Estos bancos son generados por nosotros, investigadores, tesis, ayudantes del equipo y también intervienen alumnos avanzados de la Carrera de Sociología que cursan Seminarios dentro de nuestros proyectos, con prácticas de investigación concretas, tutorados por los investigadores. En el espacio del seminario se discuten los campos o variables a delimitar, los valores que asumen, etc. y ellos y nosotros buscamos la información en los diarios y la cargamos en la base. Algunos de aquellos alumnos son, ya egresados y estudiantes de posgrado, co-autores de este libro: Juan Wahren, María Comelli e Inés Petz. Recordamos que también tuvieron una participación activa más allá del seminario Cecilia Feijóo y Nicolás Pedroni. Sin poder personalizar a cada uno, deseamos mencionar a todos los estudiantes del Seminario de Protestas de la carrera de Sociología del primer cuatrimestre de 2002 y 2003.

Como decía Daniela Mariotti en el artículo metodológico que precede a este anexo realizamos un seguimiento de las protestas de 12 provincias. Los diarios utilizados para la realización tanto de la trama como de la base de datos fueron: La Gaceta (Tucumán), El Tribuno (Salta), El Liberal (Santiago del Estero), El Pregón (Jujuy), El Territorio (Misiones), Diario Norte (Chaco), El Diario de Paraná (Entre Ríos), La Voz del Interior (Córdoba), El Litoral (Santa Fe), Los Andes (Mendoza), El diario Río Negro (Río Negro y Neuquén), y los diarios nacionales. La selección de las doce provincias estuvo ligada a la efectiva disponibilidad del material periodístico. En ese momento varias provincias no enviaban sus periódicos a Buenos Aires, ni los colocaban en el espacio virtual. Es decir, es una muestra altamente representativa del conjunto de las provincias argentinas.

El banco de protestas toma el período que va del 15 de diciembre de 2001 al 15 de marzo de 2002. Es decir toma un período más amplio que el de la construcción de la trama (presentada en el capítulo “La Trama de una Rebelión Diciembre del 2001 a enero de 2002: las provincias”). Primero se generó el banco de protestas y luego fuimos analizando el momento más significativo para convertirlo en una narrativa. De allí el corte en el 31 de enero de 2002. La minuciosidad de la trama, de la narrativa, tiene por finalidad resaltar, básicamente, el momento de la irrupción.

El banco fue construido con el programa de estadística para Ciencias Sociales SPSS y, como siempre, contamos con la colaboración de todo el equipo

de investigación, sobre todo la de Pablo Barbeta. En esta construcción tratamos de mantener posibilidades de comparación con las otras bases de protestas de la década de 1990 construidas por nosotros y con la que tiene una cobertura nacional que lleva la consultora de Alejandro Gonda, que fue, también, estudiante de nuestros seminarios y que nos acompañó en el “Dossier Protesta” que –por invitación del IADE (Instituto Argentino de Desarrollo Económico)– construimos en su página en Internet (www.iade.org.ar) en aquel año 2002.

Algunos cuadros de esta última base de la rebelión de 2001-2002 fueron publicados en el artículo “Territorios y protestas: las rebeliones del 2001-2002 en el interior” de Mariotti y Wahren en el libro *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad*. Este complemento tiene como finalidad otorgar al público en general esta información que va reconstruyendo un período doloroso, complejo y fundamental de la historia reciente de la Argentina.

Anexo II. Cuadros

Cuadro 1. Distribución de expresiones de protesta por provincias, en %

Provincias	N	%
Santa Fe	165	12,9
Entre Ríos	122	9,6
Misiones	67	5,3
Chaco	144	11,3
Santiago del Estero	139	10,9
Jujuy	90	7,1
Salta	63	4,9
Tucumán	79	6,2
Mendoza	78	6,1
Córdoba	89	7,0
Neuquén	97	7,6
Río Negro	143	11,2
Total	1276	100,0

Fuente: GER. Banco de protestas de diciembre 2001 a marzo 2002.

Cuadro 2. Sujetos de la protesta por provincias, en %

Sujetos	Provincias														Total
	Santa Fe	Entre Ríos	Misiones	Chaco	Santiago del Estero	Jujuy	Salta	Tucumán	Mendoza	Córdoba	Neuquén	Río Negro	Total		
Desocupados	N	41	12	42	62	16	44	15	11	15	35	41	349		
	%	11,7	3,4	12,0	17,8	4,6	12,6	4,3	3,2	4,3	10,0	11,7	100,0		
Vecinos	N	68	50	12	32	32	21	14	41	40	31	20	403		
	%	16,9	12,4	3,0	7,9	7,9	5,2	3,5	10,2	9,9	7,7	5,0	100,0		
Trabajadores industriales y de servicios	N	26	12	0	6	12	7	21	9	2	16	20	145		
	%	17,9	8,3	0,0	4,1	8,3	4,8	14,5	6,2	1,4	11,0	13,8	100,0		
Docentes	N	20	20	1	9	12	14	3	6	3	2	3	112		
	%	17,9	17,9	0,9	8,0	10,7	12,5	2,7	5,4	2,7	1,8	2,7	100,0		
Empleados Estatales	N	18	25	10	34	65	22	14	9	22	22	23	289		
	%	6,2	8,7	3,5	11,8	22,5	7,6	4,8	3,1	7,6	7,6	8,0	100,0		
Comerciantes	N	21	22	0	0	3	3	3	2	7	13	4	84		
	%	25,0	26,2	0,0	0,0	3,6	3,6	3,6	2,4	8,3	15,5	4,8	100,0		
Productores Agrarios empresariales	N	18	4	0	2	0	0	2	1	3	4	0	39		
	%	46,2	10,3	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	2,6	7,7	10,3	0,0	100,0		
Productores Familiares	N	0	4	12	6	1	1	1	0	0	2	0	28		
	%	0,0	14,3	42,9	21,4	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	7,1	0,0	100,0		
Estudiantes	N	5	6	0	2	3	5	1	2	1	1	2	29		
	%	17,2	20,7	0,0	6,9	10,3	17,2	3,4	6,9	3,4	3,4	6,9	100,0		
Partidos Políticos	N	4	7	0	1	3	2	2	5	3	0	4	32		
	%	12,5	21,9	0,0	3,1	9,4	6,3	6,3	15,6	9,4	0,0	12,5	100,0		
Jubilados	N	3	9	1	1	3	0	1	0	1	0	0	25		
	%	12,0	36,0	4,0	4,0	12,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	100,0		
Trabajadores Rurales	N	2	0	4	1	0	1	0	1	0	0	0	9		
	%	22,2	0,0	44,4	11,1	0,0	11,1	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	100,0		
Aborígenes	N	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	5		
	%	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	100,0		
Organismos de Derechos Humanos	N	2	2	0	2	3	3	3	0	0	0	3	20		
	%	10,0	10,0	0,0	10,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	100,0		
Otros	N	1	12	1	9	9	8	7	6	0	6	4	74		
	%	1,4	16,2	1,4	12,2	12,2	10,8	9,5	8,1	0,0	8,1	5,4	100,0		
Total	N														1643

Fuente: GER. Banco de protestas de diciembre 2001 a marzo 2002.

Nota: El IN total por provincia puede ser distinto al número real de protestas registradas en cada provincia ya que una misma protesta pudo haber sido realizada por más de un sujeto.

Universalismo pequeño N^o2

• 151

Cuadro 3. Forma de las acciones de protesta por provincias, en %

Forma de protesta	Provincias													Total
	Santa Fe	Entre Ríos	Misiones	Chaco	Santiago del Estero	Jujuy	Salta	Tucumán	Mendoza	Córdoba	Neuquén	Río Negro		
Movilización	N	76	30	16	42	35	32	19	22	30	22	31	57	412
	%	18,4	7,3	3,9	10,2	8,5	7,8	4,6	5,3	7,3	5,3	7,5	13,8	100,0
Cortes de ruta	N	11	8	25	10	2	24	10	6	5	10	12	10	133
	%	8,3	6,0	18,8	7,5	1,5	18,0	7,5	4,5	3,8	7,5	9,0	7,5	100,0
Olla popular	N	5	0	8	18	4	0	4	4	0	5	1	2	51
	%	9,8	0,0	15,7	35,3	7,8	0,0	7,8	7,8	0,0	9,8	2,0	3,9	100,0
Asamblea, plenarios, actos	N	15	15	1	4	5	6	1	7	1	4	9	6	74
	%	20,3	20,3	1,4	5,4	6,8	8,1	1,4	9,5	1,4	5,4	12,2	8,1	100,0
Presentación de cartas, documentos, intimaciones y solicitudes	N	7	14	2	18	17	4	9	1	3	3	0	5	83
	%	8,4	16,9	2,4	21,7	20,5	4,8	10,8	1,2	3,6	3,6	0,0	6,0	100,0
Repudio, escrache	N	2	7	0	6	2	2	1	2	2	7	2	3	36
	%	5,6	19,4	0,0	16,7	5,6	5,6	2,8	5,6	5,6	19,4	5,6	8,3	100,0
Paro	N	14	10	4	20	24	8	13	10	4	9	14	8	138
	%	10,1	7,2	2,9	14,5	17,4	5,8	9,4	7,2	2,9	6,5	10,1	5,8	100,0
Cacerolazo	N	13	15	6	11	10	6	4	19	15	14	8	24	145
	%	9,0	10,3	4,1	7,6	6,9	4,1	2,8	13,1	10,3	9,7	5,5	16,6	100,0
Saqueo	N	7	13	1	2	8	1	0	3	9	3	4	4	55
	%	12,7	23,6	1,8	3,6	14,5	1,8	0,0	5,5	16,4	5,5	7,3	7,3	100,0
Ocupación de espacio privado (tierras y casas)	N	3	1	0	2	7	0	1	0	0	2	4	4	24
	%	12,5	4,2	0,0	8,3	29,2	0,0	4,2	0,0	0,0	8,3	16,7	16,7	100,0
Ocupación de espacio público	N	6	2	1	9	13	3	0	0	7	6	8	13	68
	%	8,8	2,9	1,5	13,2	19,1	4,4	0,0	0,0	10,3	8,8	11,8	19,1	100,0
Otros	N	6	7	3	2	12	4	1	5	2	4	4	7	57
	%	10,5	12,3	5,3	3,5	21,1	7,0	1,8	8,8	3,5	7,0	7,0	12,3	100,0
Total	N													1276

Fuente: GER. Banco de protestas de diciembre 2001 a marzo 2002.

Cuadro 4. Tipo de reclamo por provincias, en %

Tipo de reclamo	Provincias													Total
	Santa Fe	Entre Ríos	Misiones	Chaco	Santiago del Estero	Jujuy	Salta	Tucumán	Mendoza	Córdoba	Neuquén	Río Negro		
Políticas económicas en general	N	53	29	2	11	11	8	11	4	6	14	11	18	178
	%	29,8	16,3	1,1	6,2	6,2	4,5	6,2	2,2	3,4	7,9	6,2	10,1	100,0
Políticas económicas agrarias	N	2	3	7	4	2	1	0	1	1	0	0	5	26
	%	7,7	11,5	26,9	15,4	7,7	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0	19,2	100,0
Políticas económicas industriales y servicios	N	5	2	1	1	2	1	5	2	0	1	4	0	24
	%	20,8	8,3	4,2	4,2	8,3	4,2	20,8	8,3	0,0	4,2	16,7	0,0	100,0
Políticas educativas, salud y cultura	N	13	17	1	7	2	7	1	9	3	3	8	32	103
	%	12,6	16,5	1,0	6,8	1,9	6,8	1,0	8,7	2,9	2,9	7,8	31,1	100,0
Violación a los derechos humanos	N	2	4	0	3	0	0	2	0	0	1	2	0	14
	%	14,3	28,6	0,0	21,4	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	7,1	14,3	0,0	100,0
Demandas laborales	N	44	22	22	65	72	21	20	17	18	32	36	41	410
	%	10,7	5,4	5,4	15,9	17,6	5,1	4,9	4,1	4,4	7,8	8,8	10,0	100,0
Mal desempeño de la función pública	N	0	2	3	3	12	2	1	12	18	4	5	6	68
	%	0,0	2,9	4,4	4,4	17,6	2,9	1,5	17,6	26,5	5,9	7,4	8,8	100,0
Alimentos, vestimenta y colchones	N	13	14	13	18	12	3	2	5	11	6	9	12	118
	%	11,0	11,9	11,0	15,3	10,2	2,5	1,7	4,2	9,3	5,1	7,6	10,2	100,0
Justicia	N	0	13	0	8	1	5	0	2	2	1	5	9	46
	%	0,0	28,3	0,0	17,4	2,2	10,9	0,0	4,3	4,3	2,2	10,9	19,6	100,0
Trabajo y alimentos	N	26	1	15	12	9	28	8	6	3	5	7	10	130
	%	20,0	0,8	11,5	9,2	6,9	21,5	6,2	4,6	2,3	3,8	5,4	7,7	100,0
Que se vayan todos	N	5	3	2	2	1	5	0	14	14	15	3	3	67
	%	7,5	4,5	3,0	3,0	1,5	7,5	0,0	20,9	20,9	22,4	4,5	4,5	100,0
Otros	N	2	12	1	10	15	9	13	7	2	7	7	7	92
	%	2,2	13,0	1,1	10,9	16,3	9,8	14,1	7,6	2,2	7,6	7,6	7,6	100,0
Total	N													1276

Fuente: GER. Banco de protestas de diciembre 2001 a marzo 2002.

Cuadro 5. Actores demandados por provincias, en %

Actores demandados	Provincias													Total
	Santa Fe	Entre Ríos	Misiones	Chaco	Santiago del Estero	Jujuy	Salta	Tucumán	Mendoza	Córdoba	Neuquén	Río Negro	Total	
Poder Ejecutivo Nacional	N	20	7	3	9	5	5	13	6	5	9	7	94	
	%	21,3	7,4	3,2	9,6	5,3	5,3	13,8	6,4	5,3	9,6	7,4	100,0	
Poder Ejecutivo Provincial	N	30	54	13	48	12	45	18	25	11	26	37	341	
	%	8,8	15,8	3,8	14,1	3,5	13,2	5,3	7,3	3,2	7,6	10,9	100,0	
Municipal	N	36	2	26	54	83	15	17	45	25	24	53	396	
	%	9,1	0,5	6,6	13,6	21,0	3,8	4,3	11,4	6,3	6,1	13,4	100,0	
PEN y PEP	N	11	8	6	12	14	17	6	6	9	4	12	108	
	%	10,2	7,4	5,6	11,1	13,0	15,7	5,6	5,6	8,3	3,7	11,1	100,0	
Empresas Privadas	N	33	16	7	5	16	5	10	6	9	13	15	151	
	%	21,9	10,6	4,6	3,3	10,6	3,3	6,6	4,0	6,0	8,6	9,9	100,0	
Poder Judicial Nacional	N	1	5	1	5	1	1	0	0	0	0	7	29	
	%	3,4	17,2	3,4	17,2	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	100,0	
Entidades financieras locales	N	32	10	1	5	2	0	1	0	6	2	0	59	
	%	54,2	16,9	1,7	8,5	3,4	0,0	1,7	0,0	10,2	3,4	0,0	100,0	
Organismos y representantes internacionales	N	0	4	0	0	1	1	0	12	0	5	1	24	
	%	0,0	16,7	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	50,0	0,0	20,8	4,2	100,0	
Poder legislativo	N	0	1	4	0	0	1	0	1	0	1	1	10	
	%	0,0	10,0	40,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	100,0	
Otros	N	2	15	6	6	5	0	5	3	0	5	9	64	
	%	3,1	23,4	9,4	9,4	7,8	0,0	7,8	4,7	0,0	7,8	14,1	100,0	
Total	N												1276	

Fuente: GER. Banco de protestas de diciembre 2001 a marzo 2002.

Anexo III. Los asesinados en estas rebeliones

2001

19 de Diciembre:

Ariel Maximiliano Salas: Murió en un saqueo por disparos de un comerciante en la esquina de Maciel y Cristianía en la localidad de Gregorio Laferrere, en el Partido de La Matanza del Gran Buenos Aires. Tenía 30 años.

Claudio "Pocho" Lepratti: Murió a manos de la policía en el barrio Las Flores de la ciudad de Rosario, Santa Fe, mientras intentaba frenar la represión en el comedor comunitario donde militaba. Era militante de la CTA. Tenía 35 años.

Damián Vicente Ramírez: Murió durante un saqueo una carnicería por disparos efectuados por un comerciante en la localidad de Gregorio Laferrere, en el Partido de La Matanza del Gran Buenos Aires. Tenía 14 años.

Diego Ávila: Murió de un disparo en la cabeza, efectuado por el dueño de un supermercado que estaba siendo saqueado en Villa Fiorito, Gran Buenos Aires. Tenía 24 años.

Eduardo Cristian Legembre: Murió por el disparo de un comerciante durante un saqueo a un supermercado en Castelar, Gran Buenos Aires. Tenía 20 años.

Elvira Avaca: Murió a causa de un disparo durante un saqueo en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. Tenía 46 años.

Graciela Acosta: Murió por un disparo en el abdomen mientras retiraba a sus hijos de la escuela en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. Era militante de Derechos Humanos. Tenía 35 años.

Juan Alberto Delgado: Murió en la ciudad de Rosario, Santa Fe, en las calles Necochea y Pasco. Las balas que le dieron muerte fueron disparadas por efectivos de la Policía Provincial de Santa Fe que se encontraban reprimiendo en la zona. Era un trabajador desocupado. Tenía 28 años.

Juan Alberto Torres: Murió a causa de heridas provocadas por disparos de fuego durante una represión policial en la ciudad de Corrientes. Falleció en el Hospital Vidal. Tenía 21 años.

Julio Hernán Flores: Murió por el disparo de un comerciante mientras participaba en un saqueo en el Partido de Merlo, Gran Buenos Aires. Tenía 15 años.

Mariela Rosales: Murió por disparos de un comerciante durante un saqueo en la localidad de Villa Centenario de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires. Tenía 28 años.

Miguel Passini: Murió en Cabaña Leiva, provincia de Santa Fe durante un saqueo, aparentemente por disparos de un comerciante. Tenía 15 años.

Pablo Marcelo Guías Díaz: Murió de un disparo de arma de fuego en San Francisco Solano, Quilmes, durante los saqueos en el Gran Buenos Aires. Tenía 23 años.

Ramón Alberto Arapi: Murió de un disparo de Itaka mientras la Policía Provincial reprimía un saqueo en el barrio San Marcelo de la capital de Corrientes. Tenía 22 años.

Ricardo Álvarez Villalba: Murió por heridas ocasionadas por disparos de armas presuntamente policiales durante un saqueo un comercio del barrio Ludueña de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Falleció en el hospital local el día 23 de diciembre. Tenía 16 años.

Roberto Agustín Gramajo: Murió de un disparo luego de un saqueo a un supermercado de la localidad de Don Orione, Partido de Almirante Brown, en el Gran Buenos Aires. Se encontraba junto a un grupo de jóvenes que estaba siendo perseguido por la Policía. Según el testimonio de un vecino dos policías dispararon hacia los jóvenes con balas de plomo una de la cuales atravesó la cabeza de Roberto quien murió en el acto. Tenía 19 años.

Rubén Alejandro Pereyra: Murió también en el barrio Las Flores de Rosario, durante un saqueo. Tenía 20 años.

Sandra Ríos: Murió presuntamente en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Tenía 19 años.

Víctor Ariel Enrique: Murió en el mismo saqueo de Don Orione, Partido de Almirante Brown en el Gran Buenos Aires. Recibió los disparos mortales en la vereda del comercio. Tenía 21 años.

Yanina García: Murió de un disparo en el abdomen cuando desesperada por los ruidos de las balas, salió a la vereda a buscar a su pequeña hija, también en Rosario, Santa Fe, en las calles Pasco y Gutemberg. Tenía 18 años.

Carlos Manuel Spinelli: Murió en Pablo Nogués, provincia de Buenos Aires, a raíz de disparos efectuados desde un auto Gol blanco sin identificación. Tenía 25 años.

Jorge Cárdenas: sufrió heridas graves por balas de plomo policiales en la noche del 19 de diciembre. Quedó tendido en las escalinatas del Congreso Nacional luego que se desatara una feroz represión al cacerolazo espontáneo que se congregó en los alrededores de la Plaza Congreso. Murió el 27 de junio de 2002 a causa de las heridas de bala recibidas ese día. Tenía 52 años.

José Vega: murió baleado por un comerciante, en Moreno, provincia de Buenos Aires. Tenía 19 años.

20 de Diciembre:

Alberto Márquez: Murió durante la represión policial en la esquina de Carlos Pellegrini y Sarmiento. Los disparos que le causaron la muerte fueron efectuados por un grupo de policías que se movilizaban en una camioneta 4x4 y en un Fiat Palio color blanco. Alberto trabajaba en la sede central de Provincia Seguros, del Banco Provincia de Buenos Aires, ubicado a pocas cuadras de donde murió. Tenía 57 años.

Carlos “Petete” Almirón: Murió también durante los enfrentamientos cercanos a Plaza de Mayo por balas policiales que impactaron en su tórax. Era militante de la “Coordinadora de Desocupados 29 de Mayo” de Lanús en el Gran Buenos Aires y de la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional). Estudiaba sociología y tenía 23 años.

David Ernesto Moreno: Murió a causa de disparos efectuados por la Policía de Córdoba mientras era saqueado un pequeño supermercado de Villa 9 de Julio en la ciudad de Córdoba. Tenía 13 años.

Diego Lamagna: Murió por un perdigón de plomo en el pecho efectuado por la Policía Federal durante los enfrentamientos cercanos a Plaza de Mayo. Era deportista amateur y hacía acrobacias en bicicleta. Tenía 27 años.

Eloisa Rosa Paniagua: Murió de una bala aparentemente policial durante un saqueo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Tenía 13 años.

Gastón Riva: Murió por la represión de la Policía Federal durante los enfrentamientos en las calles aledañas a Plaza de Mayo en Capital Federal. Participaba de la manifestación con su moto, ya que trabajaba de mensajero y participaba en el SIMECA (Sindicato de Mensajeros y Cadetes). Los motoqueros fueron uno de los grupos protagonistas de la jornada. Tenía 30 años y tres hijos.

Gustavo Benedetto: Murió durante los enfrentamientos en Avenida de Mayo y Chacabuco, frente al Banco HSBC. Las balas que lo asesinaron partieron desde dentro del banco y fueron disparadas por los custodios del mismo. Uno de los custodios, que se encuentra procesado por este hecho es un ex militar del Ejército que también actuó en la represión del levantamiento de La Tablada. Tenía 23 años.

Luis Alberto Fernández: Murió a causa de heridas provocadas por disparos de armas de fuego efectuados por un gendarme durante enfrentamientos en un saqueo en la ciudad capital de Tucumán. Falleció el 23 de diciembre en el Hospital local. Era vendedor ambulante de frutas. Tenía 27 años.

Romina Iturain: Murió en Paraná, Entre Ríos, mientras observaba una represión policial desde la puerta de su casa. Tenía 15 años.

Rubén Darío Aredes: Murió a causa de cuatro balazos disparados por la Policía mientras participaba en un corte de calles en Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Falleció al día siguiente en el Hospital Santojanni. Tenía 24 años.

José Daniel Rodríguez: Apareció muerto en las cercanías de un supermercado el 30 de diciembre de 2001 tapado de neumáticos en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Su última aparición pública fue el 20 de diciembre en una marcha espontánea, motivada por el estado de violencia institucional y represión que ocasionaron la muerte de las menores Eloisa Paniagua y Romina Iturain. Era militante de la CCC. Tenía un poco más de 20 años.

Sergio Miguel Ferreira: Murió un año después a raíz de una complicación hepática desencadenada por el balazo en el hígado recibido cuando la policía cordobesa reprimió duramente un saqueo a un supermercado del barrio Villa El Libertador, Córdoba. Tenía 20 años.

Sergio Pedernera: Falleció el 26 de diciembre de 2002 en un hospital de Córdoba a causa de una bala policial que se alojó en su tórax y le produjo una paraplejía. Vivía con su familia en una zona humilde de la ciudad de Córdoba, Costa Canal, Barrio Villa El Libertador. Tenía 16 años.

21 de Diciembre:

Walter Campos: Murió por disparos efectuados por la Policía Provincial cuando se encontraba esperando cajas de comida junto a cientos de personas frente a un supermercado en Rosario, Santa Fe. Tenía 16 años.

29 de Diciembre: La Masacre de Floresta

La noche del 23 de diciembre tres jóvenes se encontraban tomando unas cervezas en un maxikiosco del barrio de Floresta en Capital Federal. Mientras observaban una manifestación que se estaba produciendo en ese momento en Plaza de Mayo donde se registraban enfrentamientos con la Policía, estos jóvenes realizaron exclamaciones de apoyo a los manifestantes, lo cual enfureció al custodio del local, quien les disparó a quemarropa a los tres jóvenes, asesinándolos en el acto. En este hecho fueron asesinados:

- Cristian Gómez: era bajista del grupo de rock La Gaucha. Tenía 25 años.
- Maximiliano Tasca: era estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador y tocaba el bombo en una murga de Floresta. Tenía 25 años.
- Adrián Matassa: Tenía 23 años.

2002

6 de febrero: Esteban Echeverría, la muerte en un piquete. . .

Javier Barrionuevo fue asesinado en la madrugada del martes 6 de febrero de 2002 mientras participaba, por primera vez, en un corte de ruta del MTD de Esteban Echeverría, en el conurbano bonaerense. Fue asesinado por un puntero político de la zona, quien disparó sobre él desde su auto cuando fue detenido en el piquete. Javier Barrionuevo era desocupado y tenía 31 años. Actualmente el MTD de Esteban Echeverría lleva su nombre como homenaje.

26 de Junio: La masacre de Avellaneda

El 26 de junio de 2002, durante una importante protesta de diversos movimientos de Trabajadores Desocupados se desató una feroz represión a aquellas organizaciones que cortaban el Puente Pueyrredón que une la Capital Federal con Avellaneda. Además de decenas de heridos y detenidos, la represión policial provocó la muerte de dos jóvenes militantes del MTD Aníbal Verón: Darío Santillán (21 años) y Maximiliano Kosteki (22 años) quienes fueron asesinados a quemarropa por efectivos policiales en la Estación de trenes de Avellaneda, distante a más de diez cuadras del Puente Pueyrredón.

Nota:

La reconstrucción de la lista de los asesinados resultó un trabajo complicado debido a la dispersión de la información existente acerca de estos hechos y, al no haber una investigación judicial ni periodística unificada, algunos datos aparecen contradictorios, sobre todo con respecto a las edades y circunstancias exactas de los hechos causantes de las muertes. Es probable que en esta lista existan errores u omisiones involuntarias. Por ello pedimos disculpas.

Fuentes:

Agencia periodística La Vaca: <http://lavaca.org/seccion/actualidad/1/1265.shtml>.

Anred: http://www.anred.org/article.php3?id_article=1887.

Archivo Abierto Derechos Humanos Rosario/Argentina: www.ddhhrosario.org.ar

Comisión por la verdad 20 de diciembre de 2001: <http://www.20diciembre.org.ar>.

Diario Clarín: <http://www.clarin.com/diario/2002/01/20/p-01415.htm>.

Diario del Juicio - Masacre de Avellaneda: www.masacredeavellaneda.org

La Fogata: http://www.lafogata.org/02argentina/argentina/19__1/datos.htm.

Nicolás Loyarte: <http://www.siempretarde.com/culturita/agosto2002/cronopios.asp>.

Partido Revolucionario de los Trabajadores: <http://www.prt-argentina.org.ar/tabla.html>.

Universalismo pequeño N°2



Foto: Luis María Herr

Imágenes



Foto: Luis María Herr



Foto: Federico Bareiro

Universalismo pequeño N°2



Foto: Federico Bareiro

Imágenes



Foto: Luciana García Guerreiro

Universalismo pequeño N°2



Foto: Luciana García Guerreiro

Imágenes



Foto: Luis María Herr



Foto: Luis María Herr

Universalismo pequeño N°2



Foto: Luis María Herr

Imágenes



Foto: Miguel Teubal



Foto: Miguel Teubal